

# *Poder Judicial de la Nación*

## PROTOCOLIZADO

T102 Ac.6/14 Mat. Penal  
FCB 038737/2019/to1

Córdoba, 29 de septiembre de 2025.

### VISTOS:

Estos autos caratulados: “**CUPPER RICARDO ESTEBAN Y OTROS S/ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Y ALTERACIÓN DOLOSA DE REGISTROS QUERELLANTE**” (FCB N° 38737/2019/TO1), que tramitan ante este Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba, conformado de manera unipersonal por el señor Juez de Cámara, Dr. **Julián FALCUCCI**, se encuentran a despacho para emitir los fundamentos de la sentencia que concluyó el debate oral y público desarrollado en presencia del señor Secretario de Cámara, Dr. Hernán Moyano Centeno y en el que actuaron el Dr. **Carlos GONELLA**, como Fiscal General, la Dra. **María Elisa DIEZ** letrada apoderada de la parte querellante ARCA, los Dres. **Gastón Ignacio SCHONFELD y Esteban Alexis TRUCCO**, abogados defensores de Ricardo Esteban Cupper, los Dres. **Benjamín SONZINI ASTUDILLO y Benjamín SONZINI ASTUDILLO (h)**, en representación técnica de Raúl Horacio Molina y el Dr. **Alejandro David RIOS CASTRO**, en ejercicio del patrocinio letrado de Rubén Daniel Sánchez.

Este proceso involucró penalmente a tres personas cuyas condiciones personales se detallan a continuación.

**Ricardo Esteban Cupper**, argentino, D.N.I. N° 12.876.307, nacido el día 28 de marzo de 1957 en la ciudad de Córdoba, hijo de Ricardo Cupper (f) y de Leonor del Valle Torres (f). De estado civil casado, es padre de cinco hijos: tres de su primera pareja y dos de su actual cónyuge. Convive con su esposa y con uno de sus hijos, de 23 años de edad, quien se encuentra cursando estudios. Fija domicilio en calle Mercedario N° 382/2082, Barrio Parque Capital, de esta ciudad de Córdoba, en una vivienda alquilada por la suma de \$320.000 mensuales.

USO OFICIAL





En cuanto a su situación laboral, refirió haber trabajado en diversas empresas, desempeñándose en tareas administrativas en la firma Pretensa y en Industria Papelera S.A. también cumplió funciones de cadete. Se jubiló en el mes de mayo de 2023.

Al tiempo de los hechos (año 2019), realizaba gestiones independientes para distintos estudios, consistentes, entre otras, en trámites ante EPEC o en la presentación de notas en la municipalidad. Asimismo, obtenía ingresos mediante la venta de pinturas y otros bienes.

Con respecto a su situación económica, indicó que actualmente es jubilado nacional con un haber mensual de \$330.000, y que su esposa contribuye con ingresos propios a la manutención del hogar. Ambos asisten económicamente al hijo que convive con ellos. Además de la jubilación, se dedica a la venta de pinturas, percibiendo comisiones por dicha actividad. Señaló que recibía un listado de edificios en construcción para ofrecer productos de las marcas “Tersuave” y “Paclín”, tarea que inicialmente desarrollaba a través de un local comercial denominado “Colorama”, sito en Av. Vélez Sarsfield N° 659, y que, tras el cierre de dicho negocio, continúa en contacto con su propietario. Asimismo, se desempeña como pintor y realiza trabajos de electricidad.

Agregó que, al momento de los hechos, tenía participación en la sociedad “Rioja S.A.S.”.

Respecto a su formación académica, cursó estudios universitarios hasta segundo año de la carrera de Ingeniería Agrónoma, sin haberlos concluido.

En lo atinente a su estado de salud, manifestó padecer desde hace más de siete años gastritis y osteoporosis, lo que le provoca dificultad para caminar. Se encuentra bajo tratamiento médico específico con medicación para sus dolencias, realiza rehabilitación para la rodilla y cumple controles médicos mensuales. Posee cobertura social a través de PAMI.

No registra antecedentes penales computables conforme informe emitido por Registro Nacional de Reincidencias, recibido el pasado 16/5/2025.

**Raúl Horacio Molina**, argentino, D.N.I. N° 12.670.557, nacido el día 16

de noviembre de 1956 en la ciudad de Córdoba, hijo de Ernesto Molina (f) y de





## *Poder Judicial de la Nación*

Lelya Reynoso (f). De estado civil viudo, es padre de un hijo con quien convive en el domicilio sito en calle Luis de Azpeitia N° 2630, Barrio Alto Alberdi, de esta ciudad. El mismo se trata de una vivienda propia.

Se desempeñó como docente en el nivel medio, habiendo ejercido la docencia durante aproximadamente veinticuatro a veintisiete años en los establecimientos educativos “Las Pías” y “Santo Tomás” de la ciudad de Córdoba, y en una escuela pública de la localidad de General Roca, provincia de Río Negro, dictando materias vinculadas a las ciencias sociales, principalmente historia. Se encuentra jubilado como docente desde el año 2017, percibiendo actualmente un haber previsional mensual de \$1.100.000.

Comenta que su hijo, con quien convive, estudia y trabaja; es titular de una parcela de campo de la que percibe un canon locativo mensual, con el cual colabora en el sostenimiento del hogar.

En cuanto a su profesión es licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Católica de Córdoba, y es Director Técnico Nacional de Fútbol.

En cuanto a la movilidad, refiere que se maneja a pie o bien con el vehículo de su hijo, o éste lo traslada cuando le es posible. En oportunidad del allanamiento practicado en el año 2019, fueron secuestrados un vehículo marca Toyota Etios de titularidad de su cónyuge fallecida y un Fiat Palio de propiedad de su hijo, los cuales —según manifestó— no guardan relación alguna con la presente causa. Hasta la fecha desconoce el paradero de ambos rodados, no obstante, continúa abonando los tributos municipales y provinciales correspondientes.

En lo que respecta a su estado de salud, presenta diagnóstico de enfisema pulmonar, amnesia severa de sueño —siendo candidato a tratamiento con dispositivo CPAP—, litiasis renal bilateral que requiere intervención quirúrgica, y prostatitis, encontrándose bajo cobertura de la obra social APROSS.

Tampoco registra antecedentes penales computables conforme informe emitido por Registro Nacional de Reincidencias, recibido el pasado 16/5/2025.

USO OFICIAL





**Rubén Daniel Sánchez**, argentino, D.N.I. N° 13.150.284, nacido el 14 de mayo de 1957 en la Ciudad de Córdoba, apodado “Gallego”, hijo de Antonio Sánchez (f) y de Inés Martín (f). De estado civil divorciado, es padre de cuatro hijas, la mayor de ellas fallecida. Convive con su hija menor, de 28 años de edad, en la vivienda sita en calle Mariano Larra N° 3823, Barrio Urca, de esta ciudad de Córdoba, la cual ocupa en carácter de inquilino, abonando un alquiler mensual de \$665.000.

De profesión contador público, se encuentra jubilado a nivel nacional y continúa ejerciendo parcialmente dicha profesión. Manifiesta percibir ingresos aproximados de \$335.000 por su haber jubilatorio, \$395.000 provenientes de la renta de un inmueble heredado y alrededor de \$150.000 derivados de escasos clientes que aún atiende en el ejercicio de la profesión, contando además con aportes económicos de sus hijas. Señala que su hija mayor reside en Andorra y le remite ocasionalmente dinero, en tanto que su hija menor es contadora pública y trabaja en relación de dependencia.

Respecto a su jubilación, indicó haber trabajado casi catorce (14) años en el Ministerio de Acción Social y de Trabajo de la Nación, durante el período de gobierno militar, y posteriormente en la Procuración del Tesoro dependiente de la Fiscalía de Estado del Gobierno de la Provincia de Córdoba, hasta el momento de los hechos.

En relación con su trayectoria laboral, manifestó haber sido auditor de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) hasta el 27 de abril de 1999, oportunidad en la que optó por el retiro voluntario a fin de solventar deudas derivadas de la enfermedad de su hija mayor, quien finalmente falleció en 1995. Tras ello, ejerció de manera independiente su profesión, instalando sucesivamente estudios contables en Av. General Paz 120; en Duarte Quirós esquina Arturo M. Bas; en Arturo M. Bas entre Montevideo y Bv. San Juan; luego en calle Corro 524, departamento 2; y posteriormente en calle Ángel Suárez, hasta alquilar una vivienda en calle Corro 187, entre Caseros y 27 de Abril, donde tuvo lugar el allanamiento.

Refirió asimismo haber ejercido la docencia por un año en el Colegio

**Santo Tomás** y haber trabajado en relación de dependencia en una empresa





## *Poder Judicial de la Nación*

dedicada a la comercialización de cubiertas “Firestone”. Señaló que actualmente atiende a algunos clientes en su domicilio particular. Figuró como suplente en la constitución de una Sociedad por Acciones Simplificada denominada Crecer S.A.S.

Aclaró no tener personas a su cargo, ni en el plano físico, ni económico, ni emocional.

Se moviliza en transporte público.

En cuanto a su estado de salud, padece hipertensión y diabetes tipo II; refirió haber sufrido un infarto con la colocación de un stent coronario, lo que le exige tratamiento médico permanente y controles anuales. Asimismo, manifestó atravesar un cuadro depresivo bajo tratamiento psiquiátrico. Posee cobertura médica a través de la obra social PAMI.

Carece de antecedentes penales computables, conforme surge del informe emitido por el Registro Nacional de Reincidencias, recibido con fecha 16 de mayo de 2025.

A los nombrados, conforme surge del auto de elevación de la causa a juicio (fs. 1532/1545) se le atribuye la comisión de los siguientes hechos: “I) **HECHO PRIMERO** (se corresponde con el hecho nominado como Primero en el requerimiento de instrucción de fecha 08/10/2019 - 302/307-): Desde fecha no determinada con exactitud, pero anterior al 08 de octubre del 2019, Raúl Horacio MOLINA, Rubén Daniel SANCHEZ y Ricardo Esteban CUPPER habrían organizado una asociación destinada a cometer delitos contemplados en las leyes N° 24.769 y/o N° 27.430, más precisamente los nombrados se habrían dedicado a la obtención ilegítima de claves fiscales, la posterior alteración dolosa de los registros de diversos contribuyentes ante AFIP, para finalmente colaborar en la evasión de impuestos y/o fraude fiscal cometidos por distintos contribuyentes a través del uso de facturas apócrifas. Esta operación habría consistido en la obtención de claves fiscales de distintos contribuyentes por parte de Ricardo Esteban CUPPER, desplegando distintos tipos de ardides, para luego poner esta información a disposición de Raúl Horacio MOLINA y Rubén Daniel SANCHEZ materia contable, modificaban las contraseñas de las

USO OFICIAL





claves fiscales apropiadas, manipulaban los datos y la actividad ante AFIP de los distintos contribuyentes. Luego de esto, ante el requerimiento de distintos clientes que pretendían evitar tributar el total de impuestos que les correspondían, Raúl Horacio MOLINA y Rubén Daniel SANCHEZ habrían emitido un número no determinado con exactitud hasta el momento de facturas apócrifas (digitales y en papel) para entregárselas a los solicitantes a fin de que consignaran en sus declaraciones juradas los créditos fiscales, que de esa forma reducían el débito fiscal correspondiente. Asimismo, a los fines de evitar que la AFIP advirtiera estas maniobras, los nombrados habrían equilibrado la relación entre el débito y crédito fiscal de los contribuyentes apócrifos a través de la registración de compras falsas (CITI COMPRAS) valiéndose de personas físicas o jurídicas que ellos mismos administraban. De esta manera la organización delictiva producía en principio un doble perjuicio, por una parte los contribuyentes “clientes” de la organización evadían los tributos que les correspondía pagar, y por otra parte los contribuyentes “víctimas” de la organización perdían el manejo de sus claves y veían alterados sus registros fiscales. **HECHO SEGUNDO** (se corresponde con el hecho nominado como Segundo en el requerimiento de instrucción de fecha 08/10/2019 -fs. 302/307-): En el marco del hecho que antecede, a finales del mes de diciembre del año 2018 Ricardo Esteban CUPPER habría iniciado una relación de pareja con Sandra Mónica HURTADO, a quien alegando ser dueño de un frigorífico y gestor de facturas, convenció de generar una empresa a su nombre a cambio de la promesa de abonarle mil pesos semanales. Luego de ello, los primeros días del mes de enero del año 2019, a los fines de llevar a cabo la gestión asumida, Ricardo Esteban CUPPER y Sandra Mónica HURTADO concurren a la delegación Córdoba de AFIP a los fines de realizar el blanqueo de clave fiscal de la nombrada. En este contexto, Ricardo Esteban CUPPER se apropió de la Clave Fiscal de HURTADO, para luego hacérsela llegar a Raúl Horacio MOLINA y Rubén Daniel SANCHEZ, quienes con fecha 14 de enero de 2019 habrían dado de baja el régimen del monotributo que registraba la nombrada, para inscribirla como trabajadora autónoma, con la consecuente inscripción en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a las Ganancias, todo esto con





## *Poder Judicial de la Nación*

la finalidad de realizar las actividades que constituyen el objeto de la asociación ilícita descripta en el hecho precedente. Así las cosas, entre el 7 de febrero del 2019 y el 29 de marzo de 2019, los nombrados y/o personas no identificadas a requerimiento de los mismos, habrían ingresado a los registros informáticos de AFIP con la clave fiscal de Sandra Mónica HURTADO y habrían emitido al menos 39 facturas falsas, por un monto total de Tres Millones Doscientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro con 16/100 pesos (\$ 3.288.654,16) que habrían sido comercializadas a las personas físicas y jurídicas que serían clientes de la organización delictiva. Estas maniobras ocasionaron un importante perjuicio a la AFIP-DGI y a la Sra. Sandra Mónica HURTADO, ya que debido a lo relatado fue dada de baja del régimen del monotributo, perdió la posibilidad de librar las facturas por sus servicios y de percibir su sueldo.”

### **Y CONSIDERANDO:**

El Tribunal se constituyó, de manera unipersonal, en audiencia pública para resolver, en definitiva, la situación procesal de los imputados en autos.

En este sentido, **Raúl Horacio MOLINA y Rubén Daniel SANCHEZ** comparecieron a juicio acusados de la presunta comisión, en carácter de coautores, del delito de asociación ilícita fiscal (arts. 15 inc. “c” de la Ley 27.430 y 45 CP) -hecho primero- y del delito de alteración dolosa de registros (art. 11 de la Ley 27.430 y 45 CP) -hecho segundo-, mientras que a **Ricardo Esteban CUPPER**, se le atribuía la coautoría del delito de asociación ilícita fiscal (arts. 15 inc. “c” de la Ley 27.430 y 45 CP) -hecho primero- y por el hecho segundo, la participación necesaria del delito de alteración dolosa de registros (art. 11 de la Ley 27.430 y 45 CP).

Todo ello, según surge del auto de elevación de la causa a juicio, cuyas circunstancias fácticas fueran precisadas al inicio, para cumplimentar las exigencias del art. 399 del Código Procesal Penal de la Nación, en lo que se refiere a la enunciación de los hechos y las circunstancias que hayan sido materia de acusación.

USO OFICIAL





Por su parte, el imputado Rubén Daniel Sánchez, con cabal conocimiento del motivo de su persecución penal, decidió ejercer su defensa material en la audiencia de debate y brindó su versión de los hechos.

Así, en oportunidad de receptársele la indagatoria en el debate el imputado manifestó que, al momento de los hechos investigados, se desempeñaba como administrador y fiscalizador de los pagos de los juicios que la Provincia de Córdoba perdía, en el ámbito de la Procuración del Tesoro. Señaló que, en el último tiempo, también tenía bajo su responsabilidad el mantenimiento y las reformas edilicias. Su horario de trabajo era de 8 a 14 horas, aunque habitualmente permanecía hasta las 18 horas, e incluso asistía algunos sábados cuando la tarea así lo requería.

En cuanto a las personas mencionadas en la presente causa, expresó ser amigo personal de Raúl Horacio Molina desde el año 1970, en virtud de la relación de compañerismo forjada durante la época escolar de la escuela Santo Tomás.

Respecto de Cupper, dijo haberlo visto únicamente en dos oportunidades en la oficina, en ocasión de tomar un refrigerio, sin haber mantenido jamás vínculo personal, laboral, ni conocimiento alguno sobre sus actividades o forma de vida.

Asimismo, sostuvo que con las personas que dieron inicio a esta causa nunca tuvo contacto, desconociendo sus nombres, teléfonos o cualquier medio de comunicación con ellas.

Relató que, al finalizar su jornada laboral, concurría diariamente a su oficina particular en calle Corro, donde no contaba con gran cantidad de clientes. Explicó que había reabierto dicho estudio a instancias de su hija menor, quien había decidido estudiar Ciencias Económicas, con la intención de mantener una oficina mínima que, al momento de recibirse, le permitiera comenzar a trabajar sin necesidad de “golpear puertas”.

Indicó que el inmueble de calle Corro, posteriormente allanado, fue alquilado en el año 2017. Señaló que, en una reunión casual tomando un café, Molina le solicitó la posibilidad de utilizar la oficina, a lo que accedió por la amistad que los unía y porque él no permanecía allí durante gran parte del día,





## *Poder Judicial de la Nación*

desconociendo el uso que su amigo le daba al lugar. Añadió que lo único que sabía era que Molina se desempeñaba como docente en la escuela Santo Tomás, y que, en retribución a la ayuda que éste le brindó en el año 2008 para conseguir empleo en dicho colegio, decidió facilitarle el espacio. Aclaró que nunca pudo precisar cuáles eran los ingresos de Molina.

En lo que respecta a su actividad profesional, indicó que su correo electrónico es sr\_rubensanchez@yahoo.com.ar, registrado ante el organismo recaudador, aunque podría existir otra cuenta con idéntica denominación sin el guion bajo en Gmail.

Relató que, eventualmente, estando en la oficina, le solicitaban confeccionar facturas, lo cual accedía a realizar, destacando que el contador no tiene la obligación de verificar la veracidad material de la operación facturada. Sobre este punto, explicó que es habitual que empresas, comercios o particulares eviten afrontar gastos administrativos, solicitando al contador que emita facturas y lleve los registros de ventas, compras y obligaciones formales en materia de declaraciones juradas, lo que se conoce como “pasar por la oficina y dejar el encargo”. Ejemplificó con el caso de la empresa Industrias Médicas, para la cual confeccionaba facturas y llevaba la contabilidad.

Continuó con su declaración, desconociendo enfáticamente los motivos de la acusación que pesaba en su contra toda vez que los trámites para obtener las claves fiscales, eran estrictamente personales y por lo demás, no disponía de tiempo -trabajaba más de diez horas diarias- y que su situación fiscal siempre se caracterizó por la de existencia de deudas.

Expuso que se había casado con una persona con problemas psicológicos, lo que lo convirtió en el único sostén familiar, situación agravada por los gastos derivados de la enfermedad de su hija mayor, fallecida en 1995. En razón de ello, optó por el retiro voluntario de la empresa EPEC, motivado por razones económicas y por los rumores de que la empresa iba a disolverse.

Finalmente, refirió que el Sr. Schneider —actualmente fallecido— fue cliente y posteriormente amigo, quien se desempeñaba como transportista. Explicó que aún recibe notificaciones vinculadas a aquel, sin que ello implique

USO OFICIAL





relación vigente alguna. Aclaró que, al tiempo de los hechos, en su carácter de contador, llevaba adelante liquidaciones impositivas y de sueldos, siendo habitual que realizara trámites y gestiones ante la AFIP y en inspecciones.

Al culminar con su declaración, aseguró que al tiempo de los hechos nada sabía respecto a la Sra. Mónica Hurtado y agregó: “nunca la vi, no tenía el teléfono, no creo que ella me conozca” .

En otra de las jornadas del debate, el imputado Raúl Horacio Molina tomó la palabra únicamente para relatar la violencia desmedida ejercida por los agentes policiales que intervinieron en el allanamiento en su domicilio el 11 de octubre de 2019, pero no accedió -por consejo de su defensa- a responder preguntas de las partes.

Así expresó que, aproximadamente entre las 7:30 y las 8:00 horas, se encontraba descansando junto a su familia, compuesta en ese entonces por su esposa y su hijo de 19 años y que mientras dormían, escucharon fuertes estampidos y gritos. Al dirigirse hacia el living advirtieron que la puerta de ingreso había sido derribada con el uso de torpedos, al igual que la puerta interna, ambas reducidas a escombros.

Indicó que, al encontrarse él en ropa interior y su esposa en la misma condición, fueron inmediatamente arrojados al piso con violencia, bajo amenaza y con armas de fuego apuntadas a la cabeza. Refirió asimismo que otro de los oficiales ingresó al dormitorio de su hijo y lo condujo hasta el living en idénticas condiciones, encañonándolo en la cabeza.

Señaló que nunca en su vida había sufrido una brutalidad semejante, y calificó el procedimiento como absolutamente desproporcionado en relación con el delito que se le imputaba.

Afirmó que, de haber tocado el timbre, hubiera abierto voluntariamente la puerta a los funcionarios policiales.

Finalmente, agregó que, durante el operativo, además de los gritos, empujones y actitudes prepotentes, los agentes insistían en preguntar “dónde estaba la caja fuerte”, aclarando que jamás tuvo una.

Por último, cabe mencionar que Ricardo Esteban Cupper adoptó igual temperamento que en la instrucción y se abstuvo de declarar en este juicio,





## *Poder Judicial de la Nación*

incorporándose su declaración obrante a fs. 418 en la cual simplemente negó los hechos que se le atribuían.

Sin embargo, en sus últimas palabras, Ricardo Esteban Cupper manifestó que en el año 2018 atravesaba una situación personal crítica, pues acababa de separarse y se encontraba en una etapa difícil tanto en lo psicológico como en lo económico. Señaló que, en ese contexto, se dejó llevar por las promesas de Molina para obtener algún ingreso extra a través de préstamos, pero que ello no tenía relación alguna con los hechos que aquí se le imputan.

Aseguró expresamente que jamás integró una asociación ilícita destinada a la confección de facturas falsas y dijo que, actualmente, sobrevive con la jubilación mínima y gracias a que su ex pareja le permite residir en el mismo domicilio.

A continuación, Raúl Horacio Molina expresó desconocer “a quién le debe el honor” de haber sido considerado el más peligroso de los imputados, lo cual —según sus palabras— habilitó una violencia excesiva en el procedimiento llevado a cabo en su domicilio. Insistió en que, a los ocho meses de aquel episodio, su esposa contrajo una enfermedad autoinmune y, conforme a ciertos indicios científicos, podría haber tenido origen en un shock emocional, por lo cual debió someterse a un tratamiento invasivo durante cinco años. Asimismo, señaló que su hijo aún padece secuelas, pues de manera aleatoria se despierta creyendo que tiene un arma apuntando a su cabeza.

Por último, Rubén Daniel Sánchez manifestó que en la primera audiencia había declarado desconocer los motivos de su imputación, pero que debía rectificar esos dichos, aclarando que —a su entender— fue el Sr. Fiscal Senestrari, en su afán de justicia, quien lo involucró en esta causa. Agregó que no se encuentra imputada la verdadera originadora de los hechos, la Sra. Hurtado. Señaló además que la Dra. Diez no valoró adecuadamente que ningún testigo lo sindicaba como contador y que, respecto de un audio incorporado desde la aplicación WhatsApp, el mismo no le pertenece ni corresponde a su voz.

USO OFICIAL





Ahora bien, llegado el tiempo formular las conclusiones finales sobre el mérito de la prueba, resalto especialmente los medulosos análisis y los denostados esfuerzos argumentativos de todas las partes en orden a presentar, ante este tribunal, la solución justa del caso.

En sus alocuciones, todos nutrieron a este debate de una discusión profunda y rica en fundamentos, que destaco aun cuando resulte imposible de reproducir en su totalidad para evitar una extensión desmedida del fallo.

Por cierto, bajo esa aclaración, me abocaré a describir solo cuestiones puntuales que fueron materia de controversia en los alegatos, para conservar la logicidad y coherencia en la secuencia narrativa de la presente resolución.

Así, debo decir que, la Dra. María Elisa Diez, apoderada de ARCA, como representante técnica de la parte querellante, fue quien con un impecable y completo análisis probatorio esgrimió en primer término sus conclusiones finales que dieron sustento a la ratificación de la acusación propiciada en este juicio.

Cabe resaltar la labor empleada por la letrada en su alegato, reconocimiento que se llevó de todas las partes en este proceso, pues en aproximadamente tres horas de disertación oral, que incluyeron apoyos tecnológicos en reproducción de audios y presentaciones de mensajes telefónicos, pudo abarcar todas y cada una de las aristas que este caso ameritaba tratar.

Estas bondades de la oralidad, devenidas de la intermediación en el contacto con la prueba, en este caso, resultaron correctamente aprovechadas por las partes acusadoras.

En este sentido, deviene imposible por su extensión, reproducir por escrito, todos los argumentos de índole probatorio, brindados por la Dra. Diez, que confirmaron el acaecimiento de los hechos, la participación responsable de los imputados y los presupuestos fácticos que indican las tipologías delictivas involucradas. No obstante, desde ya adelanto que, muchas de esas consideraciones van a ser ponderadas en el fallo, ni más ni menos porque constituyen revelaciones incuestionables de las pruebas incorporadas y a disposición de todos los sujetos formalmente involucrados en este proceso.





## *Poder Judicial de la Nación*

En ese marco, la letrada aseguró que la prueba colectada a lo largo del proceso había comprobado con certeza que los imputados Cupper, Sanchez y Molina acordaron actuar coordinadamente para obtener ventajas económicas a merced de la creación de “carpetas” o usinas de comprobantes falsos y de la venta de facturas apócrifas emitidas a nombre de esos contribuyentes.

En ese contexto, las personas usadas como usinas de facturas falsas, en general eran “gente humilde social y culturalmente”, personas vulnerables, con carencias, con escasa formación que, a cambio de falsas promesas o de la entrega de escasas sumas de dinero, accedían a dar sus datos personales y sus claves fiscales y bancarias, para que los acusados logren sus propósitos de ganar dinero vendiendo facturas falsas.

La Dra. Diez aseguró que el comportamiento llevado adelante por los imputados en autos, de modo organizado y con vocación de permanencia, revela el menosprecio que los miembros de la organización tenían respecto al bien común.

Luego, teniendo en consideración los presupuestos típicos de los delitos en los que se encuadraron los hechos que se acreditaron en autos, se detallaron y concatenaron, con una precisión quirúrgica, cada una de las pruebas incorporadas a debate que sustentaron con suficiencia y solvencia la participación de los imputados en cada uno de ellos.

No menos importante resultaron las circunstancias atenuantes y agravantes de pena, en las que la parte querellante tampoco escatimó argumentos.

En definitiva, la Dra. Diez, en nombre y representación de ARCA, brindó razones sólidamente fundadas para sustentar el pedido de condena de cinco años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas para Ricardo Esteban Cupper, Raúl Horacio Molina y Rubén Daniel Sánchez como coautores penalmente responsable del delito de asociación ilícita fiscal, en calidad de miembros, en función de lo previsto por el art. 15 inc. c del título IX de la ley 27430 y el art. 45 del CP, en concurso real con el delito de alteración dolosa de registros fiscales, en condición de coautores para Raúl Horacio

USO OFICIAL





Molina y Rubén Daniel Sánchez, mientras que a Ricardo Esteban Cupper lo acusó como partícipe necesario (art. 11 inc. a del título IX de la ley 27.430 y arts. 45 y 55 del CP).

Las conclusiones emitidas por la parte querellante fueron acompañadas, resignificadas y complementadas por el Fiscal General en sus alegatos finales.

De este modo, el Dr. Carlos Gonella, sin acudir a repeticiones innecesarias se detuvo en revelaciones puntuales de prueba sobre la confirmación de la hipótesis acusatoria y al mismo tiempo, rebatió con argumentos extraídos de las evidencias obrantes en la causa, las alegaciones de los imputados en sus defensas materiales.

Se refirió al perfil de Hurtado como mujer migrante vulnerable, inmersa en necesidades económicas apremiantes que confió en Cupper con quien la unía una relación sentimental. Así fue abusada en su confianza y se vio envuelta en esta situación tributaria, que la instó a denunciarlo.

Este hecho que la mostró como víctima, a criterio del Fiscal, también reveló la dinámica delictiva del grupo ilícito acusado, referida a la utilización de personas en situación de vulnerabilidad para concretar sus designios criminales. Entre otras pruebas, el fiscal aludió a las conversaciones telefónicas de estos contribuyentes damnificados que constituyen el último eslabón de esta cadena fraudulenta.

De manera tal que, calificó a este juicio como el paradigma de la certeza en cuanto a la existencia de los hechos y la participación penal de los acusados. Aseveró, entonces, que la fórmula más allá de toda duda razonable como piso mínimo que se requiere para fundar un pedido de condena, fue ampliamente superado en este caso.

Como estructura probatoria que sostuvo la acusación, mencionó: la investigación de ARCA anterior a la denuncia de Hurtado, los informes técnicos acompañados, los testimonios de agentes públicos de ARCA como Córscico, Moncada, Beroqui, de los oficiales de la policía federal a cargo de la investigación de los hechos y allanamientos, y de los distintos contribuyentes que comparecieron al debate a dar su versión de lo acontecido. Invocó también el contenido de las escuchas telefónicas, las pericias sobre los teléfonos





## *Poder Judicial de la Nación*

secuestrados y la prueba documental obtenida de los procedimientos de secuestro.

Luego de hacer un abordaje técnico sobre la calificación legal, se detuvo en las razones que lo llevaron a propiciar una pequeña digresión con la abogada de ARCA al mencionar la participación que correspondía endilgarle a Cupper, en la alteración dolosa de registros -hecho segundo-. En ese sentido, sostuvo la coautoría en los términos del art. 45 del Código Penal.

Por lo demás, el Fiscal General analizó las condiciones personales de los acusados y dio las razones por las que propició un pedido de pena, cuyo monto coincidió con el de la parte querellante.

A su vez, en relación con el contador Rubén Sánchez, adicionó la pena de 6 años de inhabilitación especial para ejercer la profesión de contador público, de conformidad a lo estableciendo por el art. 20 bis, inciso tercero, del Código Penal. Todo lo anterior, con más accesorias legales y costas.

Por último, en función de entender verificado el daño ocasionado a las víctimas que concurrieron a declarar al debate, solicitó la reparación económica de Adriana Norma Argento y Nelsa Elizabeth Grenethier, en los términos del art. 29, inciso segundo, del Código Penal.

En relación con ello, el representante del Ministerio Público Fiscal reconoció que carecía de parámetros objetivos para desglosar el perjuicio padecido y en tal caso, como pauta de prudencia, propuso se fije el monto en diez haberes jubilatorios básicos para cada una de las damnificadas.

Agregó que pensó hacer extensivo su petitorio para el testigo Ibarra Trucco, sin embargo, las pruebas revelaron que cuando no le pagaban su derecho a cobrar en expectativa presionaba al acusado Cupper, con mensajes telefónicos, bajo amenaza de ser denunciado. En el caso de Hurtado, no concretó el pedido de reparación habida cuenta su imposibilidad de contactarla.

Para finalizar su alegato, el Fiscal General instó la ampliación de medidas cautelares sobre bienes registrables de titularidad de Molina, Cupper y Sanchez, como deudores solidarios, para garantizar la reparación solicitada.

USO OFICIAL





A su turno, los Dres. Benjamín Sonzini Astudillo, padre e hijo, comenzaron se defensa técnica aludiendo al allanamiento sufrido por su asistido, que no discutieron en su validez. Su queja se circunscribió a resaltar el excesivo y desmesurado acción policial evidenciado en graves secuelas para la familia que ocupaba ese domicilio. En razón de la inconducta policial denunciada, solicitó se corra vista al Ministerio Público Fiscal.

El abogado disertante afirmó que esta causa presentaba importantes inconsistencias desde su inicio, debido a que se trató de la primera de usina de facturas que tramitó ante el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba.

Cuestionó que no se haya incluido a otros coautores de los eventuales hechos ilícitos investigados, cuando la parte querellante involucró a toda la base E-APOC en la misma. Citó el caso Grenethier, para demostrar lo que a su criterio fue una hipótesis fiscal inicialmente absolutamente errada. Puesto que, en la instrucción se sostuvo que “Álvarez no podía ser otra persona que Cupper”, cuando había elementos que iban por otra línea y ello se terminó de dilucidar con el testimonio oral de la víctima en el debate.

Dicho lo anterior, presentó su primer planteo formal desincriminante, esto es, la nulidad de la declaración testimonial de Hurtado, obrante a fs. 4 del expediente, y de todos los actos posteriores practicados. Ello, en virtud de entender que la causa, en su totalidad, derivaba de este acto al que tachó de ineficaz.

Se aseguró que la denuncia, de fs. 1, no aportaba mayores datos. Los letrados manifestaron que al momento de su ratificación se hizo operativa la garantía constitucional de prohibición de autoincriminación, habida cuenta que Hurtado, en este proceso, era una delincuente confesa. De manera que, subsistía una acción penal inconclusa.

Insistieron en que todos los datos de importancia, desde los cuales se logró la individualización de los imputados, surgieron del testimonio de Hurtado (fs. 4), que, como prueba ilícita, invalidaba todas las medidas investigativas dictadas en su consecuencia.

En razón de ello, citando la doctrina de la escuela alemán argumentaron

que no existía una tercera categoría de sujetos procesales, con lo cual, los





## *Poder Judicial de la Nación*

únicos posibles eran imputados y testigos. De allí que, al receptársele a Hurtado su declaración bajo juramento de decir verdad, se obtuvo un testimonio autoincriminante, que restringe severamente la garantía de inocencia y el in dubio pro reo.

Esta defensa manifestó que se trató de una investigación corrupta, con desconocimiento inexcusable del derecho atribuible a la fiscalía respecto del testimonio de Hurtado.

Por lo demás, se invocó la teoría del fruto envenenado del árbol prohibido, que beneficia a todos los imputados por resultar inválida la única línea investigativa.

En función de ello, solicitó como planteo principal, la nulidad de la causa con la consecuente absolución de su defendido Molina.

De manera subsidiaria, los letrados dieron las razones de índole valorativas por las que entendían que, en este juicio, reinaba una orfandad probatoria, que impedía arribar a la certeza invocada por los acusadores.

En resumidas cuentas, con respecto al hecho primero, cuestionaron las conclusiones del personal policial que efectuó las transcripciones telefónicas. Dado que, con 30 llamadas interceptadas hasta el 24 de septiembre de 2019, respecto de Molina donde hablaba de tramites, claves fiscales, etc. no pudieron involucrarlo en ningún hecho delictivo. Luego, sospechosamente, los comisionados cambiaron su opinión, tras el resultado de tan solo 12 llamadas más, con lo cual, a criterio de la defensa, la hipótesis policial fue construida solo a los efectos de sustentar los pedidos de allanamientos y secuestros.

Otra cuestión discutida por los abogados de Molina fue la identificación categórica, efectuada por los investigadores de ARCA, de la dirección de IP con una determinada ubicación geográfica, que, en este caso, se relacionaba con los acusados. Dieron las explicaciones por las que ponían en dudas esa afirmación, a la que solo le otorgaron un valor indiciario.

En el mismo sentido, sostuvieron que el error de incriminación que se reveló en el caso Grenethier exhibía la fragilidad del método investigativo

USO OFICIAL





empleado, asegurando que los acusadores llamaron certeza a simples indicios, erigiéndose este caso como el paradigmático de sesgo de confirmación.

Por ello, alternativamente a la nulidad denunciada, solicitaron la absolución de Molina por duda acerca de la comprobación del delito de asociación ilícita fiscal.

En relación con la alteración dolosa de registros, se basaron en la supuesta orfandad probatoria referida a su cliente. Invocaron que solo se valoró un mail de Molina en el que contestaba que no entendía lo que Hurtado le preguntaba. Luego, las escuchas telefónicas adicionales no refieren más a esa supuesta víctima.

De manera que, a su entender, no surgió con claridad la participación de Molina en el hecho segundo atribuido, su acción específica en orden a su consumación. Todo se basó en una dirección de IP, cuya falibilidad ha sido explicada por los defensores.

A su vez, se detuvieron en la atipicidad del delito calificado como alteración dolosa de registros, en función de asegurar que la mera emisión de factura apócrifa no la implicaba. Argumentaron que la estructura típica del ilícito de mención supone la incorporación de nuevos datos a los preexistentes y esas circunstancias no se dieron en autos. Citaron doctrina y jurisprudencia en sustento de sus pretensiones.

En definitiva, también solicitaron la absolución por ausencia de prueba certera para revertir la duda insuperable sobre la participación de Molina en el hecho segundo, al que además calificaron de atípico.

Por último, negaron la procedencia de la reparación económica solicitada por Fiscal General en sus alegatos, en virtud de entender que los eventuales hechos de alteración dolosa de registros que las tenía, por supuestas víctimas, a Grenethier y Argento, se encontraban prescriptos.

Les sucedió en la palabra, el Dr. Alejandro David Ríos Castro (abogado defensor de Rubén Daniel Sanchez), quien en su alocución cuestionó severamente la utilización de la figura de la asociación ilícita en este caso, en la idea de que no se pudo triangular la sola intervención de tres sujetos para cumplir con el tipo objetivo, eludiendo la imputación de quien edificó la presente





## *Poder Judicial de la Nación*

causa, haciendo referencia puntual a la Sra. Hurtado. Incluso, adhirió al planteo de nulidad de su declaración testimonial, que introdujeron los abogados preopinantes.

En la discusión sobre el mérito de la prueba incorporada a debate, el letrado cuestionó el valor de las testimoniales y de las escuchas telefónicas, por la ausencia de datos que arrojaran luz a los hechos. Dijo que solo se trataron de acciones aisladas, sin gestión coordinada que dotara de la permanencia y estabilidad requerida en una asociación ilícita. Invocó fallos de la CSJN en ese sentido.

Cuestionó el elemento extranjero como el punto de contacto entre las supuestas víctimas. En ese sentido, agregó que no se trató de un colectivo de víctimas a la que Sánchez reclutaba para obtener su clave fiscal. Que su asistido no hacía pagos, ni las conocía, solo le prestaba el espacio a Molina.

Se opuso fervientemente a la indemnización solicitada por el Fiscal General, debido que a su entender no existió daño alguno. Por tanto, la eventual reparación de un perjuicio no acreditado, solo derivaría en un enriquecimiento sin causa.

Por último, la defensa técnica de Ricardo Esteban Cupper, representada en este acto de discusión final por el Dr. Gastón Ignacio Schonfeld, inicio su discurso sosteniendo que el principio de inocencia que amparaba a su asistido no había sido desvirtuado a pesar de los esfuerzos enormes de la querella y el Ministerio Público Fiscal, dado que, los elementos probatorios reunidos en la causa, a su criterio no lograron demostrar la existencia de elementos típicos requeridos por las normas.

Luego de esa introducción, como primer planteo formal, el letrado instó la inadmisibilidad parcial formal del alegato Fiscal, por errónea aplicación de la ley en virtud de la violación del principio de congruencia y legalidad.

En este sentido, argumentó que el Fiscal General pretendía una sanción pecuniaria a cargo de los imputados que no integra el catálogo previsto taxativamente en el art. 5 del Código Penal. Agregó que no se puede suplir, en esta instancia, la falta de interposición oportuna de la acción civil como la vía

USO OFICIAL





regulada para solicitar la eventual inmunización de perjuicios. Citó jurisprudencia en dicho sentido. Denunció, al tal efecto, la ausencia de legitimación pasiva para concretar dicha pretensión, extendida al embargo solicitado para resguardar esa pretensión reparatoria.

El letrado, subsidiariamente y para el caso que este tribunal considere ingresado y con efectos jurídicos el pedido de indemnización económica introducido en el alegato fiscal, planteó la nulidad parcial de la acusación, basado en los mismos argumentos. Hizo reserva de casación e introdujo cuestión federal.

En orden a la ausencia de prueba de la imputación delictiva, mencionó que los indicios concatenados no lograron comprobar con la certeza que adujo la parte acusatoria la existencia de vínculo entre los acusados. De hecho, aseguró que Cupper no formó parte del acuerdo.

De esta manera, aseguró que no podía sostenerse válidamente la existencia del delito de asociación ilícita fiscal por ausencia de acreditación de los supuestos típicos que lo configuran en relación con Cupper.

Incluso más, planteó un estado de necesidad disculpante en su asistido que le impidió obrar de otro modo. Mencionó que Cupper tuvo limitadas sus posibilidades de actuación, puesto que, bajo condiciones de vulnerabilidad y necesidades de tipo económica, se colocó bajo la sumisión de Molina. De esta manera, invocando jurisprudencia acorde al caso, sostuvo que si no hubo acuerdo no podía atribuirse el delito de asociación ilícita, en tanto Cupper era víctima de Molina o cuanto menos su aprovechamiento debía conducir a la impunidad de su asistido.

Por lo demás, adhirió al planteo de nulidad de la declaración testimonial de Hurtado, propuesta por el Dr. Sonzini Astudillo y la hizo extensiva, por iguales fundamentos a Maximiliano Juvenal Ibarra Trucco. Agregando que la autoincriminación del declarante en el juicio alteró severamente la defensa técnica eficaz de su asistido.

Esto último, también fue vinculado con el hecho segundo, al que el abogado cuestionó en su acreditación, dado que al suprimir el testimonio de fs.

4, sostuvo que solo lo vinculó a Cupper una captura de pantalla aportada por





## *Poder Judicial de la Nación*

Hurtado. Agregó que su defendido no contaba con conocimientos ni mecanismos específicos de facturación apócrifa pero además suscribió a la postura de los abogados de Molina en cuanto a que esa conducta no configuraba el tipo penal en cuestión.

Por último, deslizó una indeterminación en los elementos o circunstancias de tiempo, modo y lugar en la acusación respecto del hecho segundo que impidió la defensa eficaz.

Para finalizar, de manera subsidiaria a la absolución sostenida por las razones antes apuntadas, solicitó la inconstitucionalidad del mínimo de la pena prevista para los delitos endilgados a Cupper, en virtud del principio de proporcionalidad de las penas, entendiendo razonable, en todo caso, una condena de tres años de prisión en suspenso.

Llegado el tiempo de evacuar las vistas por los planteos efectuados, la parte querellante replicó la nulidad de la declaración testimonial de fs. 4 y los actos posteriores.

En este sentido, la Dra. Díez manifestó que la garantía de autoincriminación proclamada se hacía efectiva solo respecto a una persona en condición de imputado (art. 72 del CPPN). Que, a tal efecto, había dado sobradas razones para sostener que los testigos pese a haber entregado su clave fiscal a cambio de dinero no tenían responsabilidad penal.

En ese contexto, aseveró que la declaración testimonial bajo juramento es perfectamente válida. Por lo demás si hubiera responsabilidad penal de la denunciante, esta circunstancia tampoco habilita a invalidar todas las actuaciones procesales posteriores, habida cuenta que, todo ciudadano, aun privado de libertad, conserva el derecho de recurrir a la justicia para dar a conocer un hecho delictivo. Citó precedentes judiciales de relevancia para el caso. Por todo ello, pidió se rechace el planteo de nulidad del acto cuestionado y su ineficacia extendida.

En igual sentido, se pronunció sobre el caso de Ibarra Trucco, al que le cabían iguales consideraciones. Incluso, refirió que esta situación ya había sido planteada en oportunidad de cuestionar su comparecencia personal con

USO OFICIAL





resultado adverso, por tanto, resultaba ser una reedición de lo ya resuelto durante el debate.

Con relación a la inconstitucionalidad del mínimo de la pena, mencionó que el encargado de fijar la escala penal aplicable a las conductas consideradas delictivas es el Congreso Nacional. En este aspecto, el juez debe acotarse a lo prescripto en la norma, salvo que cuestiones de groseras inconsistencias en orden al juicio de reprochabilidad, justifiquen un remedio tan extremo como la inconstitucionalidad de una ley. Luego de ello, mencionó las razones por las que no consideraba que la asociación ilícita fiscal previera penas desproporcionadas para este caso concreto y ratificó, con respaldo de la jurisprudencia de la CSJN, los mínimos legales establecidos.

En definitiva, se pronunció por el rechazo de las nulidades solicitadas, e hizo reserva de caso federal.

El Ministerio Público Fiscal, también dio sus argumentos que contrariaron los planteos defensivos, en todos acorde a las consideraciones vertidas por la parte querellante. Adicionó que la consideración de vulnerabilidad de Hurtado fue objeto de debida valoración en los alegatos y por tanto, ratificó su consideración de víctima en este proceso. Incluso, si se suprimiera el acto cuestionado se podría invocar la investigación de Moncada, que indefectiblemente, conducía a igual resultado.

Por último y en relación con la inaplicabilidad de la reparación pecuniaria prevista en el art. 29 del CP, sea bajo el formato de inadmisibilidad formal de la acusación o su nulidad parcial, resultó a criterio del acusador público absolutamente inconducente en orden a que esa norma prevé expresamente la indemnización del daño y otorga al Juez discrecionalidad para la fijación del monto.

En relación con la exclusión probatoria, tomó la palabra el Dr. Sonzini Astudillo (h) quien rebatió la postura del descubrimiento inevitable que valida un acto formalmente nulo, por carecer de los requisitos para su configuración.

Entre ellos alertó sobre la ausencia de certeza acerca de ese descubrimiento. Insistió en que la testigo declaró cuando ya había traspasado

el umbral de sospecha delictiva.





## *Poder Judicial de la Nación*

A todo ello, el Dr. Schonfeld agregó que la supuesta víctima, ni siquiera fue informada sobre su eventual derecho de reclamar por la vía civil la reparación de los daños sufridos.

Resumidas las posturas asumidas por las partes en el juicio, reseñada la prueba colectada y las conclusiones de las partes, el Tribunal —constituido en sala unipersonal— se planteó las siguientes cuestiones a resolver: **PRIMERA:** ¿resultan procedentes los planteos de nulidad articulados por las defensas de los imputados? **SEGUNDA:** En su caso, ¿se encuentra acreditada la existencia de los hechos investigados y la participación atribuida a los acusados?. **TERCERA:** Si así fuera, ¿qué calificación legal corresponde a su accionar? **CUARTA:** En tal caso, ¿qué pena les corresponde aplicar?, ¿procede la inconstitucionalidad del mínimo de la pena solicitada?.

### **A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, DIGO:**

Ingresando al tratamiento de los planteos de ineficacia procesal formulados por las defensas técnicas de los encartados, cabe destacar que el Tribunal en distintas oportunidades ha esbozado una serie de precisiones en orden a las nulidades y a los principios que rigen su interpretación y aplicación en un caso concreto. Postulados que resultan pertinentes reproducir, por ser atinentes a las pretensiones deducidas en el debate.

Así las cosas, se ha dicho que el régimen de nulidades al que adscribe nuestro sistema jurídico procesal responde al modelo de “taxatividad” que requiere, en lo fundamental, que no existen más nulidades que las específicamente previstas en la ley.

El principio esbozado surge expresamente del art. 166 del Código Procesal Penal de la Nación, cuando establece como regla principal que “Los actos procesales serán nulos sólo cuando no se hubieran observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad”.

Por lo demás, en materia de nulidades se impone la interpretación restrictiva. De modo que, resulta condición esencial para que pueda declararse que la ley prevea expresamente esa sanción, que quien la alegue tenga un

USO OFICIAL





interés jurídico en la nulidad y que no haya consentido expresa ni tácitamente el vicio que la afecta. De esta manera, los principios de conservación y trascendencia impiden que se aplique la nulidad si el acto atacado logró su finalidad y no se verifica un perjuicio que deba ser reparado.

En esta línea de pensamiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha señalado que aun cuando se trate de nulidades absolutas, la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes. Pues cuando se adopta en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (Fallos: 295:1413 y 311:2337, entre muchos otros).

Sobre este tema, Sergio Gabriel Torres, al tratar el tema “Interés. Perjuicio. Alcance y límites”, sostiene que, aún en el caso de nulidades declarables de oficio (características de las absolutas) éstas no pueden serlo en el solo beneficio de la ley. Señala expresamente el autor: “se exige que el perjuicio sea real y concreto aunque no sea actual, ya que puede admitirse el perjuicio potencial siempre que tenga cierto grado de verosimilitud, calidad ésta que deberá ser alegada y probada por la parte y valorada por el juez de la causa” (TORRES, Sergio Gabriel, Nulidades en el Proceso Penal -2º edición actualizada y ampliada-Ad-Hoc., 1993, p. 35/39). Al referirse a la valoración del interés y el consiguiente perjuicio de las nulidades, señala que quedan dentro del marco discrecional del magistrado, desde que entiende que la sustancialidad del proceso prevalece sobre el formalismo (TORRES, Sergio Gabriel, op. cit. p. 190).

Como consecuencia de lo expuesto, resulta extraño a nuestro sistema procesal, la declaración de la nulidad por la nulidad misma, por lo que, tanto el perjuicio sufrido como el interés de quien procura obtener la declaración, deben ser fehacientemente acreditados, no bastando para ello la mera enunciación de supuestos derechos constitucionales vulnerados, que lo hayan puesto teóricamente en un estado de indefensión procesal.

Sostener una postura contraria, significaría declarar la nulidad, en virtud de un criterio absolutamente formalista que más que favorecer alguna garantía, en realidad entorpecería justamente su debido resguardo.





## *Poder Judicial de la Nación*

Desde estos parámetros interpretativos, corresponde analizar cada uno de los planteos de nulidad formulados, adelantando desde ya, que la nulidad alegada sobre la declaración testimonial de Sandra Mónica Hurtado, obrante a fs. 4, y la de todas las actuaciones procesales posteriores, debe ser rechazada.

Para recapitular, el planteo de ineficacia procesal introducido por el Dr. Sonzini Astudillo, en representación de su asistido Molina, que fuera acompañado por los demás abogados defensores que le sucedieron en las discusiones finales, se basa en la vulneración de la garantía constitucional de prohibición de autoincriminación. En tal entendimiento, el vicio denunciado en el acto procesal de recepción de testimonio de Sandra Mónica Hurtado se habría verificado al habersele requerido la declaración bajo juramento de decir verdad, cuando a criterio de los letrados, la nombrada había tenido participación delictiva en los hechos acusados.

Cabe recordar que Sandra Mónica Hurtado fue convocada a prestar declaración testimonial en este proceso a raíz de la denuncia formulada el 23 de mayo de 2019 (fs. 1).

La naturaleza de este acto inicial, precisamente, es la de introducir la noticia criminis que impulsa una investigación penal. En esa oportunidad, se brindan los datos sobre la presunta comisión de un hecho delictivo en los términos de los arts. 175 segundo párrafo y 176 del CPPN.

Así fue que, Sandra Mónica Hurtado, en su presentación original, mencionó a Ricardo Cupper como su amigo, a quien en enero de 2019 entregó su nombre para generar una empresa. Que en esa fecha fue acompañada por el denunciado a las oficinas de AFIP para blanquear su clave fiscal, cediéndosela luego junto con su CBU bancario. Todo a cambio de mil pesos semanales.

Refirió a su condición tributaria real de monotributista, por los servicios de cuidado de ancianos que prestaba y mencionó los inconvenientes que presentó tiempo después para facturar su remuneración. Por esa razón, se comunicó con Cupper, al mail [raulhoraciomolina@gmail.com](mailto:raulhoraciomolina@gmail.com), quien le brindó soluciones hasta el mes de mayo que no pudo cobrar más. Oportunidad en la

USO OFICIAL





que, tras presentarse personalmente en AFIP, tomó conocimiento sobre su situación fiscal, una deuda que no había contraído y facturas emitidas a su nombre por valores desconocidos.

Las circunstancias aportadas por la denunciante, a criterio del Fiscal Federal que la receptó, ameritaron la instancia investigativa por presunta comisión de un delito, que la tenía como damnificada. Por esa razón, fue citada a comparecer para receptársele declaración testimonial en los términos del art. 245 del CPPN.

Al respecto, coincido con la parte querellante, en cuanto a que, el amparo a la prohibición de autoincriminación que pretenden resguardar los quejosos, se asocia directamente con la calidad de imputado, de la que carecía Sandra Mónica Hurtado. En esos términos, la recepción de su testimonio bajo juramento luce perfectamente válida.

Incluso, más allá de la estrategia defensiva que supone este planteo, sobre todo al sostener que del acto viciado derivan -indefectiblemente- todas las actuaciones posteriores de la causa -lo que no es acertado-, lo cierto es que, no se ha argumentado suficientemente sobre el perjuicio real y concreto que supuso el juramento de decir verdad solicitado a Hurtado en relación con el derecho de defensa de cada uno de los implicados penalmente en la investigación.

Por todo ello, entiendo que la obtención de esta prueba no ha violentado ninguna garantía constitucional de los acusados, consecuentemente, aquella conserva su validez. De allí que, tampoco resulta operante la doctrina de los frutos del árbol envenenado destinada a la exclusión de los actos procesales posteriores, que resulten una derivación directa de la prueba originalmente tachada de ilícita.

La maniobra delictiva denunciada estuvo suficientemente circunstanciada a fs. 1 y con los datos identificatorios aportados en ella, era suficiente para habilitar la profundización de la pesquisa a través del dictado de diversas diligencias instructorias.

Se puede adicionar otro argumento de peso para rechazar la invalidez

procesal denunciada, toda vez que existió paralelamente una fuente de





## *Poder Judicial de la Nación*

investigación y prueba, absolutamente independiente y ajena, desde el punto de vista causal, con la testimonial de Hurtado.

En efecto, antes de la denuncia presentada y de la testimonial cuestionada, las áreas específicas de AFIP (hoy ARCA) habían iniciado un trabajo investigativo en torno a la actividad económica desarrollada en nombre de la Sra. Hurtado y de otras usinas (luego vinculadas a los imputados Sánchez, Molina y Cupper) para emitir facturación apócrifa.

De hecho, se efectuaron las fiscalizaciones de rigor que concluyeron que los contribuyentes auditados no poseían aptitud económica, material ni financiera para realizar las operaciones instrumentadas a su nombre. Todo lo que, se encauzó judicialmente en una investigación que estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba.

El testimonio de Marcelo Moncada en este debate, da cuenta que efectivamente existió una investigación, de fecha anterior, con un universo más grande de contribuyentes señalados en sus operaciones tributarias, por sospechosas, entre los que estaba la denunciante Hurtado.

Precisamente, tal como mencionó la abogada de la parte querellante, Dra. Elisa Diez, el 11/4/2019 el área de Investigación de la Dirección Regional Córdoba de AFIP-DGI dispuso el inicio de un proceso de fiscalización a la contribuyente Hurtado Arango atento tener indicios de apocrificidad.

Estas averiguaciones internas fueron llevada adelante por Marcelo Moncada, la inspección se identificó como OI 1769398 y fue iniciada el 12/4/2019 cuyo resultado derivó en la incorporación de Hurtado, con fecha 15/4/2019, en las bases de AFIP como "APOC", "en proceso de constatación". Este registro tributario le impidió la emisión de facturas electrónicas a su nombre y de allí, los inconvenientes detectados por la denunciante.

Por lo demás, el legajo digital incorporado en este debate reflejó que, en el marco de este procedimiento administrativo, Hurtado adjuntó una constancia emitida por la Fiscalía Federal N° 2 de Córdoba que daba cuenta de la denuncia presentada por ella contra el Cupper y con fecha 28/8/2019, efectuó

USO OFICIAL





una presentación con manifestaciones semejantes a las reflejadas en la denuncia referida.

La revelación de estas dos líneas investigativas paralelas fue expuesta por el testigo Moncada quien explicó que antes de haber sido comisionado en el presente proceso, se encontraba prestando funciones auxiliares en otra investigación que se desarrollaba ante la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba, en la cual, también se había logrado identificar que desde las oficinas de Corro 185 se había emitido facturación electrónica falsa a nombre de Hurtado Arango y otros contribuyentes apócrifos (Argento, Ibarra Trucco, etc.).

Es decir, antes de la denuncia que dio origen a esta causa ARCA ya había iniciado una investigación respecto de la contribuyente Hurtado, camino que, a través de las averiguaciones que había iniciado el contador Moncada aunada a otras pruebas llevaron inexorablemente a la imputación delictiva tanto de Sánchez como de sus cómplices Cupper y Molina. Es decir, existió en este caso una fuente de investigación independiente que fue efectivamente explorada por la prevención y por lo tanto, aún en la descartada hipótesis de que la declaración testimonial de Hurtado fuese violatoria de la garantía que protege la autoincriminación, estaríamos frente a una excepción a la regla de exclusión, con los alcances establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Daray” (Fallos: 317:1985), que descartaría de plano el planteo de nulidad introducido por las defensas.

De todos modos, las consideraciones anteriores en orden a la inaplicabilidad de la garantía de autoincriminación a quien no reviste la condición de perseguido penal, sellan con igual suerte el planteo de nulidad de la declaración testimonial de Maximiliano Juvenal Ibarra Trucco, instada en el debate por la defensa de Cupper.

Resta agregar que el legajo de investigación administrativo aportado por ARCA al proceso, también da cuenta que el cargo de inspección a dicho contribuyente fue generado con fecha 11/4/2019, esto es, casi un mes antes de que la contribuyente Hurtado efectuara la denuncia que dio origen a la investigación judicial. Es decir que, para ese tiempo el contador Marcelo





## *Poder Judicial de la Nación*

Moncada ya estaba averiguando la situación fiscal de Ibarra Trucco y su facturación por indicios de apocrificidad.

Hago extensiva a este caso las reflexiones efectuadas precedentemente en cuanto a la falta de mención concreta que refleje el perjuicio o lesión al debido proceso y derecho de defensa invocado.

Por ser idéntico y remitirse al planteo nulificante anterior, sólo se han ventilado afirmaciones de tipo dogmático, careciendo en sustancia de toda precisión en orden a cuáles han sido los derechos afectados.

En este sentido, resulta absolutamente claro lo expuesto por Raúl Washington Abalos cuando al comentar el art. 166 del Código Procesal Penal de la Nación, sostuvo que “Lo importante respecto del interés “necesario” para la petición de nulidad, es que deben indicarse con exactitud la defensa de que se habría visto privado quien alega, así como el perjuicio real causado por los actos procesales que se impugnan. Este perjuicio debe ser especificado y ofrecer los elementos que a priori lo acrediten.

Por ello, si el acto defectuoso no perjudica a quien quiere articular la nulidad se carece del interés jurídico previsto en la ley.” (ABALOS, Raúl Washington, Código Procesal Penal de la Nación, Ediciones Jurídicas Cuyo, 1994, t. 1, p. 377).

En definitiva, lo que la ley requiere en materia de nulidades, esto como condición de interposición, es que quien la alega o declare, indique cuáles son las razones que fundamentan la aplicación de la correspondiente sanción procesal, señalando cuál es el perjuicio que se ha querido evitar o qué garantía constitucional se ha querido proteger.

Por ello, el mero uso de fórmulas genéricas, como las empleadas en los alegatos que introdujeron las pretendidas ineficacias procesales, de ninguna manera constituye razón suficiente para sustentar los vicios esgrimidos.

En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar ambos planteos de nulidad articulados por los abogados defensores.

### **A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, DIGO:**





Las presentes actuaciones tuvieron inicio a partir de una denuncia formal, interpuesta por Sandra Mónica Hurtado (fs. 1), en la cual sindicaba a Ricardo Esteban CUPPER como partícipe de un delito que le había generado un grave perjuicio a nivel tributario.

En su declaración testimonial de fs. 4, ratificó la denuncia efectuada y brindó otras circunstancias contextuales de su relación con la persona que nombró como “Ricardo Stiven Cupper”. De la declaración de fs. 4, incorporada por lectura al debate en tanto pese a los esfuerzos no pudo ser ubicada (estaría radicada en Bolivia) y confirmada en su validez procesal, interesa mencionar que Hurtado reconoció haber aportado al denunciado su clave de AFIP, a cambio de un pago semanal de dinero. Dijo haber sido engañada y expresó que Cupper le había dicho que él había sido estafado por Raúl Horacio Molina.

Cabe agregar que, en el mismo acto, Hurtado acompañó fotos, capturas de pantallas de conversaciones telefónicas y demás documentos con la pretensión de respaldar los hechos denunciados (fs. 5/17).

El hecho con relevancia penal que fue puesto en conocimiento del fiscal de instrucción, motivó la adopción de medidas investigativas tendientes a determinar su verosimilitud.

En este sentido, el oficial José Luis Cabrera, con una antigüedad de 22 años en la Policía Federal y vasta experiencia en materia de averiguaciones penales especiales, declaró en esta audiencia de debate que en el año 2019 mientras ostentaba el cargo de oficial inspector, a cargo de una brigada, fue comisionado por la Fiscalía Federal N°1 de Córdoba a los efectos de llevar a cabo ciertas diligencias.

En cumplimiento del deber encomendado, emprendió la búsqueda de domicilios y medios de vida del ciudadano Cupper. Recordó que la denunciante había aportado una dirección y un teléfono, pero no pudieron constatar que él ocupara esa vivienda. Recordó que intentaron ubicarlo en bases de datos públicas y privadas con resultado negativo.





## *Poder Judicial de la Nación*

Luego, a la pregunta del Fiscal General sobre si había conocido a la denunciante, el testigo contestó que no y agregó que nunca tomó contacto con ella.

Entonces, explicó que para avanzar en la pesquisa, solicitó la intervención de la línea telefónica adjudicada a Cupper, lo que fue concedido y ello sí aportó importantes resultados para la causa.

Describió la metodología empleada para la desgravación de las conversaciones, manifestando que conformaron un grupo de trabajo. Una vez que retiraban el CD con el material en bruto, se subía a un drive compartido por todos los miembros de la división. Que cada línea era asignada a un oficial a cargo de transcribir las escuchas y era el propio testigo quien seleccionaba las conducentes a la investigación, elaboraba el informe de rigor y lo elevaba a la Fiscalía interviniente.

El deponte Cabrera reveló en la audiencia que a través de estas intervenciones telefónicas se pudo desentrañar la maniobra llevada a cabo por el investigado y sus consortes de causa, que consistían en creaciones de empresas (S.A.S.), venta de cheques, realización de facturas.

Recordó que de esos diálogos surgía como se pasaban nombres de personas, con CUIT, CUIL y claves entre los interlocutores, identificados luego como Sánchez y Molina. En relación con ellos, el testigo no pudo rememorar puntualmente una conversación que fuera la más trascendente en este sentido. Se excusó en la cantidad de escuchas que surgían por día -más de 10- y en las 450 a 600 investigaciones que llevaba la brigada, todas con intervenciones telefónicas.

Luego el oficial Cabrera, comentó que los sospechosos se relacionaban con los fines antes expuestos, pero que no podía aseverar el rol ni la función particular que cada uno de ellos cumplía. Aun así, en audiencia reconoció que las desgravaciones obrantes a fs. 206 y subsiguientes y las de fs. 274 le pertenecían.

USO OFICIAL





Agregó que además de las líneas desintervenidas de Cupper, Molina y Sánchez, hubo otras mujeres que eran pareja de Cupper pero no supo decir sus nombres.

Cuando le consultaron a que se referían las conversaciones sobre “facturas”, el testigo aclaró que las desgravaciones eran textuales y por fonética. Incluso, explicó que en algunas ocasiones no llegaban a entender los términos empleados. Solo transcribían lo que escuchaban. Que luego, con el avance de la investigación, empezaron a descifrar que cuando hablaban de “ZAS” en realidad hacían referencia al tipo societario “S.A.S”. Insistió en que, su tarea era recolectar información objetiva y en ese marco, solo elevaba las conversaciones con el informe respectivo a la Fiscalía que era la encargada de analizar el valor probatorio que tenían para la causa.

Al finalizar su declaración, si bien no pudo recordar si, entre ellos, se hablaba de precios, contraprestaciones o comisiones por los servicios brindados, aseguró que los imputados eran personas que manejaban lo contable, con terminología específica y atinente a ese rubro.

Cabe adelantar, que el producido de las conversaciones surgidas en el marco de las intervenciones telefónicas ordenadas en la presente causa, resultaron de suma relevancia a los efectos de comprobar las vinculaciones delictivas de los implicados en esta causa.

En virtud de ello, por una cuestión de orden lógico en la argumentación de este fallo, aquellas seleccionadas por su valor convictivo y carácter representativo del universo existente, serán reseñadas y correlacionadas más adelante en el análisis de la prueba de las conductas ilícitas atribuidas a los imputados.

Dicho esto, es necesario ahora puntualizar que en el marco de las diligencias investigativas dispuestas en la presente causa, se ordenó el levantamiento del secreto fiscal de individuos y entidades como Ricardo Esteban Cupper, Delera Carina Liliana, Gerardo Gabriel García Elosegui, Sandra Mónica Hurtado, Delera Servicios Empresariales S.A.S. y Logística y Transporte García S.A.S. Esta medida tuvo como propósito obtener sus





## *Poder Judicial de la Nación*

respectivos perfiles fiscales en la Plataforma de Servicios “Ciudadano Digital” del Gobierno.

Ahora bien, mientras se receptaba esta información, adicionalmente y a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (hoy ARCA) asignó personal especializado para la ejecución de las tareas investigativas de los hechos denunciados en este expediente (fs. 290).

Es decir que, coetáneamente, personal cualificado y perteneciente al organismo público de recaudación de impuestos y control tributario, se abocó a desentrañar la posible vinculación de los hechos denunciados con los contribuyentes irregulares detectados en el seno de su organismo.

A modo anticipo, la información aportada por AFIP-ARCA al presente proceso judicial, a través de distintos medios de prueba –testimonial, documental, informativa– permitió conocer acabadamente la metodología empleada para llevar a cabo sus inspecciones, clarificó aquellas cuestiones técnicas contables y de asientos de datos relevantes para la comprobación de las imputaciones y validó lógica y racionalmente las conclusiones transmitidas por el organismo recaudador, comisionado por la autoridad judicial competente.

Al respecto, la contadora pública María Lujan Beroqui, compareció a la audiencia de debate para prestar declaración testimonial, y brindó detalles sobre su actuación como funcionaria del área de fiscalización de ARCA en este proceso. De acreditada experiencia y con una antigüedad de 27 años en el organismo, comentó que se dedicaba especialmente a investigar usinas de facturación apócrifa.

El incuestionable aporte de este testimonio en el juicio deviene, precisamente, de la explicación acerca del procedimiento que de ordinario se sigue para incluir a un contribuyente en la base de E-APOC. Luego, también, los recuerdos que al respecto le albergaron sobre la presente causa.

En el primer aspecto, la contadora Beroqui manifestó que, de ordinario, su actuación comienza cuando les llega un caso generado por la división investigación de ARCA con indicios de contribuyente E-APOC. Una vez

USO OFICIAL





recibido por su área, se procede a dar apertura, a hacer la constatación del domicilio y allí le es notificado un requerimiento. Luego del requerimiento se relevan bases para hacer cruzamiento de análisis de datos que surgen de las mismas, de conformidad a lo que el contribuyente exterioriza. Valoran acreditaciones bancarias, si posee personas en relación de dependencia, si registra retenciones, si tiene bienes, también su facturación de venta comparándola con movimientos bancarios, etc. Una vez reunida la prueba y de acuerdo a si el interesado contesta su requisitoria o no, se hace la evaluación respectiva y el resultado es su incorporación o no a la base E-APOC.

En caso de contestación de la requisitoria, se analiza el descargo y la documentación aportada -facturación o remitos o recibos-. En función de ello, se decide la inclusión o no en la base de E-APOC. De hecho, conforme contestó la testigo, existen casos en los que, tras la evaluación de antecedentes, no son incorporados a ese listado.

Explicó que pueden darse supuestos de contribuyentes a quienes le utilizan el CUIT mediante el uso de su clave fiscal, otros que son mixtos –es decir, que tienen una actividad real y otra ficticia- y están aquellos, que directamente no tienen capacidad operativa para realizar la actividad detectada.

A continuación, la abogada de la parte querellante le consultó si recordaba el caso Guillermo Alberto Schnaider y la deponente expresó que fue fiscalizado en el año 2018. Se presentó indicio de investigación y se siguió el proceso general, determinándose que el domicilio fiscal, legal y comercial estaba fijado en la misma dirección, ubicada en la localidad de Río Ceballos. Se analizó toda la base como se hace normalmente. Que la tarea de constatar físicamente el domicilio no la concretó la testigo sino un miembro de su equipo. Pudo rememorar que se trataba de una vivienda particular.

Continuó diciendo que el contribuyente no contestó el requerimiento y de acuerdo a lo relevado, se veía una facturación con un volumen superior en relación con las acreditaciones que registraba, entonces, se resolvió incluirlo en la base E-APOC.





## *Poder Judicial de la Nación*

Agregó que en relación con este contribuyente Schnaider tuvo dos órdenes de fiscalización. En la segunda, presentó una nota para que se lo excluya de la base a la que había ingresado. Entonces, se procedió a realizarle nuevamente la notificación de la apertura de la orden de fiscalización más el requerimiento, al domicilio fiscal electrónico. Transcurrido un tiempo prudencial, luego de vencido el plazo del requerimiento, se tuvo contacto telefónico con el contribuyente a los efectos de hacerle saber que presentaba una requisitoria vencida para que la conteste, y en esa conversación, le pasó a la deponente el correo electrónico de su contador para que le informen a él de su situación fiscal.

En ese contacto que tuvo con el ciudadano Schnaider, lo único que le manifestó es que no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo y por eso, aportaba el dato de su asesor contable. Recordó que el nombre del contador era Rubén Sánchez.

Al respecto, mencionó que recibió un llamado telefónico del contador Sánchez solicitando información sobre la situación del contribuyente, pidió una prórroga, pero se le explicó los pasos a seguir, es decir, que debía hacer una presentación digital, a los efectos de poder establecer los términos legales para el cumplimiento del requerimiento. Posteriormente, se le envió un correo electrónico con la misma información brindada de manera telefónica. Después, no se tuvo más contacto. Pasaron varios meses y nunca cumplieron con la información, por lo que, se ratificó al contribuyente en la base E-APOC.

Por último, aseguró la contadora Beroqui, que no tuvo otra investigación adicional en relación con Schnaider.

En esa misma línea de evidencia, es preciso reseñar el testimonio de Marcelo Adrián Moncada, de profesión contador y empleado de AFIP-ARCA, que actualmente ostenta el cargo de supervisor de fiscalización, con una trayectoria de casi 35 años en el organismo.

El declarante, manifestó que desde el año 2010 al año 2020 fue analista en la división de investigación, donde su tarea básicamente consistía en detectar contribuyentes apócrifos lo más pronto posible. Explicó que son

USO OFICIAL





aquellos que emiten comprobantes sin tener capacidad económica, financiera o productiva para sostener su inscripción en esa actividad permanente que figura en ARCA.

Para comenzar su relato, quiso explicar los parámetros que utilizan desde la institución pública mencionada para identificar a los contribuyentes E-APOC. Mencionó caracterizaciones generales vinculadas con gente humilde, en lo económico, pero también de escasos en lo social y en lo cultural, que presentan viviendas precarias y se trata de contribuyentes que no tienen una historia económica dentro de AFIP, es decir, registran actividad tributaria reciente. Agregó que se suele detectar en la facturación de los primeros meses, a partir de su inscripción, montos demasiado importantes. A su vez, no suelen poseer bienes o solo algunos de escaso valor y no registran compras o gastos que puedan justificar esa facturación como verdadera. Estos contribuyentes, por lo general, no cuentan con acreditaciones bancarias y es común que se inscriban en más de una actividad, es decir, dos, tres, cuatro rubros inconexos entre sí, por ejemplo, construcción, publicidad, transporte, asesoramientos.

En relación con la presente causa, el testigo mencionó que, a mediados del año 2019, su jefe le encomendó un trabajo tendiente a buscar personas, organizaciones, sujetos que estuvieran creando o facilitando contribuyentes E-APOC y le dio un periodo de tiempo.

En ese marco, logró encontrar unos 84 contribuyentes E-APOC o con parámetros que los hacían sospechosos de E-APOC, relacionados por un mismo hilo conductor. Lo que tenían en común en esa época, era que había algunas pocas direcciones IP de las cuales esos contribuyentes E-APOC (84) emitían sus facturas electrónicas. Eso se judicializó y recayó en la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba.

Luego, también lo comisionaron para actuar en la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba, concretamente, para esta causa. En esta oportunidad, le hicieron saber que una de esas personas, es decir, uno de esos 84 contribuyentes E-APOC, de nombre Sandra Mónica Hurtado Arango, había efectuado una denuncia que indicaba que le habían utilizado sus datos fiscales.





## *Poder Judicial de la Nación*

El testigo, puso en conocimiento todo lo investigado hasta el momento, e incluso los domicilios desde los cuales, o sea, las IP desde donde se emitían gran parte de la facturación electrónica. Resultó ser, que el domicilio de la cual salían las facturas de la señora Hurtado coincidía con otros cuatro contribuyentes E-APOC (Maldonado María, Argento Adriana, Medina Alberto e Ibarra Trucco, Maximiliano).

Cuando le consultaron al testigo para que declare en esta audiencia, de acuerdo a su experiencia, qué perjuicios ocasiona al Fisco el fenómeno de la emisión de facturas apócrifas, contestó que suelen ser realmente montos millonarios.

Explicó que un contribuyente que se inscribe, empieza a facturar cuentas importantes o desmesuradas o que no están en línea con su capacidad fiscal, y esos comprobantes, tienen por destino otros contribuyentes a los que se los computa en sus libros como compra válida. Esa operatoria, lo primero que implica, es que no paga IVA, o sea, le permite no pagar el impuesto de valor agregado de esa operación.

De manera que, el primer perjuicio directo o cuantificable, es el monto de IVA, el 21% de cada comprobante falso. Luego, está el impuesto a las ganancias que tiene impacto económico de acuerdo a como se verifique.

El contador Moncada fue consultado también, para que conteste desde su experiencia profesional y como funcionario de investigación, ¿quién se beneficia con la emisión y el uso de ese comprobante?. Dijo que el primero es quien se dedica a vender la factura.

Explicó que, estos cinco contribuyentes detectados, emitían su facturación y no tenían más vinculación entre ellos que la IP. Se hizo evidente que el comprobante se estaba haciendo para venderlo, pues en general ese tipo de facturación tiene un precio. Entonces, el primer beneficiario es ese sujeto, esa organización que genera el comprobante apócrifo y lucra con ello. El segundo, es a quien se le computa esa factura porque tiene 21 % de IVA que él no lo pagó.

USO OFICIAL





Puede ocurrir que un contribuyente apócrifo facture a otro apócrifo y se genere una cadena. Lo que buscan con la generación de un contribuyente E-APOC es que tenga la mayor vida posible, porque eso les permite, seguir emitiendo, vendiendo, facturando en su nombre.

El testigo insistió en que todos esos contribuyentes que nombró tenían en común la dirección IP, o sea, el domicilio desde donde se emitía la facturación electrónica.

Volvió a explicar que, cuando la Fiscalía Federal N° 1 lo comisionó para intervenir en esta causa, ya tenía el domicilio de la IP desde la cual se emitían las facturas electrónicas E-APOC de las cinco personas mencionadas, entre las cuales estaba Hurtado. La IP se identificó como 190 17 3683, de titularidad de Rubén Daniel Sánchez y el domicilio de IP en la calle Corro N° 185 de esta ciudad de Córdoba.

Al explicar que significaba IP, en un lenguaje coloquial y de acuerdo con su conocimiento de investigador -no técnico- sería el lugar desde donde, a través de un servicio de internet, se emite una factura electrónica. En este caso, se trataba de una IP fija perteneciente a Telecom y esta empresa de telefonía fija da cierta permanencia en el tiempo. Comento al respecto que Telecom cuando brindaba el servicio de internet le asignaba a cada cliente una o más IP.

A continuación el contador Moncada aclaró que en la investigación en la que participó había más direcciones de IP, con números diferentes que también se analizaron en la otra pesquisa. Haciendo memoria, el testigo respondió que solo puede decir que de esa IP 190173683 se emitieron las facturas electrónicas de esos cinco contribuyentes E-APOC.

Hubo más de un IP, pero su trabajo se circunscribió al análisis de estos E-APOC, que arrojó tener en común esa dirección de IP donde se emitían facturas. Reiteró que se encontraba en un proceso de investigación de una causa que tenía 84 contribuyentes E-APOC, con facturación electrónica. Esa facturación electrónica se vincula con IP. Las IP pueden ser 10, 20, 80 o 300. Cuando lo comisionó la Fiscalía Federal N° 1, le aportó su análisis que decía

que la IP de la facturación de Hurtado, se vinculaba con la dirección Corro y el





## *Poder Judicial de la Nación*

titular, conforme lo informado por Telecom a la Fiscalía era el señor Rubén Sánchez.

A su vez, comentó en la audiencia de debate que, en relación con la señora Hurtado, no recordaba haber detectado facturación electrónica emitida desde otra IP distinta a la de calle Corro, pero no pudo asegurarlo.

Manifestó que el trabajo de investigación que se hizo, dio como resultado otra organización no vinculada con esta causa, que quedó en manos de la Fiscalía -causa Vieyra-.

A su tiempo, el testigo también respondió el interrogatorio efectuado por el abogado defensor, Dr. Sonzini Astudillo (h), quien en primer lugar refirió al supuesto método infalible de encontrar domicilios físicos a través de las IP. El contador Moncada aclaró que se basó, para su análisis, en la información aportada por la empresa de telefonía, que registra las IP. Luego, si fueron falsas o no eran ciertas, no podía saberlo. Adicionó que, en su experiencia, nunca vio alteradas las IP pero no supo responder si eso era posible porque dicha contestación, según mencionó, estaba fuera del alcance de su especialidad.

A su vez, dijo que no sabía definir técnicamente que era un VPN, ni que era una suplantación de IP o el IP "spoofing". Tampoco si en el contexto de la ciberdelincuencia se suelen utilizar IP falsas.

Agregó que, en el marco de esta investigación, pudo determinar el sistema a través del cual se emitía la facturación, y era "una facturación electrónica en línea". Explicó que dicho mecanismo implica que el contribuyente, tras loguearse con CUIT y clave fiscal, ingresa al servicio que brinda la página para facturar en línea, emite el comprobante y en ese momento, porque solo funciona con un servicio de internet, esa factura puede vincularse con la IP, identificando el lugar desde donde sale la factura. Mencionó que para usar este sistema de comprobantes en líneas, no es necesario tener alguna formación técnica o profesional especial.

A la consulta sobre que sucedió con los 79 contribuyentes E-APOC que había identificado en la otra investigación, dijo que no podía responder porque

USO OFICIAL





no participó del análisis de los resultados de los allanamientos, y por tanto, no podía asegurar que estén vinculados con esta causa.

Por último, el declarante recordó las características generales que presentaban estas 5 personas incluidas en la base E-APOC. Aunque reconoció serle dificultoso reunir a todos en algunas de ellas, deslizó que solían ser contribuyentes jóvenes, sin bienes, con viviendas humildes, de recientemente inscripción y facturación en 3 o 4 meses de montos significativos.

En relación con la información hasta ahora aportada por los funcionarios de ARCA que testificaron en este juicio y solo a los efectos de clarificar documentalmente, en un ejemplo concreto, las detecciones internas que alarman a la entidad fiscal sobre movimientos sospechosos de los contribuyentes, basta invocar el caso de Hurtado, que precisamente registró una "baja definitiva" en su condición de monotributista a partir del período 12-2018, con motivo de "Renuncia por internet" (fs. 171). Adicionalmente, se constató el alta en impuestos de IVA y Ganancias (Personas Físicas) desde el período 01-2019, con la particularidad de que la inscripción no se tramitó en una agencia, habiéndose efectuado la misma el día 14 de enero de 2019.

Por otra parte, a fs. 174 del informe, apartado "Resumen de Declaraciones Juradas – IVA", se observa un incremento exponencial en los subtotales de "Débito Fiscal" y "Crédito Fiscal", los cuales pasaron de \$4.430,17 a \$321.294,94 en el lapso de un mes. A su vez, la lista de períodos informados por la contribuyente detalla los tres primeros períodos del año 2019. El período N 1 registra un importe total de \$34.116,36, mientras que los N 2 y N 3 evidencian un crecimiento considerable, ascendiendo a \$1.832.627,28 y \$1.474.722,88, respectivamente (fs. 180/186).

Dicho esto, se hace evidente que el juez de instrucción encontró motivos más que valederos en los datos obtenidos de la investigación penal y de la administrativa, para ordenar fundadamente la ejecución de procedimientos simultáneos de allanamiento, registro, requisa y secuestro, a los efectos de profundizar la pesquisa. De hecho, la aserción de esa decisión jurisdiccional se vio reflejada en los resultados significativos que arrojaron los medios auxiliares de prueba mencionados, para el esclarecimiento de la presente causa.





## *Poder Judicial de la Nación*

De allí que, la búsqueda de elementos relacionados con los hechos investigados fue documentada en actas labradas con fecha 11 de octubre de 2019, que describen los procedimientos de allanamiento concretados, con todos los requisitos formales establecidos en la ley procesal vigente.

Vale decir, entonces, que en el domicilio del imputado Ricardo Esteban Cupper, ubicado en calle Mercedario N° 2082 de esta ciudad de Córdoba, se incautó de la habitación N° 2, utilizada como depósito, una carpeta de color rosa del tipo Nepaco conteniendo documentación varia que contenía inscripciones, facturas, entre otras, en 123 fojas. Luego, en la habitación N° 3 utilizada por el imputado Cupper se procedió al secuestro de 340 fojas, que incluía una agenda de color rojo, constancias de inscripciones, listado de clientes, etc.

A su vez, se hallaron 4 talonarios de facturas en blanco y una tarjeta empresarial. Del living comedor se incautaron 2 agendas y 7 carpetas tipo nepaco con 489 fs. de documentación impositiva.

Del mismo ambiente, dos folios con impresiones de pantallas de información extraída de bases de AFIP (sistema E-Fisco), una agenda de color negra con 83 fojas, y en la mesa, había veintitrés mil pesos (\$23.000) que fueron secuestrados.

Se aclaró en el acta que todos los documentos anteriormente señalados fueron inspeccionados por personal de AFIP, presente en el procedimiento, quienes los consideraron de relevancia para la investigación.

A su vez, del interior de un maletín de color negro que se ubicaba en el living comedor se extrajo, para su incautación, tres sobres con dinero en su interior, uno con la inscripción en lapicera "Cupper \$10.000", otro con la inscripción "Delera \$6.000" y el último que decía "Guzman \$6.000", todos guardaban esa cantidad en billetes de moneda nacional. Junto a ellos, se secuestró una chequera del banco Patagonia de la cuenta 0282-282020202-00 a nombre de Servicios RC La Rioja con domicilio en Bv. Illia N° 523. En su interior, un cheque desprendido de serie N° 205464787, firmado, por la suma de cuatro mil pesos (\$4.000) que vencía el 11 de octubre de 2019.

USO OFICIAL





Sobre una mesa, se encontraron dos facturas tipo B de Western Union con remitente Ricardo Cupper y destinatario Yessenia Corporan Colon junto a 6 sellos, un posnet con tarjeta sim de la empresa Personal N° 89543420318907060108 y dos tarjetas -de débito y crédito- del Banco Santander Río a nombre de Ricardo Cupper.

Por último, se consignó que durante el procedimiento, los agentes hallaron en la habitación de Cupper dos teléfonos celulares ambos de la empresa Claro, uno con número de sim 954341552890401 y el otro, 8954310191083943698 (acta de fs.314/316).

De hecho, el procedimiento antes detallado estuvo a cargo del ayudante Sebastián Villagra, cuyo testimonio incorporado a este debate por lectura y que obra a fs. 311, refrenda acabadamente todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se procedió al allanamiento, con el consiguiente secuestro de todos los elementos de interés antes reseñados, en poder del acusado Cupper.

En lo que respecta al registro de la oficina contable ubicada en calle Corro N° 185, de esta ciudad de Córdoba, el acta de fs. 333/335 labrada por el Inspector José Luis Cabrera, da cuenta que en un primer momento se hizo presente en el lugar Franco Agustín Patina Ballaratti en representación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, quien tras consultar en base de datos y determinar que Raúl Horacio Molina no se encontraba registrado como contador mientras que Rubén Daniel Sánchez tenía matrícula cancelada y que el domicilio allanado no poseía registro que lo habilite para funcionar como estudio contable, procedió a retirarse del lugar, habida cuenta que, no correspondía su presencia en el procedimiento.

Dicho esto, tras revisar todas las dependencias del lugar, descriptas como Oficina 1, Oficina 2 y Depósito (croquis fs. 342), se pudo incautar gran cantidad de documentación que fueron detalladas en 5 fojas de planillas agregadas a fs. 337/341.

A su vez, en la oficina 1 se halló una tarjeta personal a nombre de Valeria mientras que en la oficina 2, del interior de los cajones del escritorio allí ubicado, se extrajeron 2 credenciales profesionales a nombre de Rubén Daniel





## *Poder Judicial de la Nación*

Sánchez expedidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 sellos automáticos a nombre de Rodolfo Daniel Romero CUIT 20-28357957-4, Adriana Argento CUIT 27-13961752-0 y Daniel Castro CUIT 27-32645706-5, 2 CD'S sin identificación, y 2 teléfonos celulares, uno de los cuales tenía chip colocado de la empresa Claro N° 89543181533257056423.

Del mismo sitio, se incautó CPU, modem y disco externo marca Seagate conforme detalle consignado en el acta de secuestro.

Ahora bien, se dejó explicitado en dicho instrumento que, personal informático de AFIP advirtió al encender la computadora ubicada en la oficina 2 que no contaba con clave de acceso ni usuario y que al abrir el navegador web, automáticamente, se ingresaba a las cuentas de correo electrónicas de [crbendsanchez@gmail.com](mailto:crbendsanchez@gmail.com) y [cr\\_rubendsanchez@yahoo.com.ar](mailto:cr_rubendsanchez@yahoo.com.ar) como así también se ubicó en el sistema un archivo con extensión .xls de nombre "claves para 2018" que se encuentra en el path C:/ZZ BUCK UP PEN DANIEL 11 05 2018/KINGSTON/B CLAVES con una planilla EXCEL que contenía distintas direcciones de correo electrónico y sus respectivas claves de ingreso a las mismas.

Por lo cual, en estricto cumplimiento de las directivas impartidas con el juez federal, se procedió al acceso y requisa de las cuentas de correo electrónicas abiertas y planilla de mención, al solo efecto de recabar información de importancia relacionada con la presente causa. Se aclaró que personal de informática imprimió distintos correos electrónicos a modo de muestra del total existente en las distintas cuentas, resultando de ello, tres cuerpos de 8, 13 y 9 fojas respectivamente.

Cabe agregar que el oficial de la policía federal a cargo del procedimiento antes mencionado, José Luis Cabera, brindó su testimonio en el debate sobre aspectos sustanciales acorde a lo asentado en el acta respaldatoria, cuya firma inserta reconoció.

USO OFICIAL





Expresó que el lugar objeto de registro estaba cerrado, sin embargo, no debieron usar la fuerza pública porque una persona se hizo presente con las llaves y lo abrió voluntariamente.

Además, mencionó que inicialmente, junto a personal de AFIP concurrió un veedor del Consejo de Ciencias Económicas, que tras consultar en su base de datos, constató que el recinto no estaba registrado como estudio contable, por lo cual, dio por terminada su intervención y se retiró.

De todos modos, según indicó el testigo, más allá de no recordar si en el exterior de la vivienda había algún cartel indicativo, era evidente que funcionaba como oficina del rubro administrativo por el tipo de mobiliario, las computadoras y la documentación incautada.

A tal efecto, mencionó que vio carpetas con CUIT de personas y de empresas.

A su vez, el funcionario de AFIP (ARCA), Marcelo Adrián Moncada, testificó en la audiencia que en el marco de esta causa participó en los allanamientos concretados en calle Corro N° 185 y en el domicilio laboral del imputado Sánchez, en la Procuración del Tesoro ubicado en calle Duarte Quiros N° 457, de esta ciudad de Córdoba.

En relación con ello, dijo que tras identificar el domicilio de la calle Corro N° 185, lo comisionaron para constarlo. Lo observó en dos o tres oportunidades. El lugar era céntrico, pero no se veía mucho movimiento, con una fachada de quizás un estudio contable, una escribanía, pero no recordó si tenía cartelería que lo identificara. Tenía la referencia que era un posible estudio contable. De hecho, en la orden de registro se le había dado participación al Consejo de Ciencias Económicas de esta ciudad, pero el representante de dicho ente se retiró tras corroborar que no estaba matriculado el contribuyente de ese domicilio.

Comentó que se ingresó con la llave que trajeron del domicilio particular de uno de los implicados.

Aclaró que, si bien no era el titular de la orden, supuso que se aguardó en el lugar, a la espera de la llave, porque no había nadie en el recinto y se ~~trataba de un estudio contable o similar.~~





## *Poder Judicial de la Nación*

En su experiencia, si alguna vez fue titular de una orden de allanamiento -no recordaba-, siempre fue acompañado de personal policial. En ese contexto, explicó que la valoración de ingresar rompiendo la puerta o con su llave, la tiene el titular del allanamiento. De hecho, en su opinión, si se tratara de un domicilio particular y fuera el comisionado para diligenciar la orden, analizaría el horario, tocaría la puerta y esperaría un tiempo prudencial para aguardar que le abran, caso contrario, tiraría la puerta abajo porque adentro puede estar la prueba incriminatoria.

Finalmente, agregó que, si bien no participó en la desintervención de la documentación que se secuestró en ese allanamiento, pudo ver que tenía vinculación con lo que él había investigado.

Por lo demás, el juez de instrucción dispuso el allanamiento de la oficina que el contador Sánchez ocupaba en la Procuración del Tesoro del Gobierno de la Provincia de Córdoba, ubicada en Duarte Quirós N° 457 de esta ciudad de Córdoba, con fin específico de proceder al secuestro de remitos, contratos, poderes, escrituras, resúmenes de cuenta, chequeras, comprobantes, libretas, agendas y demás documentación que pudiera servir de evidencia para la investigación de presuntas maniobras de alteración dolosa de registros en curso.

En este sentido, se incorporó a fs. 348/349 el acta labrada y rubricada por los funcionarios públicos actuantes, comisario Fabio Ramón Andrés Ascona secundado por el Inspector Marcos Aníbal Molina Navarro, que da cuenta que el día 11 de octubre de 2019, a las 13:30 hs., en cumplimiento de la orden judicial emanada por autoridad competente y con resguardo absoluto de las formas requeridas por la ley para dar cumplimiento a la misma, se incautó desde el escritorio personal del imputado Sánchez un lote de 36 fojas compuesto de facturas, anotaciones, y documentación varia. Luego, del trabajo específico practicado por personal informático de AFIP se logró el secuestro de un CPU, marca ASUS, inventariada e identificada por la oficina de soporte técnico con WS55681, número de acceso y clave para su estudio.

USO OFICIAL





Resta agregar que las declaraciones testimoniales de los policías intervinientes en el acto, Ascona (fs. 344/346) y Molina Navarro (fs. 350/352), fueron coherentes y confirman los aspectos sustanciales del secuestro antes narrado.

Por otra parte, el domicilio del imputado Raúl Horacio Molina, ubicado en calle Luis de Azpeitia N° 2630, B° Santa Ana de la ciudad de Córdoba, también fue objeto de registro.

Así las cosas, el acta de secuestro obrante a fs. 366/368 de autos, documentó fehacientemente la incautación de elementos conducentes para la investigación. En este sentido, del sector identificado en el croquis como “estudio de la vivienda” se encontró un morral con un sobre blanco con inscripción “Jose Ímido \$4968”, membrete “RM” conteniendo dos (02) facturas tipo “A” a nombre de Delera Servicios Empresariales S.A.S. por un monto de \$61.986,48 y la restante por \$52.514 y dos (02) recibos en blanco tipo “X” a nombre de la misma empresa, una (01) agenda con inscripción “RM SERVICIOS EMPRESARIALES”, “LIC.RAÚL MOLINA”, con anotaciones varias y dentro de la misma agenda, tres cheques endosados por Daniela Castro 27-32645706-5 del Banco Superville por el monto de \$13.000 cada uno, dos cheques del Banco Macro por la suma de \$13.750 endosados a nombre de Rubén Daniel Sánchez, contador público MP 305 F° 192 CPCECABA.

Dentro del mismo morral se encontró la suma total de dos mil quinientos pesos (\$2500), un teléfono celular marca Sony de la empresa Claro y billetera con documentación personal del Sr. Molina junto a la suma de doscientos veinte pesos (\$220). En la misma habitación, se incautó un talonario de pagarés en dólares en blanco, tres de ellos usados, una llave tipo acytra con llavero con la inscripción “Lubricar”, respecto de la cual, el Sr. Molina indicó ser la llave del estudio sito en calle Corro N° 185, ciudad de Córdoba.

Surge del acta que, continuado el registro del domicilio, en el pasillo que daba acceso a los diferentes sectores del mismo, se encontraron documentación, anotaciones manuscritas en hojas borrador, distintos tipos de factura, recibo de sueldos, etc., en 39 fojas, y una agenda de 72 fojas, que personal de AFIP consideró de posible interés para la causa y se encuentra





## *Poder Judicial de la Nación*

detallada a fs. 369. Por lo demás, en la habitación incautaron la suma de dieciocho mil trescientos pesos (\$18.300).

Se aclaró en el instrumento público confeccionado que al momento de proceder al secuestro de un modem que se encontraba en el living-comedor, el imputado mostro nerviosismo ante la requisa de uno de sus muebles tipo bodega, por lo cual se volvió a revisar el mismo, y al hacerlo, se encontró en una de las cavidades, detrás de una botella de vino, el total de treinta y siete cheques de distintos firmantes al portador, discriminados a fs.370/371 de autos, haciendo la suma total de pesos quinientos treinta y dos mil ciento quince con treinta y ocho centavos (\$532.115,38).

En relación con las circunstancias que rodearon la diligencia de la orden de registro domiciliario emanada de autoridad judicial competente, compareció a la audiencia de debate la oficial de policía federal a cargo del mismo, Betiana Lorena Magallán, quien actualmente ostenta la jerarquía de inspectora, y fue interrogada por las partes.

A tal efecto, comentó que, en el año 2019, prestaba servicio en lo que es ahora la DUOF Córdoba, cumpliendo funciones como miembro de brigada.

Cuando le fue consultada por el allanamiento del día 11 de octubre del 2019, manifestó que se acordaba del procedimiento, aunque no podía precisar detalles en orden a los elementos secuestrados y otras circunstancias. Por lo cual el Dr. Sonzini Astudillo solicitó la lectura de un fragmento de su declaración efectuada en la instrucción y que fuera agregada a fs. 362, en relación a los detalles de su ingreso a la propiedad.

La testigo contestó que se accedió por la fuerza pública, pues estaba habilitada por la orden de allanamiento. Aclaró que ella no había formado parte de la investigación, pero le comentaron los detalles de la misma antes de concretar la comisión. Que ese día la citaron horas antes, le explicaron la característica de este domicilio y los pormenores del caso. Básicamente que el investigado manejaba pendrives, memorias y demás dispositivos electrónicos, por lo que, se tomó la decisión de ingresar por la fuerza porque son elementos fáciles de destruir. Desconocía si adentro había personas. La oficial Magallán

USO OFICIAL





insistió en orden a justificar la premura del ingreso por la búsqueda de material tecnológico. Incluso, mencionó que creía haberlo dejado asentado en el acta. De hecho, al leerle el extracto respectivo dijo que hubo un error de tipeo y aclaró que quiso decir: “una vez arribado al lugar... en razón de la posibilidad de la pérdida de materiales”

Le consultaron si era habitual que se ingrese destruyendo la puerta del frente de un domicilio particular, en horario en que la gente duerme y respondió que dependía de lo que se esté buscando en el domicilio. Debía analizarse la causa. Comentó que ha ingresado a moradas por droga y no rompió la puerta porque la puerta estaba abierta, pero también lo ha hecho de manera rápida y con fuerza, a fin de evitar la pérdida de elementos de prueba.

En relación con la consulta de cómo se comportaron con los habitantes de la vivienda registrada, dijo que no se ejerció ningún tipo de fuerza sobre las personas. Aclaró que, por una cuestión de seguridad, siempre se los reduce, con palpado de armas y después, se los reúne en un lugar común como puede ser cocina, comedor y demás. Todo ello, para seguridad no solamente del personal policial, sino de AFIP, de los testigos, etc.

Cuando le solicitaron a la deponente que describa un poco más en qué consiste habitualmente esa reducción, dijo que era pedirle a viva voz que la persona se ponga contra la pared o en el piso o se quede quieta con las manos levantadas. Se solicita a la persona que voluntariamente se tire al piso. Solamente si se resiste la persona, se ejerce la fuerza. Utilizan armas para esto, es decir se empuñan.

Recordó que actuaron con la presencia de testigos. A su respecto, mencionó que ellos se resguardaron en el móvil policial e ingresaron una vez asegurado el lugar. Se dio lectura de la orden de allanamiento, y ahí los ocupantes se enteraron todos de los pormenores de la situación. Explicó que mientras se reducía a los habitantes de la vivienda, los testigos permanecían en el móvil policial. De hecho, al acceder a la vivienda, aquellos ya se encontraban sentados y palpados.

Consultada sobre si había mujeres en el domicilio, dijo que estaba la esposa del investigado. No recordó ningún inconveniente.





## *Poder Judicial de la Nación*

Agregó que la orden de allanamiento fue diligenciada muy temprano en la mañana, pero no recordaba la hora exacta. La razón, justamente, para encontrar a los investigados.

Respecto a la actitud asumida por el investigado, la oficial dijo no recordar haber tenido problemas. Solo que, cada vez que se acercaba a un mueble, se ponía nervioso y eso fue lo que los llevó a volver a requisarlo en un momento del allanamiento.

Aclaró que “se puso nervioso” y reclamaba por qué volvían sobre ese objeto si ya lo habían revisado. Como insistía, les llamó la atención. Que efectuaron una segunda requisa y encontraron cheques o algo así. No estaban visibles, tuvieron que sacar, de a una, las botellas de vino y en uno de sus cubículos, hallaron la documentación cambiaria.

Por lo demás, mencionó que no fue una reducción sino una inmovilización voluntaria de las personas, y ello generalmente no se asienta en el acta, porque es rutinario.

Cuando le consultaron si empuñar el arma no era una forma de coacción o de fuerza dijo que se utiliza porque cuando se ingresa al domicilio para allanar porque no se conoce quien se encuentra adentro y si la persona tiene un arma de fuego, blanca u otro elemento contundente. En un procedimiento del tipo, donde se ingresa por la fuerza pública, los ocupantes de la vivienda suelen tener reacción, exaltación propia de la situación, incluso pueden pensar que se trata de un robo. Por esas razones, se empuña el arma en resguardo propio y la de sus compañeros.

Para concluir su declaración, enfatizó en que el tipo de delito no aseguraba el temperamento de los acusados y citó como ejemplo un allanamiento por un caso de evasión fiscal en el que se secuestraron más de 20 armas de fuego.

Antes de continuar con el análisis de la prueba, motivado en el pedido efectuado por el Dr. Sonzini Astudillo de dar vista al Fiscal a los efectos de investigar un eventual exceso policial en la diligencia del allanamiento practicado sobre la vivienda de Molina, debo decir que, las explicaciones

USO OFICIAL





vertidas por la oficial Magallán en el debate resultaron, a mi criterio, suficientes para justificar el uso de la fuerza pública y la empuñadura de armas al inicio del procedimiento encomendado. No obstante, de no coincidir con esta tesitura, la parte que sintió conculcados sus derechos conserva la facultad de interponer la denuncia ante la autoridad competente y el Ministerio Público Fiscal interviniente, en igual sentido, de actuar oficiosamente en caso de entenderlo procedente.

Para continuar, vale aclarar que el Juzgado Federal N° 1, dentro de las medidas investigativas ordenadas, con fecha 11 de octubre de 2019 comisionó personal policial para constituirse en calle Ituzaingó N° 74 de la ciudad de Córdoba, donde funcionaba la firma "Security Box" a los efectos de proceder al fajado de la caja de seguridad de Raúl Molina haciendo saber a la institución que la misma quedaba interdictada por orden y disposición del tribunal.

Ocurrió que al hacerse efectiva la manda judicial, a las 14:30 hs., se informó que la caja de seguridad N° 1964 a nombre del imputado Molina había sido manipulada ese mismo día, momentos antes (13:36 hs.) por la cotitular de la cuenta Mónica Liliana Bergese. Estas circunstancias fueron detalladas en el acta de fs. 357/358 y ratificadas por el funcionario actuante Fernando Giraudo a fs. 354/355.

Por otra parte, en la misma jornada, Mónica Liliana Bergese había estado en horas de la mañana presente en su domicilio -7:20 hs.- cuando se practicó el allanamiento y detención de su esposo.

Por lo cual, el juez de instrucción libró nueva orden de allanamiento sobre la vivienda sita en calle Luis de Azpeitia N° 2630, B° Santa Ana de la ciudad de Córdoba, habitada por Mónica Liliana Bergese, a fin de secuestrar dinero y/o documentación que pudiera haberse retirado de la caja de seguridad y encontrarse en el lugar. Así fue que, con fecha 17 de octubre de 2019 se diligenció la orden de registro domiciliario, haciéndose uso de la fuerza pública, por ausencia de moradores. El acta menciona que quince minutos después del ingreso, se hicieron presentes Juan Cruz Molina y Mónica Liliana Bergese manifestando ser los dueños y ser la segunda vez que los allanaban. De esta diligencia, practicada por el oficial Fernando Iván Trinidad, se obtuvo





## *Poder Judicial de la Nación*

documentación del inmueble, de vehículos y personal del imputado, según consigna de la autoridad judicial (fs. 471/472).

Por último, se detalla el resultado del allanamiento practicado en el misma jornada -11 de octubre de 2019- sobre el domicilio del imputado Rubén Daniel Sánchez, ubicado en calle Ángel Roque Suarez N° 398, de esta ciudad de Córdoba, tal cual surge del instrumento público confeccionado por el inspector a cargo del procedimiento, Marcos Aníbal Molina Navarro, en cumplimiento de la normativa procesal aplicable (fs. 388/390).

De allí se evidencia la incautación de dispositivos electrónicos: un equipo de CPU color negro, un router, un modem y dos antenas debidamente identificadas, un pen drive Kingston y una notebook color negro Compaq, y el teléfono celular marca Samsung de propiedad del imputado. A su vez, dinero en efectivo, doce mil trescientos noventa y cinco pesos (\$12.395) fueron hallados en un bolso y veinte mil pesos (\$20.000) en el interior de un placar de la habitación ocupada por Sánchez. También documentación de valor para la causa en 136 fojas.

Por lo demás, interesa mencionar que de adentro de un bolso de color negro se extrajo una porta chequera símil cuero de color marrón con 7 cheques, todos ellos de pago diferido y a nombre del portador con distintas fechas, montos y de entidades bancarias diversas, debidamente individualizadas en el acta de secuestro.

A su vez, el oficial del policía federal comisionado para el procedimiento, Marcos Molina Navarro, declaró en carácter de testigo en la etapa instructora en un todo acorde a las manifestaciones vertidas en el acta, cuya firma ratificó (fs. 385/387).

En relación con los cheques secuestrados en el marco de los allanamientos practicados en la presente causa, por orden del juzgado de instrucción, fueron depositados en una cuenta judicial abierta al efecto salvo los gestionados al cobro por compensación de valores y aquel devuelto sin fondos, según informe del Banco de la Nación Argentina, obrante a fs. 522/526 de autos.

USO OFICIAL





Ahora bien, a los efectos de determinar el valor probatorio que detentan los hallazgos documentados en las actas de secuestro antes reseñadas, resulta imprescindible comenzar por el testimonio de Edgardo Fabián Córscico, quien, en su rol de funcionario de ARCA, con una antigüedad de 35 años en el organismo, fue convocado a prestar declaración en este juicio oral.

Con su relato pormenorizado acerca de su intervención en estos autos, dio a conocer el método de investigación utilizado para analizar la evidencia recolectada en los procedimientos ordenados por autoridad judicial.

Vale decir que, el contador de ARCA se desempeña en la división investigaciones de la Regional Córdoba y cuenta con demostrada solvencia en dicha entidad, como analista de información sobre posibles usinas de facturas apócrifas.

En lo que respecta a esta causa, la actuación de Córscico se circunscribió a estudiar los elementos que, en soporte papel e informático, le fueron proporcionados a partir de los allanamientos concretados.

En ese marco, ratificó la firma y reconoció como propio el informe incorporado a fs. 1388/1477 de autos.

Concretamente, explicó que su tarea consistió en relevar los CUIT que surgían de la documentación secuestrada e hizo un listado de los mismos, para cotejarlos con la información que surgía de “SACA”, que es una herramienta que posee ARCA-DGI. Así pudo extraer la información de diferentes tablas, entre las que mencionó: padrón, facturación electrónica y los libros compras que se relacionaron con ese universo de CUIT. Sobre el funcionamiento de SACA el testigo mencionó que se procede a cargar un detalle de CUIT, un universo de CUIT proveniente de cualquier origen y se obtiene de la base de datos del organismo, por ejemplo, si se encuentran incluidos en E-APOC, el nombre, la denominación, el domicilio, las altas de impuestos, etc.

En el caso, además, se pudo determinar la facturación electrónica emitida durante el período enero 2016 a octubre de 2019 que fue el mes de los allanamientos.

Con esa información, apuntó que había 307 CUIT y de ellos, 147 contribuyentes estaban observados, entre ellos, 46 se encontraban en la base





## *Poder Judicial de la Nación*

E-APOC y 117 poseían claves fiscales anotadas en el listado (soporte papel) aportado.

El testigo fue interrogado sobre estos dos criterios de observación y acerca de cuál fue la razón de su elección. A tal efecto, explicó que a través de los diferentes procesos de fiscalización que practica el organismo, se identifican a los contribuyentes que funcionan como usinas de facturas apócrifas y se los incluye en la base E-APOC. De manera tal que, si el sistema arroja ese resultado, significa ya esos contribuyentes han sido identificados con operaciones apócrifas por la entidad. De otro modo, la facturación refleja ventas inexistentes o falsas y ello permite a los usuarios reales disminuir sus créditos fiscales para pagos de impuestos.

A su vez, se detuvo también en las 117 claves fiscales anotadas, porque si bien ellas tienen el carácter de personal e intransferibles, ese conocimiento por parte de un tercero le permite efectuar diversas actividades a pesar de no haber sido autorizadas por el titular de la clave fiscal, como puede ser dar de baja y altas de impuestos, emitir facturación apócrifa, etc. Dio como ejemplo el dar de baja al monotributo y alta en IVA que permite generar esos créditos fiscales a otros contribuyentes.

Cuando la abogada de la parte querellante -ARCA- le consultó, según su experiencia, que debería hacer una persona que necesita que su contador le haga sus declaraciones juradas, modifique datos o los actualice, y si para ello, es necesario otorgarle su clave fiscal. A lo que el testigo contestó con un rotundo “no”.

Que siempre se le explica a los a los contribuyentes que van a solicitar la inscripción, que la clave fiscal es personal e intransferible, como una clave de home banking.

Entonces, el contador le debería informar a su cliente que como contribuyente, con su clave fiscal, debe ingresar a su perfil y en el “servicio de administrador de relaciones” autorizar al contador a realizar diferentes servicios. En general, solamente es para presentar declaraciones juradas, pero también pueden solicitar que emitan comprobantes. Entonces, el contador

USO OFICIAL





efectúa la tarea autorizada con su propia clave fiscal, representando el CUIT de persona que es su cliente y queda registrado dentro “de consultas” en los diferentes servicios.

O sea, existe diferencia entre que se haga de esa manera a que lo haga directamente con la clave fiscal del contribuyente. En este último caso, el cliente puede no saber qué actividad están registrando en su cuenta. Por ejemplo, en la base de facturación electrónica emitida, el sistema de ARCA tiene una columna donde identifica el usuario que realizó esa factura electrónica. Aparece en el CUIT emisor, la persona humana o jurídica de quien la hizo.

Cuando es una persona jurídica, la clave fiscal la tiene asociada la persona humana que es el administrador de relaciones, en general, son los socios gerentes en S.R.L., el presidente de una sociedad anónima y esa persona humana autoriza a distintas personas, contadores, empleados administrativos para realizar las diferentes tareas de una empresa.

Ahora bien, en relación con el informe efectuado en la presente causa, el deponente manifestó que visualizó en la facturación electrónica emitida, que figuraba el contribuyente o sea las personas humanas o las sociedades anónimas titulares del CUIT respectivo, no su contador en el rol de administrador de relaciones.

Luego, esos contribuyentes, a su vez, se encontraban en la base E-APOC.

Continuó declarando que trató de identificar la facturación electrónica emitida por los investigados, de los cuales, el único que había realizado esa actividad, en el periodo estudiado, era el contador Rubén Sánchez.

Explicó que, dentro de las tablas de facturación electrónica emitida también, existe una columna donde salen todos los datos de la operación, los montos involucrados, la fecha del comprobante, la fecha de emisión, a quién se le emite, el CUIT del supuesto cliente y una columna de log de IP de alta, donde se identifica de que dispositivos conectados a una red de internet surge esa emisión.





## *Poder Judicial de la Nación*

USO OFICIAL

En este caso, había IP desde las cuales el contador Sánchez había emitido su propia facturación electrónica de honorarios a sus clientes y de esas mismas IP, se visualizaron archivos de comprobantes electrónicos emitidos a contribuyentes que ya estaban incluido en la base E-APOC o que tenían claves fiscales anotadas.

Incluso adicionó que, con la dirección de IP del contador Sánchez, se pudo observar otros datos fiscales relevantes de actividades e impuestos y recordó que desde esa IP se había identificado cambios en altas de impuestos, bajas de monotributo de la denunciante Hurtado. De modo que, a su criterio, confirmaba los hechos denunciados.

Explicó que el “sistema de comprobantes en línea”, es el servicio que presta la ARCA para que los contribuyentes directamente, desde la página web, puedan realizar su facturación electrónica. Son utilizados principalmente por monotributistas o de pequeña o mediana actividad económica y no requiere de ningún tipo de formación profesional o técnica especial. El sistema va guiándolo con pasos.

Hay otra opción para las grandes empresas, programas que generalmente implican hacer su propia facturación electrónica y luego la transmiten a la página de ARCA.

Ya en cuanto al análisis de montos involucrados en la maniobra que reflejó en su informe, dijo que se tomaron en cuenta la facturación electrónica emitida de los 147 contribuyentes que estaban incluidos en la base E-APOC o que tenían claves fiscales anotadas en los elementos secuestrados.

Es decir, se identificaron según la facturación electrónica emitida por estos 147 contribuyentes relevados, se trataron 3,300 clientes o usuarios con un importe de IVA de 144 millones aproximadamente y un importe total de 864,0000, donde se relevaron 14,978 facturas electrónicas.

A su vez, como también se identificaron facturas manuales, esas facturas manuales, la forma la única forma que tenían para computarlas como crédito fiscal fue, de ese universo de 147 contribuyentes -147 CUIT- se extrajo de esta herramienta SACA los libros compras donde se encontraban





informados esos CUIT. Entonces, se relevó el CUIT informante y se identificaron los clientes usuarios de los que presentaron los regímenes informativos de compra. En esta tarea se contabilizaron, obviamente, menos usuarios, 2262, de los cuales se encontraban en ambos regímenes de información, en las tablas de datos, donde se calculó un importe de IVA de 186 millones y 1000 millones de importe total, en el periodo enero 2016 a octubre 2019.

En cuanto a la porción de perjuicio vinculado solo a los usuarios incluidos en la base E-APOC, dijo que, de las 46 usinas incluidas en la base E-APOC, se cuantificó un perjuicio fiscal de aproximadamente 120 millones de IVA, neteados de los clientes que, a su vez, eran usina E-APOC. Porque también se identificó lo que se ellos denominan “cadenas de IVA”, es decir, para dar de alta una usina E-APOC, se empiezan a generar las ventas a los verdaderos clientes usuarios, pero a su vez, requiere que le emitan facturas de compra y a través de las mismas usinas, se facturaban compras para equilibrar un poco la relación débito y crédito fiscal del IVA. Para hacerlo simular como que era contribuyente real.

Atestiguó, conforme a su experiencia profesional como funcionario de investigación, que no era habitual o regular que un contribuyente le pida a su contador que le emita facturas de compras. Lo único que puede emitir cada contribuyente es su factura de venta. Puede suceder que ese pedido de facturas de compra provenga de la necesidad de reducir, irregularmente, su nivel de impuesto, para pagar menos impuesto.

Por lo demás, y en cuanto a las facturas manuales en blanco y emitidas y su registro, mencionadas en la página 11 del informe, explicó que se identificaron en los soportes tanto manual como informático, escaneos de facturas manuales en blanco con números de facturas y se visualizó en las bases de datos de los libros de compras, que habían sido emitidos hasta dos o tres veces el mismo número de comprobante a distintos clientes usuarios, incluidos varios de ellos en la base E-APOC, para reducir créditos fiscales a los clientes que le solicitaron esa facturación.





## *Poder Judicial de la Nación*

El informe de investigación, obrante a fs. 1388/1477, ratificado por uno de sus suscriptores y explicado adecuadamente en el testimonio precedente, en su individualidad, refleja adecuadamente el análisis y entrecruzamiento de datos incluidos en la matriz de perfiles de contribuyentes con las que cuenta el organismo recaudador ARCA. Esta evidencia, en sí misma, permite dotar de suficiente valor convictivo a sus conclusiones.

Puntualmente, se resalta que del universo de los 307 CUIT identificados a través de la herramienta SACA, 147 fueron contribuyentes observados: 118 con sus claves fiscales anotadas en soporte papel o informático, 29 incluidos en la base E-APOC y 17 que tenían claves fiscales anotadas y estaban en base E-APOC.

Se consignó en el informe que “Es dable mencionar en este punto que al identificarse contribuyentes con CLAVES FISCALES anotadas en la documentación secuestrada en los diversos allanamientos, permiten a las personas con el conocimiento de las citadas claves al ingreso a la página de internet de AFIP de dichos contribuyentes para los distintos accesos (altas de impuestos, emisión de facturas electrónicas, presentación de DDJJ, etc.).”

Ahora bien, esos 17 contribuyentes con claves fiscales anotadas e incluidos en base E-APOC fueron nombrados en el informe: “Sarmiento Julio Alberto, Schnaider Guillermo Alberto, Cupper Ricardo Esteban, Medina Alberto Alejandro, Castro Daniela Soledad, Carandino Juan Carlos, Sanchez Juan Jose Nicolas, Paz Diego Nicolas, Quinteros Ricardo Gustavo, Garcia Elosegui Gerardo Gabriel, Ibarra Trucco Maximiliano Juvenal, Baez Abigail Leonarda, Diaz Fabian Alejandro, Delera Carina Liliana, Corporan Colon Yessenia, Villalba Luis Raul, Y Sucesion De Toro Jose Enrique.”

A su vez, algunas empresas mencionadas en el marco de la presente causa judicial que fueron incluidas en la base E-APOC estaban conformadas por personas a quienes se les detectaron claves fiscales anotadas y ello, evidentemente, les permitió realizar gestiones pertinentes ante AFIP-ARCA. Se trató de : CRECER IDEAS & SERVICIOS S.A.S. -Sanchez Juan Jose Nicolas-, DELERA SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.S. -Delera Carina Liliana, Garcia

USO OFICIAL





Elosegui Gerardo Gabriel-, DISTRIBUIDORA DE CE S.A.S. -Castro Daniela Soledad, Medina Alberto Alejandro- y SERVICIOS RC LA RIOJA S.A.S. -Cupper Ricardo Esteban, Guzman Gabriela Ayelen-.

Vale decir también, que tal como recordó el testigo, del citado universo de 147 contribuyentes observados, a través de la herramienta SACA, se extrajo el detalle de facturas electrónicas emitidas por los mismos, por el período 01/2016 a 10/2019 inclusive, con un total de 14.978 comprobantes electrónicos, y operaciones registradas por parte de los clientes/usuarios según Libros Compras RG 3685/14 (comprobantes manuales y electrónicos) presentados en un número de 17.176 operaciones de compras registradas.

Otros de los hallazgos que son importantes mencionar, del proceso de investigación efectuado en el seno del organismo recaudador, refieren a la identificación de Ricardo Esteban Cupper como una de las "usinas de facturas apócrifas" al confirmar que estaba incluido en la base E-APOC y que una anotación de su clave fiscal, en soporte informático, fue encontrada en la residencia de Rubén Daniel Sánchez, ubicada en calle Roque Suarez N 398, durante un allanamiento. A su vez, la facturación electrónica emitida por Cupper en su condición de contribuyente observado, se relaciona con el contador Sánchez.

Por otra parte, el informe elaborado por Córscico destaca puntos claves atinentes a la manipulación de claves fiscales, dado que del relevamiento de las claves fiscales anotadas en la documentación incautada se observa que algunas de ellas fueron modificadas. Esto indica que los responsables tenían conocimientos específicos para alterar la situación fiscal de las víctimas que les permitía luego, emitir facturas falsas a su nombre.

A lo anterior, se adiciona que varios de los contribuyentes observados tenían una misma clave fiscal de acceso (Ej: Esteban2405, real2013, santo2018), lo que hizo presumir al investigador sobre el uso inapropiado de ellas por una misma persona. Sobre todo, porque se constató que personas como Enrique Cazolas, Luis Podetti y Daniela Castro, cuyas claves fiscales fueron anotadas, desconocían por completo la emisión de facturas y la creación de empresas como "Distribuidora de CE SAS".





## *Poder Judicial de la Nación*

El análisis revela que algunos de los clientes que recibían facturación falsa de estas "usinas" también formaban parte del universo de contribuyentes apócrifos. Esto confirma que la finalidad era la realización de maniobras de triangulación para registrar compras falsas, equilibrar los débitos y créditos fiscales de IVA y, así, evitar que la AFIP-ARCA detectara la venta de facturación apócrifa.

Finalmente, los actuantes analizaron las IP utilizadas por el contador Sánchez para emitir facturación propia y las usadas para realizar gestiones o emitir factura a nombre de las usinas detectadas en la presente causa judicial. Se expuso un resumen de las IP utilizadas y las claves fiscales anotadas en los soportes informáticos y/o papel secuestrados para varias de las usinas que utilizaba esta organización.

Asimismo, se pudo comprobar documentalmente que existen dos clientes (Industrias Medicas SA y Crecer Ideas y Servicios SAS) a quienes el imputado Sánchez facturaba sus honorarios profesionales, que son usuarios de facturas apócrifas emitidas por usinas detectadas en el marco de la presente causa judicial (incluidos en la base E-APOC y/o con Claves Fiscales anotadas).

Se resaltó también que Sánchez era Administrador Suplente de la firma "CRECER IDEAS & SERVICIOS SAS"; empresa incluida en la base E-APOC, y que registra compras con una proveedora (Castro Daniela Soledad) que niega haber realizado dicha operatoria y a nombre de quien se detectó una clave fiscal anotada en la documentación secuestrada que permite realizar la emisión de dicha facturación para equilibrar los débitos y créditos fiscales a la citada empresa.

Por último, se observó que el e-mail de contacto registrado en ARCA incluido en el Padrón de Sánchez, Rubén Daniel (cr\_rubendsanchez@yahoo.com.ar) es el mismo que el e-mail de contacto de contribuyentes incluidos en la base E-APOC y/o con claves fiscales anotadas a su nombre que fueron identificados en el marco de la presente causa judicial.

Por otro lado, se dejó plasmado en el informe, el secuestro de los soportes informáticos encontrados en el domicilio de calle Corro N° 185 –

USO OFICIAL





Córdoba - (oficina contable y lugar de encuentro de los imputados) y en el de calle Dr. Ángel Roque Suarez N.º 398 – PB –Dto. 4 – Córdoba - (residencia de Sánchez, Rubén Daniel), se encontraron carpetas con el nombre de pila (Raúl) donde se registran archivos con detalle de imágenes de trámites realizados a través de la página de internet de AFIP-ARCA (altas y/o bajas de impuestos, actividades, etc) y/o facturas tanto manuales como electrónicas de las usinas de facturas apócrifas ya informadas.

Es dable mencionar en este punto que la carpeta “Documents – Raul Facturas” es copia de la carpeta “Raul Facturas” donde se adicionan algunas facturas electrónicas emitidas hasta el 02/01/2019. En tal sentido, los contribuyentes mencionados en algunas de esas facturas manuales en blanco se encuentran incluidos en la base E-APOC o se han encontrado sus claves fiscales anotadas en el material secuestrado en esta causa, lo cual revela que la organización compuesta por los acusados usaba esas claves fiscales para emitir comprobantes falsos a su nombre.

Incluso, mostraron que del control de registración del Libro Compras RG 3685 presentados por los clientes/usuarios ante AFIP, la mayoría de las facturas manuales detalladas anteriormente fueron registradas por uno, dos y hasta tres clientes de un mismo comprobante con distintas fechas e importes declarados, por lo que se constata que dichas facturas manuales en blanco secuestradas en el marco de la presente causa judicial habrían sido utilizadas en reiteradas veces para su venta como facturación apócrifa.

En definitiva, el informe referenciado documenta suficientemente la investigación administrativa llevada a cabo por los funcionarios de ARCA, entre los que estaba el testigo Edgardo Fabián Córscico, con resultados concluyentes en cuanto a la confirmación de los hechos debatidos en este juicio. A su vez, sus aseveraciones perfilan, con solvencia probatoria, los roles de los imputados en la maniobra delictiva atribuida.

Más allá de eso, debo adelantar que la fortaleza convictiva que se observa en este caso para dotar de certeza positiva al acaecimiento de los hechos y la participación de los imputados en su comisión, deriva,





## *Poder Judicial de la Nación*

precisamente, de la convergencia de datos adicionales que emergen de distintos medios de prueba independientes.

En este sentido, cabe recordar que la hipótesis acusatoria revela un esquema delictivo con permanencia y habitualidad, ejecutado por una organización criminal, compuesta por Cupper, Molina y Sánchez, cuyo modus operandi fue definido en acciones de obtención ilegítima de claves fiscales de terceros, a través del reclutamiento de personas que eran aprovechadas o engañadas para que brindaran su clave fiscal, y tras modificarlas, proceder a alterar de forma dolosa los registros de esos contribuyentes ante la AFIP-ARCA, para luego emitir y comercializar facturas falsas en su nombre. Ello, a su vez, redundaba en beneficios fiscales para otros clientes de la organización, lo que también les era retribuido económicamente.

El accionar coordinado de este grupo criminal generó un doble perjuicio, a la hacienda pública, al socavar sus bases tributarias con daños económicos cuantificables por evasión de impuestos, y a los contribuyentes quienes perdieron el control de sus claves y vieron alterados sus registros fiscales, fueron inspeccionados y bloqueados con impedimentos en tramitaciones personales que subsisten algunos hasta la actualidad.

Ahora bien, para continuar con el análisis probatorio, debemos volver a esos 17 contribuyentes incluidos en la base E-APOC respecto a los cuales se encontraron claves fiscales anotadas y/o teléfonos de contacto registrados en los soportes informáticos y/o de papel secuestrados en los allanamientos practicados en el marco de la presente causa judicial.

Esas personas físicas identificadas en el informe presentado por ARCA, también eran utilizadas por la organización delictiva para conformar sociedades (S.A.S.) con idénticos fines espurios. Estos son, Sarmiento Julio Alberto, Schnaider Guillermo, Cupper Ricardo Esteban, Medina Alberto Alejandro, Castro Daniela Soledad, Carandino Juan Carlos, Sanchez Juan Jose Nicolas, Paz Diego Nicolas, Quinteros Ricardo Gustavo, Garcia Elosegui Gerardo Gabriel, Ibarra Trucco Maximiliano Juvenal, Baez Abigail Leonarda, Diaz

USO OFICIAL





Fabian Alejandro, Delera Carina Liliana, Corporan Colon Yessenia, Villalba Luis Raul, y Sucesion De Toro Jose Enrique.

Todos ellos figuraban con domicilio relevado en calle Corro 185 o Roque Suarez 398 PC y al menos 4 presentaban como clave anotada "Santo 2018".

Las empresas consignadas en el informe son Crecer Ideas y Servicios SAS, Delera Servicios Empresariales SAS, Servicios RC La Rioja SAS, Distribuidora DE CE SAS. Esta estructura societaria (sociedad por acciones simplificada) por la simplicidad en su trámite, era la comúnmente utilizada por la asociación investigada.

De todos modos, vale recordar que esta lista no agota la usina de comprobantes apócrifos que fueron debidamente identificados por el organismo recaudador, entre los que se puede indicar a Guzmán Gabriela Ayelén, Hurtado Arango Sandra Mónica, Argento Adriana, Grenethier Nelsa Elizabeth, AJIDAN SA, Podetti, Luis Alberto, Cazolas, Enrique Roberto, entre otros.

Dicha identificación, resulta oportuna, por cuanto, los resultados probatorios, muestran algunos de esos nombres en las comunicaciones telefónicas intervenidas, en la documentación y el material informático secuestrado, e incluso, revelan cómo los acusados se vinculaban con sus perfiles fiscales con absoluto descaro.

En lo que sigue, se pasa a analizar una serie de casos testigos con el único pretexto de evidenciar, con la prueba reunida en autos, la operatoria ilícita de los acusados. Se deja aclarado que éstos no agotan todos los que pueden derivarse de las constancias arrimadas al proceso. De hecho, bajo un criterio de selección que no responde a un orden de importancia sino más bien a lo estrictamente debatido en el debate, se han tenido que priorizar elementos probatorios en la argumentación de este fallo, como representativos de un sinnúmero de evidencias que acreditan convergentemente las conductas endilgadas a Cupper, Sánchez y Molina.

Sandra Mónica Hurtado Arango.

Debo aclarar que este apartado, a diferencia de los demás, constituye un

hecho autónomo –nominado segundo– con una imputación independiente. En





## *Poder Judicial de la Nación*

razón de ello, aquí serán tratadas sus circunstancias contextuales, solo como integrante de la muestra escogida para representar la operatoria ilícita de naturaleza fiscal, para la que se congregaron los imputados.

Dicho esto, Sandra Mónica Hurtado con fecha 23/5/2019 interpuso una denuncia en la Fiscalía Federal N° 2 de Córdoba afirmando haber entregado su clave fiscal a Cupper y que junto a él también había acudido al Banco Santander Río para brindarle su CBU, a cambio de un pago semanal de \$1.000. Manifestó haber sido sorprendida al no poder cobrar por sus servicios como cuidadora de ancianos, inscripta en AFIP como monotributista. Al momento de efectuar el reclamo en forma personal en la sede del organismo recaudador, constató que se habían emitido facturas a su nombre por operaciones que no había realizado, por un monto aproximado de \$3.000.000 (fs.1).

En dicha oportunidad la Sra. Hurtado señaló que uno de los correos electrónicos que utilizaba Cupper era [raulhoraciomolina@gmail.com](mailto:raulhoraciomolina@gmail.com).

Por lo demás, la denunciante prestó declaración testimonial ante la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba ratificando sus dichos y acompañó fotos y capturas de pantallas que prueban los hechos descriptos (fs. 4/17).

Vale decir que las manifestaciones iniciales de Hurtado que originaron la investigación jurisdiccional, se vieron plenamente respaldadas por las conversaciones telefónicas intervenidas y los elementos probatorios secuestrados durante los allanamientos. En efecto, a fs. 90, se transcribió un diálogo entre Raúl Molina y Ricardo Cupper ocurrido el 28/06/2019: “Raúl: bueno ahí te dejé tres mil (3000) pesos en un sobre para que le des a HURTADO Ricardo: yo mañana te digo que me dijo esta chica boludo y ahí la posta esa...la bosta esa de la Corporan ahí me mando mensaje que ya necesita sino el lunes va a ir...te digo ya no se para donde correr, no puedo ser tan mala leche culiau”

En igual sentido, la agenda secuestrada en el domicilio de Cupper refleja anotaciones manuscritas referentes a pagos o deudas con la denunciante en

USO OFICIAL





estos términos “Hurtado \$ 13.000” y luego “Hurtado \$ 1.000 no van +” (fs. 628/630)

También en el domicilio del imputado Cupper se encontraron facturas emitidas a nombre de Hurtado y una copia de su DNI.

En los dispositivos informáticos incautados en la oficina de calle Corro y en el domicilio de Sánchez, se encontraron carpetas a nombre de "Raúl" que contenían registros de los trámites realizados a través de la página de la AFIP, incluyendo altas y bajas de impuestos, así como imágenes de facturas tanto manuales como electrónicas a nombre de las usinas de facturas apócrifas investigadas en la causa.

El informe de análisis de elementos secuestrados, elaborado por los contadores de la AFIP-ARCA, Edgardo Córscico y Marcelo Scarpello, detalló la existencia de esa carpeta llamada “Raúl y sus chicos”, con una subcarpeta “Hurtado Arango” (fs. 121 a 127), que contenía las constancias de los trámites fraudulentos realizados a su nombre, incluyendo la baja de su monotributo, altas en otras actividades e impuestos, y copias de facturas electrónicas emitidas a su nombre. Estos archivos se encontraban en una subcarpeta titulada “NO USAR”.

Por su parte, el informe de ARCA, también constató que las direcciones de IP desde las cuales el contador Rubén Daniel Sánchez emitía facturas a su nombre, eran las mismas desde las que se alteraron los registros fiscales de la denunciante Hurtado utilizando su clave fiscal.

De hecho, la investigación de AFIP mostró que el 15/01/2019, desde la conexión a internet del imputado Sánchez, se incorporó al Sistema Registral de la AFIP el número telefónico 351-5123798 de la empresa Claro como número de contacto de Hurtado. Este número, según consta en autos (fs. 171), pertenece a Ricardo Esteban Cupper y fue intervenido por orden judicial en esta causa.

Este dato revela como la organización criminal, entre otras cosas, manipulaba los datos fiscales de los contribuyentes que utilizaba como usina de comprobantes apócrifos.





## *Poder Judicial de la Nación*

Se cuenta en este proceso con la declaración testimonial de Maximiliano Juvenal Ibarra Trucco, prestada en el debate, de gran valor a los efectos de confirmar los datos que surgen de la prueba documental aportada por ARCA, en consonancia con su hipótesis acusatoria.

El testigo, de 35 años de edad, soltero y de oficio peluquero, comentó que la situación económica que atravesaba en los años 2018 y 2019 era ajustada. Trabajaba en relación de dependencia para peluquerías, de manera informal y con ingresos que alcanzaban solo para subsistir. Mencionó que una de ellas estaba ubicada en la galería sita en calle Deán Funes y General Paz, local 7, de esta ciudad.

Aseveró que su teléfono celular era 351-5402692 y dijo no tener vehículos, ni camiones en aquella época.

Al ser consultado sobre algunas actividades comerciales que pudo haber ejercido en el período de tiempo 2018 a 2019, negó enfáticamente haberse dedicado comercialmente a la construcción, transporte de cargas, fletes o manejo de camiones, taller mecánico ni servicios de apoyo agrícola vinculado al campo.

Por lo demás, reconoció que en esos años -2018/2019- hizo un trámite para obtener la clave fiscal. Concurrió personalmente a un edificio ubicado en calle Cañada y Bv. Illía, acompañado por Ricardo Cupper. Que lo hizo con su DNI para blanquear su clave fiscal y firmó unos papeles.

Explicó que al imputado Cupper lo conocía de vista, por ser allegado a una amiga de su madre y recordó haberle cortado el pelo en alguna oportunidad. En ese contexto, dijo que Cupper le ofreció averiguar un crédito para abrirse solo, para poner su propia peluquería. En ese marco, lo acompañó para efectuar el trámite de su clave fiscal.

Resulta interesante resaltar que Ibarra Trucco, aseguró en audiencia que entregó a Cupper, en ese momento, el papel de la clave fiscal que le dieron de comprobante en AFIP.

USO OFICIAL





Continuó declarando que días después de haber realizado ese trámite, Cupper le dijo que no iba a poder acceder al crédito y no lo volvió a contactar por este tema.

Cuando la parte querellante indagó al testigo sobre sus conocimientos acerca de que era la clave fiscal y para que se usaba, no pudo contestar. Aseveró que en aquel tiempo no conocía el alcance del uso de la clave fiscal. De hecho, no recordaba cómo era, ni haberla cambiado.

Ocurrió que, en el año 2005, a raíz de lo que le solicitaron en su trabajo, se dio con que tenía el CUIL boqueado, recibió notificaciones sobre este punto y tuvo muchos otros inconvenientes, subsistentes al día de la fecha, como no poder darse de alta en la obra social.

La abogada representante de la parte querellante -ARCA- le consultó si sabía emitir facturas electrónicas o conocía el sistema de facturación en línea, a lo que el testigo contestó que no. Agregó que jamás tuvo un contador o asesor contable y que a Cupper lo autorizó para el uso de la clave fiscal solo para que averiguara si acreditaba para un préstamo.

En el mismo marco, dijo desconocer las personas jurídicas mencionadas en el debate por la Dra. Diez (CYAC SRL, TOWER TCH SOLUCIONES SAS, Rapachiani Marcelo Fabian, CAIMA SEGALL SRL, Juan Jose Nicolas Sanchez, CRECER IDEAS Y SERVICIOS SAS) y negó tener vínculo comercial o profesional con alguna de ellas.

Finalmente, el testigo mencionó que no conocía a los coimputados Molina ni Sánchez.

Vale decir que, los legajos de los contribuyentes aportados por ARCA, a partir de su admisión en este debate y que fueran agregados al expediente digital a fs. 1632/2499, no hacen más que documentar el proceso de inspección y eventual incorporación de contribuyentes a la base e-E-APOC, que la testigo Beroqui explicó detalladamente en su testimonio.

Incluso más, vienen a completar los datos probatorios que se incorporaron mediante las declaraciones prestadas en este juicio por los contribuyentes afectados por la utilización de su clave fiscal. Este es uno de

esos supuestos.





## *Poder Judicial de la Nación*

En este sentido, a fs. 1789/1954, se agregó en el expediente digital el legajo de Ibarra Trucco, y en su página 15, se puede observar que cuenta como actividades económicas activas y realizadas por el nombrado en los periodos del 1 al 3 de 2019: construcción, transporte de automotor de cargas, mantenimiento y reparación del motor y mecánica integral, con un perfil fiscal de responsable inscripto, a pesar de no tener información de bienes u otra actividad tributaria ni laboral con facturación electrónica solo registrada de enero a octubre de 2019 por montos importantes e incompatibles con los ingresos que registraba el contribuyente en su oficio de peluquero.

La numeración de IP N° 181.88.188.218, utilizada para facturar electrónicamente a su nombre -coincidente con la contribuyente Argento Adriana-, según el informe de ARCA de fs. 1387/1477 pertenecía a Rubén Daniel Sánchez, a quien el testigo Ibarra Trucco dijo desconocer.

Las inconsistencias antes referidas, formaron parte de las detenciones efectuadas en el seno del organismo recaudador, que justificaron la fiscalización del Sr. Ibarra Trucco bajo la OI 1.769.393.

De esta manera, según surge del legajo de investigación administrativo de la entidad, que fuera aportado a este proceso, que el cargo de inspección aludido fue generado con fecha 11/4/2019, esto es, casi un mes antes de que la contribuyente Hurtado efectuara la denuncia que dio origen a la investigación judicial. Es decir que, para ese tiempo el Contador Marcelo Moncada ya estaba averiguando la situación fiscal de Ibarra Trucco y su facturación por indicios de apocrificidad (pág. 61/75).

Esa investigación interna de ARCA reveló que el contribuyente no residía en los lugares declarados como domicilio fiscal y alternativos, tampoco lo conocían en el lugar. Incluso, debieron prestar colaboración con la Dirección Regional Tucumán quien solicitó información de la actividad efectuada por Ibarra Trucco, por facturas de compra a su nombre y vinculados con un sujeto que allá estaban fiscalizando, de nombre Mario Luis Vargas, vinculado al rubro de transporte.

USO OFICIAL





Esta situación se trae a colación, dado que en esas actuaciones relativas a “Transporte Vargas” efectivamente se observaron 4 facturas de compras con numeración sucesiva a nombre del Sr. Ibarra Trucco, pero lo curioso resultó ser que también presentaba 20 facturas con numeración sucesiva emitidas a nombre de Adriana Norma Argento de fecha 28/3/2019. Cabe recordar que, Argento fue otra de las usinas de facturas falsas creadas por la organización delictiva.

Con lo cual, se puede concluir válidamente que Ibarra Trucco fue también utilizado para emitir los comprobantes de compra asentados en los libros de Transporte Vargas.

Ello, sobre todo si se tiene en cuenta que las inconsistencias insalvables detectadas en la auditoría practicada en la delegación Córdoba sobre Ibarra Trucco tuvo como resultado su inclusión en la base E-APOC de la entidad. Los inspectores de ARCA, tal como refirió el testigo en su declaración, constataron que no poseía la capacidad económica al tiempo de los hechos, para realizar las actividades de construcción, transporte y otras que tenía declaradas en su perfil, puesto que no tenía registrado empleados en relación de dependencia, ni automotores, y sus acreditaciones bancarias en el año 2019 habían sido de \$100, lo que resultaba absolutamente incompatible con su emisión de comprobantes electrónicos por más de \$5.474.000 durante el período enero/marzo de 2019.

Ahora bien, el desfasaje tributario de Ibarra Trucco mostrado en la inspección de ARCA pudo explicarse al profundizarse la pesquisa. Tanto que, con los elementos reunidos en la causa el contador Córscico emitió una serie de consideraciones en su informe que son pertinentes reproducir.

Allí consta que la IP usada para emitir facturación electrónica a nombre de Ibarra Trucco, era la misma que el imputado Sanchez, contemporáneamente, utilizaba para generar su propia facturación de honorarios (181.88.188.218).

A su vez, se verificó que la clave fiscal de Ibarra Trucco (Ricardo 766) estaba anotada en un soporte informático, CPU COLOR NEGRO, secuestrado en el domicilio particular del imputado Sánchez. Quien a su vez, contaba con la





## *Poder Judicial de la Nación*

impresión del resultado de una consulta efectuada en la base pública de contribuyentes apócrifos obrante en la página web de AFIP con el CUIT del Sr. Ibarra Trucco.

Incluso más, el nombre del Sr. Ibarra Trucco y su clave fiscal aparecen también anotados como “anteriores desafectados” en la planilla secuestrada en la oficina que ocupaba Sánchez en la Procuración del Tesoro de la provincia de Córdoba.

Por otra parte, en consonancia con lo atestiguado en este juicio por Ibarra Trucco, quien lo acompañó a gestionar su clave fiscal y se apoderó del comprobante fue el imputado Cupper, quien evidentemente luego lo aportó a la asociación ilícita que conformaba para modificaran sus datos tributarios e hicieran lo que se comprobó, facturas apócrifas a nombre del contribuyente.

De hecho, Cupper guardaba en su poder la constancia de un turno otorgado por AFIP para que el Sr. Ibarra Trucco haga el trámite de su clave fiscal el 05/12/2018.

Por otra parte, entre los archivos que se obtuvieron del celular J700 perteneciente a Cupper había una factura manual de Ibarra Trucco por servicios de reparación de vehículos.

Por último, resulta atinada las referencias valorativas propiciadas por la parte querellante, en cuanto a que Ibarra Trucco confirmó el número telefónico utilizado, que a su vez se corresponde con el agendado por Cupper en su teléfono celular, como “Maxi Pelu”.

Revisadas las conversaciones que guardaba en la aplicación de whatsapp, entre ambos interlocutores, se demostró que existía un acuerdo económico que Cupper incumplió. Algunos extractos más relevantes se consignan a continuación: Ibarra Trucco lo increpó “Quiero respuestas antes de esa hora xq me voy derecho al afip ( ... ) A denunciarte con nombre y apellido” y Cupper contestó; “Allí me ponen que te dan esta semana 1000 el viernes y la otra y nada mas”. Trucco enojado le siguió mandando mensajes “El único perjudicado acá sos vos xq el nombre l los chats están a tu nombre, ( ... ) pero

USO OFICIAL





también sabes q me tenés q cumplir ( ... ) Yo no soy una estúpida d esas con las q tratas ( ... ) El arregleglo d los mil hoy”.

Lo anterior se compadece con los asientos que Cupper efectuaba en su agenda azul, secuestrada en el allanamiento de su domicilio, donde detallaba nombres y pagos: Trucco \$1000, Hurtado \$ 1000. (fs. 628/629).

La triangulación de la maniobra ilícita con la participación de todos los imputados congregados en el mismo plan, puede vislumbrarse de la conversación mantenida entre Cupper y Molina a propósito de los cuestionamientos recibidos por Ibarra Trucco. El primero le escribió por whatsapp: “Ok alli trucco tambien quiere hablar conmigo x afip estuvo en bs as y no se que quizo hacer y no pudo” Ante lo cual, Molina le respondió “Tranquilo para mi no hizo nada de lo que te dijo. Te quiere apurar. Pero mañana hablamos tranquilos Ricardo”.

#### Daniela Soledad Castro

El caso de la contribuyente Daniela Soledad Castro, inscripta ante AFIP desde marzo de 2019 y dada alta en varias actividades diversas entre sí (venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir, venta al por mayor de uniformes y ropa de trabajo, servicios de logística y gestión para el transporte de mercaderías, servicios de publicidad, procesamiento y hospedaje de datos, venta al por menor de instrumental médico, odontológico y ortopédico).

Fue fiscalizada, bajo la OI 1810658, en dos oportunidades y el procedimiento interno de ARCA concluyó con su inclusión en la base E-APOC.

Se constató que carecía de la capacidad operativa y económica necesaria para desarrollar las operaciones instrumentadas en las facturas emitidas a su nombre.

En el marco de esta auditoría, la propia Sra. Castro desconoció haber realizado la actividad económica que se atribuye a su persona en la facturación emitida a su nombre.

Efectivamente, Castro fue una de las usinas gestionadas por la organización hasta que ella misma cambió la clave fiscal e impidió, de ese modo, que la organización continúe usando sus datos para obtener beneficios

económicos para sí.





## *Poder Judicial de la Nación*

Por su parte, el informe elaborado por Córscico da cuenta que la clave fiscal de Castro (Esteban2405) estaba anotada en soportes informáticos secuestrados en la casa del imputado Sánchez, con quien coincidían las IP usadas para emitir facturación electrónica (181.88.188.218 y 190.17.126.16).

El contador Sánchez, a su vez, guardaba el nombre, CUIT y clave fiscal de Castro en el listado impreso de “anteriores desafectados” y también manuscrito, en su oficina de la Procuración del Tesoro de Córdoba.

El imputado Cupper, resguardaba en su domicilio el F460/F de inscripción de Castro como contribuyente ante AFIP con una anotación manuscrita en la que constaba la clave fiscal originalmente asignada por AFIP a la contribuyente, que evidentemente luego modificó por su segundo nombre “Esteban2405”, para que la organización pueda manejarla completamente.

Luego, también una constancia de empadronamiento en el Régimen de Trabajadores Autónomos a nombre de Castro, un certificado emitido por el Banco BBVA Francés que da cuenta de los datos de la cuenta bancaria abierta a nombre de Daniela Soledad Castro en esa entidad y el original de factura de Direct TV a nombre de la Sra. Castro.

Se pudo ver también en el teléfono celular de Cupper, una constancia de turno otorgada por AFIP para que Castro concurra a las oficinas de la Agencia Sede Córdoba N° 2 de AFIP el 28/2/2019 a las 10: 30 hs. para tramitar la inscripción de una persona jurídica.

Cabe recordar que esta persona figura como socia y administradora de Distribuidora De Ce SAS. A su vez, esta sociedad fue inspeccionada por ARCA bajo O.I. N° 2.000.507 e incluida finalmente en la base E-APOC.

El informe final de inspección, expuso el descargo de Castro en oportunidad de las fiscalizaciones practicadas, en orden a que: “Es necesario aclarar que la socia Castro, con fecha 01/12/2021, hizo una presentación digital N.º 202101358992 en donde manifiesta lo siguiente: Que vengo por la presente a manifestar que hace un tiempo ya, he tomado conocimiento de una S.A.S. creada bajo mi nombre, de la cual nada tengo que ver, ya que no soy una unidad financiera ni he tenido jamás empresa o firma alguna. Tomé

USO OFICIAL





conocimiento de este fraude a partir de la llamada de algunos bancos por deudas a mi nombre atento a la cantidad de cheques emitidos y rechazados, cabe aclarar que jamás he tenido chequera ni he sido titular de cuentas en los bancos que me reclamaban dicha deuda. Por tal motivo realicé las denuncias correspondientes, las que adjunto al presente. Dirigirme al establecimiento de IPJ es que me dan la copia del instrumento constitutivo que supuestamente firmé para constituir la firma llamada "DISTRIBUIDORA DE CE S.A.S." claro trazo dudoso. Por todo lo mencionado anteriormente es que solicito el levantamiento de marca de padrón y se deja constancia de alguna manera que nada tengo que ver con la firma antes mencionada. Además, con fecha 03/05/2022 la Sra. Castro se presentó en la oficina de AFIP, sito en calle San Luis 92, 1er piso, de la ciudad de Córdoba y manifestó lo siguiente: 1) Que nunca se inscribió en AFIP. 2) Que nunca desarrolló actividad comercial que amerite inscribirse. 3) que desconoce totalmente el listado exhibido como facturas electrónicas emitidas en nombre de ella. 4) Que en el domicilio de Rondeau 615-P 9- D "B", de la ciudad de Córdoba, nunca vivió ni tiene vínculos cercanos a ese domicilio. 5) Que no es integrante de la sociedad DISTRIBUIDORA DE CE SAS, como de ninguna otra...."

Es dable aclarar que la firma DISTRIBUIDORA DE CE SAS – CUIT: 30716475863 – es otra de las usinas de facturas apócrifas respecto a la cual se secuestró documentación en el domicilio de calle Corro de esta ciudad.

Por lo demás, a fs. 213 de autos, se observa una conversación entre Sánchez y Molina en la que se refieren a la SAS referida.

Molina preguntó: "RM: Che Dany no podes facturar con la SAF CS: No puedo porque no tiene inscripción en los ingresos brutos RM: la SAF de Castro, CS: si, RM: eh...la SAF de Castro...eh....,CS: que origen tiene esa SAF, quien la ha hecho también CUPER????, RM: Si CS: y...como hacen todo a medias ...no me ha dado un campo determinado..., RM: fijate que actividades tiene..haber..no..vamos a hacer una cosa Dany, metele todo con "LA RIOJA", CS: bueno...RM: metele todo con LA RIOJA y pásamelo más tarde no hay problema..ya veo yo..como después cruzaremos compras..viste..dale" Vale





## *Poder Judicial de la Nación*

Cupper la constituyó como representante legal y administrador titular, y era para la emisión de facturación apócrifa.

Con fecha 30/08/2019 se produjo un diálogo que revela con absoluta claridad que Molina y Sánchez compartían la actividad ilícita. A fs. 212 se detalla su contenido. Raúl le pidió a Sánchez que entre “lo más rápido posible” a “Castro María Soledad” y a su distribuidora, a lo que Sánchez accedió diciendo “ Ehh...haber si... dame un segundo...Eh...pásame lo de CASTRO porque quedo arriba del escritorio mío de la máquina, está un papel que es un resumen de todos las calificadas y esta escrito a mano arriba lo de CASTRO”.

En esa misma charla, el imputado Sánchez indicó al Sr. Molina le busque una hoja A4 que dice “claves fiscales” que quedó arriba del su escritorio en la que se detallarían CUIT “en uso” con sus claves fiscales.

En definitiva, luego Raúl Molina pidió al contador Sánchez que le agregue a Castro Daniela Soledad y a una Distribuidora la actividad de “Servicios de apoyo agrícola” ante AFIP. Molina le pasó CUIT y la clave fiscal de Castro Daniela Soledad y le pidió a Sánchez que le avise cuando lo haga para “pasar el CUIT”.

Respecto a la facturación apócrifa, en la oficina de calle Corro fueron incautados talonarios a nombre de Daniela Castro y de Distribuidora De Ce SAS, mientras que del celular del imputado Sánchez se extrajeron fotos de facturas emitidas por aquella. En una de sus oficinas se encontró un sello automático con la leyenda “Daniela S. Castro CUIT: 27-32645706-5” que evidentemente era usado por la organización.

Luego, tal como mencionó la parte querellante, la impresión del sello referido coincidía con la estampa de los tres cheques supuestamente endosados por Castro, secuestrados en el domicilio particular del imputado Molina, concretamente dentro de su agenda personal.

Los imputados Sánchez y Molina, en conversaciones telefónicas intervenidas, evidencias la mecánica de confeccionar facturas falsas. Véase, Raúl le dijo “ te quería pedir... fijate tirar el resumen de Teruel y La Rioja, Delera y Guzmán, que a ver cuánto tengo que empezar a armar de agosto...





así armamos las compras ", Sánchez le respondió afirmativamente. Luego, Molina aclaró "Teruel, Guzmán, la RC La Rioja y Delera SAS que es lo que hemos usado, porque Castro la han recontra usado ehh y no se si va a pasar visto eso hasta ahí en stand by, vamos a mantener las otras..." (fs. 264)

Ello se relaciona con la información extraída de la subcarpeta "NO USAR" obrante en la carpeta "Raúl y sus chicos" del pendrive secuestrado en el domicilio de Sánchez. En su interior se almacenaban diversos archivos con constancias de trámites y facturación de Castro, Daniela Soledad (CUIT: 27326457065).

Como en otros casos, Cupper anotaba en su agenda los pagos que Castro recibía pagos con cierta periodicidad a cambio de prestar su identidad a la organización.

Ocurrió que, aparentemente ella habría decidido unilateralmente cambiar su clave fiscal. Así, a fs. 92 se transcribe una conversación de fecha 02/07/2019 ocurrida desde el celular de Molina con Ricardo Cupper en la que se expresó el siguiente diálogo: Raúl: "che escúchame....pudiste averiguar que paso con Ricardo: CASTRO???? Raúl: si...Ricardo: CASTRO...como...te acordas que vos me dijiste que ya era lo último que ya se hacia de Castro que yo me había olvidado que yo le había dicho eso??? Raúl: ah...cambió la clave, Ricardo: el mes pasado cambio la clave....arreglo con una gente que dio 25.000 pesos y le propuso 5.000 pesos por semana Raúl: bueno...esta bien... te lo sacas de encima por ese lado...Ricardo: no...pero eso me estalló la cabeza...Raúl...me estalló la cabeza porque me sacó la SAC Raúl: ah...te sacó la SAC también??? Ricardo: y vendió todo el paquete Raúl: y te hizo hacer todo el laburo a vos Ricardo: te juro por dios que fue un tiro en la frente Raúl: y ahora que SAC te quedo activa??? Ricardo: y esta la mía y la de MALDONADO que está salida ahora, ...pero yo no tengo fuerza ahora estoy..."

Por último, mencionar que Servicios RC La Rioja SAS – CUIT: 30716517663 también era de las usinas gestionadas por la organización criminal, incluida en la base E-APOC, administrada y representada por Cupper, tenía clave fiscal (cupper66) anotada en el soporte informático





## *Poder Judicial de la Nación*

secuestrado en calle Roque Suárez N° 398, Córdoba, es decir en el domicilio del imputado Sánchez.

En los domicilios allanados se secuestraron facturas, anotaciones y fotocopias de DNI referidas a Servicios RC LA RIOJA SAS CUIT y a Guzmán Gabriela Ayelén, socia de Servicios RC LA RIOJA S.A.S..

### Carina Liliana Delera

Carina Liliana Delera, fue incluida por el organismo de recaudación en la base de contribuyentes apócrifos. A su vez, era socia de las firmas DELERA SERVICIOS EMPRESARIALES SAS CUIT 30716400545 y LOGISTICA Y TRANSPORTE GARCIA S.A.S. CUIT 30716395207, firmas que también habían sido inspeccionados con iguales resultados y constituyeron usinas de facturación falsa usadas por la asociación ilícita fiscal aquí juzgada.

Vale decir que, en la información aportada por AFIP, el domicilio de la persona jurídica “DELERA SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.S.”, inscripta con fecha 3/4/2019, contaba con el domicilio registrado en Deán Funes 381 PB (fs. 187) que resulta ser uno de los alternativos del imputado Cupper que figuraban en informe de Nosis justicia (fs. 22).

Se adiciona a lo anterior, un diálogo registrado el 27/9/2019 en el cual Molina se comunicó con otra persona y hablaron de Delera: “RM: Che Dani aca salgo de la Oficce, acabo de probar con “DELERA” y todo perfecto eh..DS: bueno bárbaro, en unos minutos me desocupo y voy a tratar desde aca y sino me hago pique hasta la oficina, RM: no ... pero no tengo apuro ( ... ) RM no hace falta ni que vengas a la oficina, hacelo a la tarde o hacelo mañana ( ... ) fijate con las dos que quedan la de “TERUEL” y la de “DELERA” las fechas, ( ... ) jugá con las fechas, DS: si..si...ya lo tengo presente” (fs. 285 vta./286).

En coherencia con esa conversación, en la oficina de calle Corro se secuestraron planillas de “clientes de Raúl” que incluye a Carina Delera, junto a Corporán Colón y Ricardo Cupper.

USO OFICIAL





También facturas a nombre de Carina Liliana Delera y de DELERA SERVICIOS EMPRESARIALES SAS. Igual resultado arrojó el allanamiento de calle Mercedario.

La anotación "Delera" asentada en la agenda de Cupper y las comunicaciones habituales con el imputado la muestran cercana al punto tal que tenía registrado a su nombre un automóvil que utilizaba pero aparentemente pertenecía a Cupper (Renault Sandero Stepway dominio IYN04).

Asimismo, surge de las conversaciones registradas en la causa que la Sra. Delera habría reclutado personas para cobrar cheques de Cupper, ofreciendo tres mil pesos (\$ 3.000) por cambiarlos (fs. 255 y 265).

Cabe citar un diálogo detectado en la línea celular de Molina, en la que con fecha 13-08-2019 los imputados Molina y Sánchez se refirieron a la usina creada con los datos de Carina Delera en los siguientes términos: "RM: yo te voy a dejar acá arriba del escritorio, te llego una notificación de Magdalena SANCHEZ de LOREDO, S: si, RM: se ve que va avanzando el tema ...y te voy a dejar con un ganchito cada, las compras y lo que yo pienso que vamos a pagar en efectivo...no pudiste ver nada ayer lo de CUPPER no???, S: no, R: del cuil de el....del cuil de el, S: si...si...si...el cuil de el, RM: bueno...si no estoy yo cuando vos venís te dejo eso así si, querés ya vas cargando y después vemos, S: si...20-12876307-5...CUPPERESTELA2405 no se si lo tengo, presente, RM: acá te dejo yo de "VELERA SERVICIOS EMPRESARIALES", de GABRIELA GUZMÁN, de SERVICIOS DE LA RIOJA y TERUEL, te dejo todo compras y te dejo el número el cual dejaría para pagar, S: perfecto" (fs. 116 de autos)

En relación con Teruel, otra usina creada por los imputados, en una conversación transcrita a fs. 211 de autos, el imputado Sánchez le advirtió un error del contador y dijo a un interlocutor que el "conta metió mal los dedos hoy con Teruel" y conversan sobre el modo de solucionar la inconsistencia detectada.

Con fecha 11/9/2019, los imputados Rubén Daniel Sánchez y Raúl

Molina mantuvieron un intercambio telefónico relacionado con los hechos





## *Poder Judicial de la Nación*

atribuidos. En tal sentido, Raúl le pidió al “contador” si podía “tirar el resumen de Teruel y La Rioja, Delera y Guzmán, que a ver cuánto tengo que empezar a armar de agosto”, luego aclara “así armamos las compras ahí”.

A ello, Sánchez contestó “como nó” y Molina le aclaró “Teruel, Guzmán, la RC La Rioja y Delera SAS (fon), que es lo que hemos usado, porque Castro la han recontra usado ehh, y no se si va a pasar viste eso hasta ahí en stand by, vamos a mantener las otras con ( ... ) y yo empiezo a facturarle compras” (fs. 264).

### Yesenia Corporan Colón

La contribuyente Yesenia Corporan Colón, de nacionalidad dominicana, fue fiscalizada bajo OI 1.767.137.

Los inspectores actuantes constataron que el domicilio declarado era inexistente (no existía esa numeración). Luego que la relación débito / crédito registrada a nombre de la contribuyente era inconsistente con el desarrollo de una actividad económica real y destacaron que la totalidad de las compras registradas en el año 2019 correspondían a contribuyentes apócrifos.

Ello, junto a otros parámetros llevaron a la conclusión de que: “la fiscalizada no realizó efectivamente las operaciones correspondientes a las facturas que emitió no contando con la capacidad técnico / económica para efectuar las ventas de bienes y/o prestaciones de servicios instrumentados” procediendo a incluirla en la base E-APOC.

Se comprobó que el número de teléfono registrado ante AFIP-ARCA era el 351 5123798, una de las líneas telefónicas de Cupper que fueron intervenidas en autos.

Y el informe acompañado por el contador Córscico da cuenta que tanto en los soportes informáticos como en la documental secuestrada en el domicilio particular de Sánchez constaba anotada la clave fiscal de la Sra. Corporán Colón (santo2018) y que desde las mismas IP, que se usaron para emitir facturas electrónicas a nombre de la Sra. Corporán (181.88.188.218 y

USO OFICIAL





201.231.65.28), se libraban los comprobantes de honorarios cobrados en su rol de contador, el acusado Sánchez.

En el mismo lugar, se encontró impresa la consulta sobre si figuraba en la base E-APOC Yessenia Corporan Colón. Por otra parte, también figuraban sus datos y trámites en el pen drive allí secuestrado, precisamente dentro de la Carpeta “Raúl y sus chicos” - Subcarpeta “A Activos” - Subcarpeta “NO USAR” - Subcarpeta “Hurtado Arango”.

A su vez, en la ya mencionada planilla secuestrada en el escritorio del imputado Sánchez de la Procuración del Tesoro también figuraba Corporán Colón como “anteriores desactivados”.

De especial importancia mencionar que en la oficina de calle Corro se secuestró un correo electrónico impreso recibido en la cuenta [yesseniaigroup@gmail.com](mailto:yesseniaigroup@gmail.com) enviado por AFIP con el asunto “AFIP e-ventanilla: Usted tiene una nueva comunicación del sistema domicilio fiscal electrónico” de fecha 10-8-2018 informando la emisión de una notificación electrónica al domicilio fiscal de Yessenia Corporan CUIT 2795719440-6.

Allí también, la planilla Excel que la registraba como “clientes de Raúl” junto con Carina Delera y Ricardo Cupper. Archivos y datos de la Sra. Yessenia Corporán también fueron encontrados en el soporte informático secuestrado en la oficina de calle Corro, en una carpeta que decía “NO USAR” mientras que diversa documental referida a esa contribuyente, tal como facturas emitidas a su nombre y su constancia de inscripción en AFIP fue secuestrada en el domicilio particular de Molina, ubicado en calle Mercedario de esta ciudad.

Por su parte, el allanamiento del domicilio de Cupper permitió secuestrar documentación original vinculada a Corporán Colón, tales como facturas, constancia de inscripción ante AFIP, fotocopia del DNI y formulario 855 original que se presentaba ante AFIP solicitando habilitación para emitir comprobantes tipo “A”, es decir, las facturas que instrumentan operaciones entre sujetos responsables inscriptos en IVA y que habilitan a computar crédito fiscal

Por lo demás, entre los archivos que había en el celular J7 del Sr. Cupper obra una foto de la factura manual A 001-105 de fecha 25-1-2019 a





## *Poder Judicial de la Nación*

nombre de “Yessenia Group” de Corporán Colón Yessenia en favor de Diego González.

En otra conversación mantenida entre los imputados Cupper y Molina, transcripta a fs. 90 de autos, ellos hacen referencia a “la Corporán”.

Pero no solo eso, sino que se extrajeron diálogos producidos entre Yessenia Corporán y Cupper por whatsapp, en los que preguntaba insistentemente por sus deudas en AFIP demostrando mucha preocupación por esos problemas fiscales y sus eventuales complicaciones con trámites migratorios. De hecho, ante la falta de respuesta de Cupper, Yessenia Corporán reiteró sus consultas en fechas 24/05/2019, 31/05/2019, 16/08/2019.

Hasta que el 28/08/2019, evidentemente molesta, dijo: “Voy a romper la puerta no me das la cara (...) Me estas haciendo lo mismo que monica (...) Pero yo si se donde encontraste”. Esta referencia la vincula con Hurtado con quien compartía nacionalidad.

Por último, entre los mensajes de whatsapp del celular secuestrado de Cupper, se encontraba uno del 26/06/2019 en la que el primero comentó: “Yessenia ( ...) Quiere ir al afip” y Raúl Molina le contestó “Uhhj jjjj”

### Adriana Norma Argento

Conforme resolución de inspección realizada por la División Fiscalización N° 4 de la Dirección Regional Córdoba de AFIP-DGI, OI 1782240, la contribuyente Adriana Norma Argento, emitió facturación en favor de la firma TOWERTECH SOLUCIONES SAS CUIT 30-71601027-5 por un total de \$ 1.342.858 en el año 2019.

TOWERTECH SOLUCIONES SAS también registraba facturación de otras usinas mencionadas en esta causa como Servicios Rc La Rioja S.A.S., Ibarra Trucco Maximiliano Juvenal y Garcia Elosegui Gerardo.

Con fecha 17/9/2019, Adriana Norma Argento, realizó una denuncia ante la Fiscalía Federal N° 3 que dio origen al Expte. FCB 6031/2020, el cual primero tramitó ante el Juzgado Federal N° 3 y luego, se acumuló a la presente causa. En ese acto, Argento señaló que un inspector de AFIP –Javier

USO OFICIAL





Machmar- le informó que desde su CUIT se habían emitido facturas apócrifas y manifestó desconocer en absoluto toda la operatoria realizada por personas desconocidas. A fs. 735/736 obra la denuncia y la copia del acta realizada con el inspector de AFIP en el marco de la fiscalización bajo OI 1782240 ya mencionada.

Vale decir que ambos documentos fueron ratificados por la Sra. Argento en el marco de su declaración testimonial brindada en el debate.

Incluso, al serle exhibida la denuncia, Ariana Norma Argento reconoció en ella su letra y deslizó que había sido citada en un estudio o tribunal donde había abogados.

A partir de ello, pudo recordar que se hizo presente en su domicilio, un inspector y le hicieron saber que le estaban utilizando su clave fiscal, su CUIT porque, evidentemente, se daba cuenta que no había sido ella. Que, por eso, la citaron a una oficina pública donde unos abogados le hicieron firmar un papel.

Al respecto aclaró que la misma estaba situada en calle Caseros y Cañada, en esa zona y ocurrió hace aproximadamente entre seis y siete años. Agregó que después de eso, nunca más fue convocada por algún abogado de AFIP. Nunca más. Insistió que eran varios abogados y los vio una sola vez. Que lo que suscribió no recordaba si era el acta exhibida, pero le parecía que era como una constancia de que quedaba libre de cualquier problema con la entidad.

Respecto de su situación económica al tiempo de los hechos, manifestó que cuando fue el inspector ella no estaba trabajando. Antes había tenido una empresa de seguridad y entre los años 2018 y 2019 fue empleada de comercio, en una casa de venta de ropa ubicada en el Hiper Libertad de Ruta 9. Que el sueldo se lo abonaban en efectivo y nunca emitió factura por eso.

La abogada de la parte querellante le nombró algunas actividades concretas para que la testigo diga si a la fecha de los hechos reconocía como propias todas, algunas o ninguna de ella: construcción de obras de ingeniería civil, servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías, y la testigo negó enfáticamente.





## *Poder Judicial de la Nación*

Incluso, no recordaba haber sacado la clave fiscal, ni pudo explicar que era y para que se usaba la misma. Dijo no tener idea de cómo es el procedimiento de emisión de una factura electrónica ni de que se trataba el sistema de comprobantes en línea.

Es más, manifestó nunca haber usado correo electrónico ni haber autorizado a otra persona a generar la dirección [adrianormaargento@gmail.com](mailto:adrianormaargento@gmail.com).

Aseguró que no sabía lo que era gestionar servicios empresariales y desconoció toda vinculación y conocimiento de las siguientes firmas: “Crecer Ideas y Servicios SAS, CYAC SRL, Tower TCH Soluciones SAS, Dante Prosdósimo, Industrias médicas SA.

Cuando se le consultó que le ocasionó el uso de su CUIT, contestó que no sabe porque no tenía idea de esa situación.

En el marco de la audiencia, se le exhibió a la testigo el efecto N° 11, secuestrado en el allanamiento de la calle Corro, consistente en un sello de color rosa, aclaratorio de la firma de Ariana Norma Argento, pero negó que fuera de ella y haberlo usado alguna vez.

Por otra parte, dijo no saber quién era a Miguel Zenón, jamás lo escuchó en su vida.

De las consultas realizadas en AFIP por solicitud de la Fiscalía interviniente, se informó que la Sra. Argento emitió facturas electrónicas desde enero de 2019 a mayo de 2019 y que estaba inscripta en IVA y en el Impuesto a las Ganancias (fs. 747).

Asimismo, en el informe de inspección se detallan los números de IP desde donde fueron emitidas las facturas; entre esas IP se encuentra la N° 181.88.188.218, la cual consta como una de las I.P. desde las cuales el Cr. Sánchez Rubén emitió su propia facturación electrónica en el período 11/2018 a 09/2019 bajo el concepto de honorarios profesionales.

A su vez, en los allanamientos realizados en autos se secuestraron facturas electrónicas emitidas a nombre de Adriana Argento y también estaba

USO OFICIAL





mencionada en las planillas que el contador guardaba en las oficinas de la Procuración del Tesoro de la Provincia de Córdoba.

Todas estas circunstancias acreditan que la contribuyente Adriana Argento fue usada por la organización investigada en autos como usina para la emisión de comprobantes apócrifos.

Nelsa Elizabeth Grenethier

En autos consta la acumulación de otro expediente “NN sobre infracción Ley 24769 (Grenethier)” (FCB 6462/2022) que tuvo su origen en la denuncia formulada por Nelsa Elizabeth Grenethier DNI 14.292.837, el 18/02/2022 ante la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba (fs. 786/825)

Básicamente, dio a conocer que había entregado su clave fiscal a Alberto Álvarez en el año 2017 quien le dijo que la iba a contratar en una empresa de limpieza, sin embargo, él nunca más la contactó. Que no la contrató ni le pagó nada. Ocurrió que, al querer jubilarse en el año 2020 se enteró que tenía problemas con AFIP, que estaba inscripta en cinco actividades en AFIP y que poseía deudas con el Organismo. Manifestó que jamás practicó las actividades que allí figuraban.

Efectivamente se acompañó la información que surgía del sistema registral de AFIP, dando cuenta de una serie de actividades relacionadas a su perfil tributario como de construcción, mecánica, venta de productos de molinería y servicios de transporte automotor de carga, con un CUIT limitado e incluido en base de contribuyentes no confiable (fs. 790/792). A su vez, surge de fs. 811/812 que se encontraba dada de alta en impuestos a las ganancias e iva con facturaciones en períodos 08, 09, 10 de 2017 por un importe total de 6.947.633,75.

Incluso, en oportunidad de brindar su testimonio en la audiencia de debate no solo ratificó la denuncia efectuada en su oportunidad (fs. 189) sino que Nelsa Elizabeth Grenethier dio detalles de los padecimientos sufridos a raíz de la manipulación de su perfil tributario por personas desconocidas.

Dijo que, en 2019, culminó sus estudios para ser gasista y cuando se quiso matricular su contador le advirtió que tenía problemas con AFIP. Lo





## *Poder Judicial de la Nación*

mismo le ocurrió al tramitar su jubilación. Su abogado le dijo que tenía impedimentos para hacerlo y que debía solucionar los inconvenientes tributarios.

Ella, sorprendida, se dirigió a la calle San Luis y allí le comunicaron que debía hacer una denuncia por estafa, dado que figuraba como dueña de cinco empresas cuando en la realidad de los hechos era empleada doméstica. Con mucha honra, pero claramente incompatible con la situación financiera de una empresaria como la que figuraba en AFIP.

Recordó dos de los rubros de las firmas puestas a su nombre, transporte -camiones- y refacción de motores, aclarando que jamás se dedicó a ello. Nunca fue a un estudio o una escribanía a firmar documentos de constitución de sociedades. Sino no hubiese continuado limpiando casas, con la dignidad que ello supone.

Comentó que denunció a Alberto Álvarez, que era novio de una amiga y le había prometido poner una empresa de la que ella iba a ser secretaria.

Relató ante el tribunal todos los inconvenientes que le produjo esta situación. Dijo no conocer a Sánchez ni a Cupper y se mostró absolutamente molesta por las consecuencias negativas que le ocasionó el proceder indigno de los involucrados en la maniobra ilícita.

Para completar, en el domicilio de calle Roque Suárez, perteneciente al imputado Sánchez, se secuestraron facturas emitidas a nombre de la Sra. Grenethier.

En función de todo lo anterior, los funcionarios de ARCA, entre los que estaba el testigo Edgardo Fabián Córscico, emitieron sus conclusiones finales dando por cierto la concreción de una maniobra fiscal ilícita con atribución de funciones a los miembros del grupo permanente, conformado por los imputados, basándose en las constancias documentales, digitales y registrales reunidas en la investigación.

En este sentido, se aseveró que “Del análisis de las direcciones I.P. relevadas de la Facturación Electrónica emitida a nombre de Sánchez Rubén Daniel – CUIT: 20131502843 – surgen que las mismas IP fueron utilizadas

USO OFICIAL





tanto para realizar altas de impuestos, actividades, etc. (Ej: de la denunciante Hurtado Arango, Sandra) como para la emisión de comprobantes a nombre de varias de las usinas de facturas apócrifas relevadas en la presente causa judicial, habiéndose identificado además las claves fiscales anotadas de la mayoría de los mismos que permiten la realización de la citada maniobra en perjuicio del Fisco. - Se observa que el e-mail de contacto con esta AFIP-DGI incluido en el Padrón de Sanchez, Ruben Daniel (cr\_rubendsanchez@yahoo.com.ar ) es el mismo que el e-mail de contacto de varios contribuyentes observados como incluidos en la base E-Apoc y/o con claves fiscales anotadas a su nombre que fueron identificados en el marco de la presente causa judicial. - Con respecto a Molina, Raúl Horacio se observa del secuestro de los soportes informáticos que se encuentran carpetas con su nombre de pila (Raúl) donde se registran archivos con detalle de imágenes de trámites realizados a través de la página de internet de esta AFIP-DGI (altas y/o bajas de impuestos, actividades, etc) y/o emisión de facturas tanto manuales como electrónicas de las usinas de comprobantes apócrifos relevados, constatándose la utilización de un mismo comprobante manual en hasta tres clientes con distintas fechas e importes declarados en los Registros de Compras RG3685 presentados por clientes/usuarios de la presente operatoria, detectándose además facturas apócrifas relevadas en soporte papel en su domicilio laboral sito en Duarte Quirós N.º 457 – Córdoba. Con respecto a Cupper, Ricardo Esteban se observa documentación secuestrada en soporte papel en su domicilio fiscal y particular sito en Mercedario N.º 2082/382 – Córdoba – que son facturas emitidas a nombre de algunos de los contribuyentes identificados como incluidos en la base E-Apoc y/o con claves fiscales anotadas, entre las que se encuentra la denunciante que diera origen a la presente causa judicial (Hurtado Arango, Sandra Mónica – CUIT: 27957237660) quien además se registra una clave fiscal anotada con su nombre de pila (Ricardo766); dando verosimilitud de los hechos denunciados en el marco de la presente causa judicial. Por último, se identificaron numerosos archivos de imágenes de impresión en soporte informático y comprobantes relevados en soporte papel; de facturas tanto manuales como





## *Poder Judicial de la Nación*

electrónicas emitidas a nombre de las usinas de facturas apócrifas ya determinadas por esta AFIP-DGI y/o relevadas con CLAVES FISCALES anotadas en la presente causa judicial; (fs. 1477)".

En este sentido, los miembros de la asociación, más allá de contar en sus respectivos domicilios particulares y laborales con documentos y elementos propios de la actividad ilícita, lo cierto es que, el sitio mayormente utilizado para congregarse y llevar a cabo la manipulación de datos fiscales, creación de registros tributarios y emisión de facturas apócrifas, era la llamada "oficina".

Las transcripciones de las conversaciones telefónicas demuestran que los imputados se referían a este espacio físico, ubicado en calle Corro N°185, como su centro de operaciones, la "oficina." Pese a que el lugar carecía de cualquier identificación visible sobre los servicios profesionales que brindaban, y así lo reconocían a sus clientes –sin cartel- (fs. 258), la investigación confirmó su relevancia en el esquema delictivo.

A su vez, esta falta de identificación es un dato crucial, especialmente porque se determinó que Raúl Horacio Molina no estaba registrado como contador público ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Córdoba, y Rubén Daniel Sánchez tenía su matrícula cancelada en dicha entidad (fs. 330/332). Este último hecho se corroboró al consultar la base de datos de dicha institución y su página web oficial (fs. 299/301).

La accesibilidad de los miembros quedó demostrada cuando se produjo el allanamiento del domicilio del imputado Molina, lugar en el que le fueron secuestradas llaves de la oficina ubicada en la calle Corro 185 (fs. 362/365). Todo lo que permitió su ingreso sin fuerza pública al momento de registrarla por orden judicial.

Vale recordar que en su interior se hallaron numerosos elementos de prueba que demuestran con certeza absoluta la existencia de la organización, la intervención de los acusados en autos y la responsabilidad penal de los mismos.

USO OFICIAL





Ello desmintió, de manera colosal, las alegaciones de Sánchez en cuanto a que desconocía las actividades que Molina hacía en la oficina que él le prestaba.

Cabe mencionar que en el acta de allanamiento al domicilio de calle Corro consta que los equipos de computación existentes en lugar se encontraban accesibles, sin necesidad de escribir usuario ni clave, los correos electrónicos de las cuentas [crubendsanchez@gmail.com](mailto:crubendsanchez@gmail.com) y [cr\\_rubendsanchez@yahoo.com.ar](mailto:cr_rubendsanchez@yahoo.com.ar). Con previa autorización judicial, se revisaron los e-mails y se imprimió una muestra de los correos obrantes en las bandejas de esos mails. Del contenido de intercambio de mails entre los implicados, se pudo observar facturación falsa entre usinas administradas por ellos (por ejemplo: Teruel – Delera SAS). Otra prueba más que acredita con solvencia la actuación coordinada entre los imputados Sánchez y Molina en la gestión, emisión y comercialización de comprobantes apócrifos.

De hecho, la recepción por parte de la organización de las constancias de inscripción de los contribuyentes reclutados por Cupper y la apropiación de la clave fiscal de los mismos surgen acreditadas porque en las oficinas de calle Corro se secuestraron constancias de inscripción ante AFIP de Natalia Andrea Nievas, Gabriela Ayelén Guzmán, Servicios RC La Rioja SAS, Delera Servicios Empresariales SAS, Teruel Ricardo Gabriel, es decir usinas usadas por la asociación investigada en autos, y varias de esas constancias, tienen anotadas la clave fiscal correspondiente.

El hallazgo de los sellos mencionados, en esta causa, resulta una prueba relevante a efectos de acreditar que la organización ilícita que funcionaba en la oficina de calle Corro emitía documentación falsa a nombre de las usinas de comprobantes falsos identificadas en autos. Ello, se correlaciona con el secuestro, en el mismo lugar, de talonarios de facturas “A” a nombre de las usinas Adriana Argento, Jonás Dolinsky, Daniela Castro, Ricardo Teruel, María José Maldonado, Medina Alberto, Distribuidora de Ce SAS.

Asimismo, en el domicilio de calle Corro se secuestraron cadenas de e-mail mantenidos entre [cr\\_rubendsanchez@yahoo.com.ar](mailto:cr_rubendsanchez@yahoo.com.ar) y

[liliana.perez@gmail.com](mailto:liliana.perez@gmail.com) en fechas 11 y 12-9-2019 en los que alude a “facturas”  
Fecha de firma: 12-9-2019  
Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE CAMARA  
Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#39327179#473862580#20250929105128696



## *Poder Judicial de la Nación*

y a “pagos” inherentes a esas facturas, por ejemplo el Cr. Sánchez escribe “recibí la última factura con lo cual llegamos a los 101.000 de compra, se modifica lo que te propuso por los siguientes importes: efvo. \$13.130,00 valores \$ 11.110 cada uno a 20 y 40 días...”

La prueba incorporada a la causa ha permitido establecer una clara división de tareas y asignación de roles específicos entre los imputados, con el objetivo de cometer delitos fiscales, de manera permanente para obtener un beneficio económico.

La existencia de esta estructura se ha corroborado a través de las conversaciones telefónicas intervenidas, cuya validez se refuerza con la documentación y el análisis de los dispositivos informáticos secuestrados durante los allanamientos.

Ricardo Esteban Cupper operaba como el reclutador de la organización. Su función principal consistía en obtener las claves fiscales de contribuyentes mediante diversos ardides. Esta información era crucial para la red y era transferida a los otros miembros para la siguiente fase del ilícito.

Por su parte, Raúl Horacio Molina y Rubén Daniel Sánchez, valiéndose de sus conocimientos en materia contable, se encargaban de la ejecución técnica del fraude. Su labor incluía la modificación de contraseñas de las claves fiscales apropiadas y la alteración de los registros de los contribuyentes ante la AFIP-ARCA.

Posteriormente, a solicitud de clientes que buscaban evadir impuestos, Molina y Sánchez emitían un número indeterminado de facturas apócrifas, tanto digitales como en papel, a nombre de las personas cuyas claves fiscales tenían en su dominio. Estos comprobantes falsos permitían a los “usuarios” registrar movimientos fiscales inexistentes en sus declaraciones juradas, reduciendo fraudulentamente su carga tributaria en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el Impuesto a las Ganancias. Obviamente esos clientes abonaban una suma de dinero a cambio de esos servicios.

USO OFICIAL





Además, para evitar ser detectados por la AFIP-ARCA, Molina y Sánchez simulaban la situación contable de las "usinas de comprobantes apócrifos" que administraban. Esto lo lograban registrando compras y gastos falsos para equilibrar los débitos y créditos fiscales. La organización también orquestaba circuitos de pagos ficticios para dar apariencia de realidad a las operaciones y, así, obtener su rédito económico.

Ricardo Esteban Cupper en cumplimiento de su función, contactaba a personas que tenían problemas económicos, de básica formación cultural y educativa, generalmente mujeres con cargas de familia, extranjeras y les proponía inscribirse en la AFIP a cambio de una módica suma de dinero u otras promesas engañosas. Claramente, la mayoría de ellas no tenían cabal conciencia de las consecuencias perjudiciales que le esperaban.

Los mensajes de audio incautados muestran sus reclamos por deudas ante la AFIP, la desaparición de dinero de sus cuentas y la desesperación por la baja de impuestos para poder cobrar beneficios sociales, como la Asignación Universal por Hijo. En la grabación de un mensaje por parte de una mujer, le reclama a Cupper "qué chanchuyo han hecho" y le pide que le "solucionen lo de AFIP" porque necesita recuperar lo de ANSES.

La pérdida del dominio del perfil tributario, obedece a que, en cumplimiento del trato alcanzado, los contribuyentes debían ceder sus claves fiscales a la organización. Tanto que, en muchas ocasiones el mismo Cupper acompañaba a las personas a efectuar los trámites respectivos para asegurarse la obtención de las claves de AFIP y de cuentas bancarias. El testigo Ibarra Trucco lo mencionó claramente en el debate y se demostró con la documentación encontrada en el allanamiento del domicilio de Cupper, pues, conservaba en su poder varios formularios originales de la clave fiscal, aquellos extendidos por AFIP-ARCA al contribuyente que se inscribe, sobre los que figuraban anotadas de manera manuscrita las claves genéricas que brinda de ordinario el personal de ARCA.

Incluso, se encontraron con que algunos formularios, en el mismo papel, contaban con otra clave anotada de puño y letra, generalmente relacionada con el imputado, lo que no hace más que demostrar la manipulación de datos, al





## *Poder Judicial de la Nación*

efectuar el cambio de la clave genérica y original por otra generada por Cupper, brindando acceso irrestricto al perfil del contribuyente por parte de la organización.

Dicho de otro modo, Cupper obtenía las claves fiscales originalmente asignadas por la AFIP (p. ej., "AFIP2019"), para luego cambiarlas por claves con una estructura que incluía su nombre, como "Ricardo2260" o "Ricardo 2405". Este control sobre las claves le permitía a la organización alterar los registros de los contribuyentes sin que pudieran siquiera tener conocimiento de ello.

Pueden mencionarse los siguientes formularios incautados en el domicilio de Cupper: F460/F de inscripción de Daniela Soledad Castro con la inscripción "AFIP2019", F460/F original de inscripción de Ariana Marianel Perea inserta la primigenia clave fiscal asignada "AFIP 2017", F3282 original entregado el 26-11-2018 por AFIP al expedir la clave fiscal al Sr. Gerardo Gabriel García Elosegui con la anotación manuscrita de la clave primera asignada por el personal de AFIP ("afip1234") y luego a mano, la nueva clave "Ricardo2260".

También se secuestró constancia de inscripción en Ingresos Brutos de DGR Córdoba de Fabián Alejandro Diaz, que tenía anotada "Ricardo 2405", entre otras.

Por otra parte, las comunicaciones telefónicas interceptadas confirman la coordinación de Cupper con los otros imputados. A fs. 277, una llamada del 30 de septiembre de 2019 muestra a Cupper informando a Raúl Molina que "ahí inscribí a una chica si hace falta..." y a fojas 89 vta. y 90, otra llamada del 28 de junio de 2019 reveló a Molina pidiéndole que pase por la oficina, donde le dejó dinero para la Sra. Hurtado.

Las pruebas demostraron que Ricardo Esteban Cupper no solo se encargaba del reclutamiento, sino también de la gestión de los pagos a las personas captadas.

USO OFICIAL





El hallazgo de sobres con sumas de dinero en la vivienda de Cupper, que debían ser entregadas a las "usinas", consolida la prueba de que él era el encargado de esta tarea.

Estas circunstancias confirman la clara división de roles dentro de la organización, donde Cupper se encargaba de la conexión directa con las víctimas y de la entrega de los pagos prometidos, manteniendo así la identidad de Molina fuera de la vista de las personas reclutadas.

A su vez, los audios de WhatsApp extraídos del celular de Cupper indican que también participaba activamente en la venta de facturas falsas. Se le solicitaban facturas por montos específicos, por ejemplo, de \$60.000 y \$50.000 "para que no sea tan evidente", o por ejemplo: "facturas tipo A del rubro ferretería".

Por su parte, la prueba incorporada a la causa, también ha permitido determinar el rol central del imputado Raúl Horacio Molina como el nexo y gestor de la organización delictiva, con funciones que abarcaban desde la coordinación de operaciones hasta el manejo del dinero ilícito. Su participación en la red criminal se sustenta en comunicaciones intervenidas, documentación secuestrada y hallazgos en allanamientos, que se valoran de manera conjunta y coherente.

Ya se ha mencionado que es posible ubicar el centro de operaciones de esta banda en la oficina contable de calle Corro N° 185, a la que preferían no identificar por las actividades que allí desarrollaban pero cuya ubicación compartían en caso de ser necesario. De hecho, Molina lo reconoció al decir "noo si vos.. si yo no estoy lo metes dentro de un sobre y los tiras por debajo de la puerta ( ... ) Corro 185 una puerta negra ( ... ) no dice nada, no hay cartel, nada ( ... )" (fs. 258 vta.).

Más allá de lo anterior, se pudo determinar que los imputados, a su vez, conservaban elementos de interés para la investigación en sus respectivos domicilios particulares y laborales –en el caso de Sánchez–.

Cabe recordar que en la vivienda de Molina se incautó una agenda con la leyenda "RM Servicios empresariales" que contenía datos de Cupper y otras

"usinas de facturación" gestionadas por la red. Las anotaciones incluían





## *Poder Judicial de la Nación*

referencias a clientes como AVED y Tower Tech, y menciones a "Imprenta sello" y "presentaciones AFIP" (fs. 12 de la agenda).

Concretamente, allí se anotó el número de CUIT del Sr. Cupper, su CBU y número de cuenta en el banco Santander Río, su usuario y clave bancaria (fs. 2 de la agenda). Al dorso el número de CBU, usuario y clave de homebanking de la cuenta bancaria de "Delera", y se hizo varias menciones a cantidades como por ejemplo "\$48.699 Teruel agregar", "35.000 Guzmán" "Sánchez (Delera)"

Por lo demás, se cuenta en el expediente con numerosas conversaciones recibidas en el teléfono celular del Sr. Molina, que debidamente intervenidas, arrojaron luz sobre la emisión de comprobantes que se suponen falsos a pedido de terceras personas (fs. 211, 257, 258, 259, 260, 261, 265, 280 y 286 de autos).

Por demás elocuente la referencia utilizada por el imputado Molina en sus conversaciones referidas "a cómo hacer criollos", y el mecanismo de utilizar las "SAS" que solo requieren un CUIT para registrar empresas ficticias (fs. 259).

Mantenía frecuentes conversaciones con terceros que le encargaban la confección de facturas para registrar gastos y compras ficticios y así abonar un importe de impuestos menor al que le correspondería abonar. Estas personas al contactar al Sr. Molina o al Sr. Sánchez le indicaban el rubro y el monto a facturar. Para mencionar algunas, a fs. 118 de autos Raúl Molina conversa con Roberto Garabino quien dice al primero "che, ahí tengo para hacer una boletita, tenés disponible?", Raúl responde que sí y Roberto ofrece enviarle por mail todos los datos. A fs. 211 surge que Molina, quien recibe la comunicación de una persona de sexo femenino que pidió al acusado le hiciera comprobantes "A" de la ortopedia boguera en agosto porque necesitaba "más o menos \$ 3.000 de IVA de esa ortopedia.

La parte querellante, en su meduloso análisis de la prueba, nos mostró una triangulación en la operatoria de facturación apócrifa, que pudo ser reconstruida a partir de la recolección de datos obtenidos en diversos medios

USO OFICIAL





de prueba y por su contundencia, despeja cualquier duda sobre la mecánica utilizada para fraguar comprobantes por parte de la organización acusada.

En este sentido, a fs. 261 de autos se observa una conversación de fecha 17/09/2019 entre Raúl Molina (RM) y “Sebastián” (S) de Rosario en la que éste último le comentó que Hernán le pasó su contacto porque él necesitaba lo que “le “FABRICAS” a él”. Ante ello, Molina le respondió que envié un correo electrónico a su casilla, “raulhoraciomolina todo junto” explicando cómo era su modalidad de trabajo.

Por lo que se observó en los diálogos interceptados, las tratativas avanzaron y el 17/09/2019, Sebastián le avisó que iba a mandarle lo que necesitaba consultándole qué productos le podía “elaborar” (fs. 263). Ante la desconfianza de Sebastián que refirió malas experiencias anteriores, Molina le quiso brindar tranquilidad y dijo que “cuida mucho el tema y que trata de ser lo más pulcro posible”.

Agregó que con las facturas manuales hay menos control que con las electrónicas, así que era más fácil todavía. Finalmente, le comentó cómo proseguían una vez confeccionaba el comprobante manual encomendado al decir: “y yo te lo despacho...te lo tengo que despachar a Rosario a eso, porque al no ser electrónico te lo tengo que despachar por correo o colectivo de última S: si por INTEGRAL EXPRESO trabajo siempre...y después bueno después arreglamos como te envió las cosas, justamente también por encomienda te lo puedo enviar RM: eh...a...el tema de los pagos??? S: seee de lo tu....si sisi “.

Vale decir que, Molina guardaba en la agenda secuestrada en su domicilio una factura que acreditaba que el día 23/9/2019 había enviado una encomienda a Kirurgia SRL, domiciliada en la ciudad de Rosario, a través del expreso “Integral Pack” (Fs. 34)

Incluso más, en la hoja correspondiente a la fecha en la que Sebastián se comunicó con el Sr. Molina (Fs. 18) el imputado había consignado los datos de Kirurgia SRL, su CUIT y dirección en la ciudad de Rosario “Kirurgia SRL 30-70828071-98 Bv. Oroño 1062 3er piso Rosario”.





## *Poder Judicial de la Nación*

Por último, a fs. 27 de la misma agenda, bajo el título “A cobrar” se consignó a “Kirurgia” con \$67.647 por agosto, \$18.000 por septiembre y \$40.000 por octubre.

No solo eso, sino que el contador Sánchez en su domicilio particular también tenía anotaciones manuscritas con datos de facturación falsa (hojas con un encabezado manuscrito que identifica al receptor de las facturas y luego detalla las usinas usadas para facturarle), y muchas de esas hojas identificaban como uno de los clientes de la organización a Kirurgia SRL. Vale decir que, que en su favor se emitieron facturas a nombre de la usina identificada como “Ricardo Teruel”

Esta mecánica se repite en varias conversaciones telefónicas. De hecho, el 28/08/2019 una persona se comunicó con Molina y le dijo: “Raulo: che Molina ehh 180 para tower RM: y...que le pongo? Raulo: mmm repetí lo atrasado RM: ni me acuerdo que era, pero bueno... Raulo: no las tenes vos armadas? RM: tan en el sistema, o sea, están en el sistema Raulo: no, me dice para que te la voy a hacer, hacela como antes, me dice. Buen..sino se las pido te paso yo lo de antes. RM: si, pásame lo de antes ah, dale pásame alguno de las más viejas y yo te lo armo, 180 de coso, no Raulo: si si si RM: listo Raulo: dame varios cuit para pasarlos asi te los den.” Continúa la conversación y dicen:RM: a tower le hago un solo proveedor o dos? Raulo: no, dos, dos dos RM: dos, le hago la mitad a cada uno Raulo: si, dale RM: bue listo Raulo: ya te paso, lo busco y te paso, yo no borro nada, tengo todo ahí RM: perfecto, yo borro todo por obligación Raulo: (risas) a mi si me agarran van a ir todos atrás mio RM: (risas) dale toca, pásame eso, te lo armo, y cuando llego a la ofi te paso dos o tres cuit, Raulo: pásame, pásame como se llama, pásame lo de los cuit esos buenos, asi yo los paso y me los investigan”

En la misma línea, se advierte otra comunicación registrada el día 13/08/2019 desde el celular de Molina (fs. 116) en la que mencionan a Sánchez como el contador “Raúl: che José venite a las cuatro, yo a lo tuyo lo tengo todo...ya lo hice fabricar, José: a las cuatro voy, Raúl: cincuenta recibos te hice, José: así ellos lo pueden calzar de alguna forma me entendés?? Eh...ya

USO OFICIAL





van a ver como hacen, Raúl: si yo a muchos clientes le he hecho este trabajo, José: eh...necesito urgente salir... Raúl: a uno una vez le hice doscientos recibos...pelotudo...porque yo se los doy... José: y la letra no tiene nada que ver??? Raúl: no...no...José: no...porque lo puede hacer la secretaria, claro, si..si... bueno yo te veo entonces y necesito hablar con el contador que no se cuando lo puedo enganchar, Raúl: yo calculo que lo vamos...los vamos a enganchar...si vos venís a las cuatro en un rato mas va a venir José: bueno...dale...te veo entonces Raúl: yo también tengo que verlo hoy si o si “

El análisis de los elementos probatorios, a saber, los soportes documentales e informáticos incautados en el domicilio del Sr. Sánchez y en la oficina de la calle Corro, revela la existencia de archivos y hojas de cálculo que identifican a las usinas de comprobantes apócrifos gestionadas por la organización delictiva. Como se adelantó, dichos archivos fueron etiquetados con denominaciones como "clientes Raúl", "Raúl facturas", o "Raúl y sus chicos", o con expresiones de similar tenor, lo cual sugiere una estructura de clientes vinculada a este individuo.

De las comunicaciones telefónicas intervenidas y las mantenidas a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, se desprende el intento del imputado Molina de eludir la detección de su actuar ilícito. En una conversación consignada en Fs. 209 CD 17 entre el imputado Molina y un interlocutor identificado como "Raúl", el primero manifestó: "yo borro todo por obligación", a lo que "Raúl" respondió, en tono jocoso: "si a mí me agarran van a ir todos atrás mío".

El contenido del diálogo precitado evidencia la actitud precautoria del Sr. Molina, quien era plenamente consciente de la antijuridicidad de su conducta, y por ende, adoptaba medidas para evitar la permanencia de pruebas que pudieran incriminarlo.

Asimismo, se ha determinado que el Sr. Molina ejercía funciones cruciales dentro de la estructura criminal. Era el responsable de la interacción con los clientes de la organización, la recepción de encargos y la coordinación de las entregas de los comprobantes falsificados. Además, tenía a su cargo la administración de los pagos y cheques y la manipulación de las bases de datos





## *Poder Judicial de la Nación*

de los contribuyentes, los cuales eran utilizados como usinas de facturación falsa.

El rol de Molina en la gestión de los recursos financieros de la organización también quedó fehacientemente acreditado. Se hallaron 37 cheques al portador de diversos libradores, por un importe total de \$532.115,38, los cuales se encontraban ocultos en un mueble ubicado en el domicilio del imputado. Adicionalmente, de la agenda mencionada en la investigación, se incautaron tres cheques presuntamente endosados por la Sra. Daniela Castro, quien fue señalada como una usina de comprobantes apócrifos en el marco de la presente investigación.

Por su parte, el imputado Rubén Daniel Sánchez ejercía las funciones de un operador contable y logístico de la organización criminal. Su actividad profesional fue central para la ejecución de las maniobras ilícitas. Las pruebas documentales e informáticas demuestran que su actividad se enfocaba en controlar las claves fiscales obtenidas por la organización para modificar la situación tributaria de los contribuyentes, generaba facturas falsas, tanto en formato digital como físico, que eran comercializadas por la red delictiva y simulaba la situación contable de las "usinas" para darles una apariencia de legalidad, registrando compras y gastos falsos para justificar las operaciones y equilibrar sus cuentas.

Es decir, el contador Sánchez se ocupaba de registrar compras a nombre de las usinas –a cuyos efectos hacía facturar ventas o servicios a otras usinas de comprobantes falsos- que justifiquen las operaciones comerciales instrumentadas en las facturas vendidas los clientes de la organización.

Las tareas de Sánchez se llevaban a cabo principalmente en la oficina de calle Corro 185, aunque también se encontró evidencia física y digital en su domicilio y en su lugar de trabajo en la Procuración del Tesoro de la Provincia de Córdoba.

Es dable aclarar que Rubén Daniel Sánchez también aparece recibiendo llamadas de personas que le piden facturas directamente a él y le indican qué rubros necesitan y la modalidad de emisión de las mismas (manual o

USO OFICIAL





electrónica) (fs. 287). Así, el día 02/10/2019 se registra una llamada al celular de Sánchez en la que éste se comunica con una persona y entre ellos hablan sobre la inscripción de un hombre al que luego le van a asociar un CUIT y comentan sobre cómo inventarle un domicilio en Córdoba (fs. 288).

Además, se registran diálogos entre Sánchez y el coimputado Molina sobre diversos contribuyentes apócrifos como Castro, Delera, y Teruel (fs. 285).

En el domicilio de Sánchez, sito en calle Roque Suárez, se halló una anotación electrónica de la clave fiscal de Ricardo Esteban Cupper, quien, además de ser miembro de la organización, funcionaba como "usina" y estaba incluido en la base de datos E-Apoc. En su teléfono móvil, modelo Samsung J4, se encontraron en su lista de contactos los números de los coimputados Cupper y Molina, así como de otras personas utilizadas como "usinas" de comprobantes falsos. Adicionalmente, en la agenda de ese aparato telefónico, junto a los números de Juan José Sánchez y Silvia Romero, Sánchez tenía registrados su CUIT y clave fiscal.

Por otra parte, los elementos secuestrados en el escritorio que Sánchez ocupaba en la Procuración del Tesoro de Córdoba confirman su dedicación a la generación de "usinas" y a la comercialización de facturas apócrifas. Allí, se incautó una planilla titulada "En uso" y "anteriores desafectados", que detallaba nombres de contribuyentes, CUIT y claves fiscales. Entre los "en uso" figuraban Ricardo Cupper, La Rioja SAS, Guzmán Gabriela, Teruel y Delera.

Entre los "anteriores desafectados" se encontraban Delera, Díaz, García Elosegui, Teruel, Hurtado Aragno, Ibarra Trucco, Cupper, Corporán, Castro Daniela, entre otros. Esta planilla también contenía los datos de la cuenta bancaria de Guzmán, incluyendo su usuario y clave. Otro listado, titulado "Responsables inscriptos", también contenía nombres como Juan José Sánchez, La Rioja SAS, Ricardo Cupper. De allí surge incluso la corrección de errores por parte de Sanchez, como lo prueba la anotación que indicaba "Nievas... de sept anular y refacturar con Delera fecha de octubre".

La prueba en autos establece que la actuación de Sánchez se realizaba en permanente coordinación con el Sr. Molina, con quien compartía oficina y





## *Poder Judicial de la Nación*

USO OFICIAL

mantenía diálogos constantes sobre la gestión de las facturas falsas. En el domicilio de Sánchez, se encontró un papel impreso de un correo electrónico de fecha 10-10-2019 enviado por Roberto Luis Barabino ([robertobaravino@hotmail.com](mailto:robertobaravino@hotmail.com)) a Raúl Molina ([raulhoraciomolina@gmail.com](mailto:raulhoraciomolina@gmail.com)) con detalles precisos sobre los datos que deben consignarse en una factura (cantidad, descripción del producto, precio unitario, IVA, etc). El remitente decía “Avisame cuando esté lista y enviámela por mail. La necesito para hoy a última hora o mañana a primera hora, ya que debo entregarla antes de las 12 hs.”. La hoja impresa tenía una anotación manuscrita que decía “para hacer con Guzmán”, lo que vincula a Sánchez directamente con la confección de dicho documento apócrifo.

Pues bien, los elementos secuestrados en la vivienda de Sánchez dan cuenta que él consultaba la base APOC e imprimía los reportes pertinentes para asegurarse que al momento de la emisión de las facturas los contribuyentes que figuran como proveedores no habían sido incluidos en esa base, por ejemplo de Yessenia Corporan Colón, de Ibarra Trucco y Grenetier.

En la residencia de Sánchez se encontraron anotaciones manuscritas que dan cuenta sobre la facturación apócrifa emitida. Ellas, se encabezaban con la identificación a mano del receptor de las facturas (Kirurgia SRL, B y B Servicom, Yobstraibizer Edmundo, De Dios Arturo, Yabale Jorge, Layus Miriam) y abajo, consignaba las usinas usadas en favor de ese cliente (Nievas, Teruel, RC La Rioja, Delera Servicios Empresariales), con un resumen de cada factura emitida para ese destinatario.

La eficacia convictiva de las pruebas analizadas anteriormente desestiman de plano las alegaciones efectuadas por el imputado Sánchez al tiempo de ejercer su defensa material.

En este sentido, se demostró que actuaba con pleno conocimiento de la ilicitud de sus acciones, excediendo el rol de un profesional de la contabilidad, pues las operaciones encomendadas por sus clientes distaban de meras registraciones de ventas cuya veracidad no estaba obligado a verificar. Hemos visto que su actuación como miembro de la asociación ilícita que conformaba





era la creación de "carpetas" o "usinas", con la emisión de facturas de compras falaces para la evasión fiscal de terceros, y la invención de operaciones comerciales para dar una apariencia de legitimidad a contribuyentes ficticios.

El argumento de buena fe de Sánchez no se sostiene, ya que es improbable que un contribuyente solicite a un contador facturas de compras, las cuales son emitidas por sus proveedores, tal como explicó el profesional de ciencias económicas, funcionario de ARCA que brindó su testimonio en debate.

Además, el imputado Sanchez negó conocer al coimputado Cupper, afirmando que solo lo vio dos veces en la oficina de calle Corro. No obstante, la evidencia refuta esta declaración. En la línea telefónica de Molina, una conversación con Sánchez revela que este último sabía los datos de Cupper, incluyendo su CUIT (fs. 116). La documentación incautada en el domicilio de Sánchez y en su lugar de trabajo hace menciones expresas a Cupper, incluyendo su clave fiscal y la de su empresa apócrifa, Servicios RC La Rioja SAS.

Por último, mensajes de WhatsApp que demuestran una interacción directa entre Cupper y Sánchez, donde discuten sobre las "usinas" de la organización. En un mensaje, Sánchez le pide a Cupper que le pase un código de Gmail de "Castro", y en otro, Cupper le solicita a Sánchez que "solucione lo de Gabriel Elosegui del domicilio"

La evidencia del caso revela que los imputados Cupper, Molina y Sánchez crearon una estructura criminal con una clara división de roles, diseñada para operar a largo plazo y obtener ganancias ilícitas.

Las comunicaciones telefónicas interceptadas y el análisis de dispositivos electrónicos confirman la existencia de esta red y las funciones específicas de cada miembro. Todo lo que, pudo ser correlacionado con la prueba testimonial y documental obrante en la causa y los elementos secuestrados en el marco de los procedimientos de allanamientos ordenados por el juez de instrucción.

A ello, se adiciona el análisis y conclusiones emitidas en el informe de los funcionarios de ARCA a cargo de la investigación tributaria, respaldadas por un sólido conjunto de pruebas, que permitieron definir con precisión las





## *Poder Judicial de la Nación*

acciones de los imputados en la maniobra delictiva que se les atribuye en el hecho primero descripto en la acusación.

La contundencia del caso se fortalece, precisamente, por la convergencia de toda la información proveniente de los diferentes medios probatorios independientes, que tuvieron lugar en la investigación.

Con lo cual, estoy en condiciones de aseverar que en tiempo anterior al 8 de octubre del 2019, los imputados Raúl Horacio Molina, Rubén Daniel Sánchez y Ricardo Esteban Cupper se congregaron para cometer delitos relacionados al régimen tributario. En ese plan común, distribuyendo sus funciones, obtenían ilegítimamente claves fiscales de terceras personas, para la posterior alteración dolosa de los registros de esos contribuyentes ante AFIP, que les permitía, en definitiva, emitir y comercializar facturas apócrifas a nombre de esos terceros, colaborando en la evasión de los impuestos a cargo de los “clientes” o usuarios de la organización que adquirían, registraban y computaban como gastos y créditos fiscales las sumas emergentes de esas facturas apócrifas.

Ahora bien, en el marco de la operatoria ilícita llevada a cabo por los imputados, como miembros de la asociación ilícita que conformaron, la parte acusatoria requirió condena penal por un hecho individual, nominado segundo, que tuvo a la denunciante Sandra Mónica Hurtado como sujeto pasivo del delito de alteración dolosa de registro.

Más allá de encontrarse confirmada la validez de la declaración testimonial por ella prestada en la instrucción, donde ratificó la noticia criminis inicialmente introducida, y por tanto, pasible de ser valorada en este acápite, es dable aclarar que, en sí misma, representa un elemento de cargo más dentro del cúmulo de probanzas adquiridas por el proceso.

En este sentido, esa declaración testimonial carece de virtualidad para dotarla del valor fundamental para comprobar el hecho en cuestión, que le imprimió la defensa de Molina al tiempo de solicitar su exclusión probatoria.

A la luz de los cuantiosos e irrefutables resultados obtenidos de otras evidencias incorporadas al debate, casi que podría prescindirse de la mención

USO OFICIAL





del testimonio de Hurtado sin ninguna alteración de tipo confirmatoria en el suceso aquí analizado.

Hecha la introducción, en adelante, se profundiza el análisis de los datos incorporados al proceso que reafirman las circunstancias relevantes del suceso en cuestión.

Básicamente, Ricardo Esteban Cupper obtuvo ilegítimamente la clave fiscal de Sandra Mónica Hurtado, para aportarla a la asociación ilícita que conformaba junto con Raúl Horacio Molina y Rubén Daniel Sánchez a los efectos de concretar una de las actividades ilícitas de naturaleza fiscal para las cuales se habían agrupado, en el caso puntual, se consumó la supresión, adulteración y modificación de los registros tributarios de la contribuyente Hurtado.

En definitiva, se demostró que Hurtado había entregado su clave fiscal a la organización y con ello, el control de sus movimientos fiscales. Desde un punto de vista cronológico, se pudo confirmar que los primeros días del mes de enero de 2019, Sandra Mónica Hurtado Arango concurrió personalmente a la delegación Córdoba de AFIP (hoy ARCA) a los fines de realizar el blanqueo de su clave fiscal. Gestión que realizó acompañada de Cupper, quien obtuvo el comprobante del trámite y el dominio de su clave fiscal. La contribuyente, al denunciarlo meses después, reconoció haber recibido dinero por el préstamo de su clave fiscal pero dijo sentirse engañada acerca de los verdaderos motivos de su empleo, por parte de Cupper.

Ocurrió que, sin conocimiento de la contribuyente, el 14 de enero de 2019, los acusados modificaron sus registros en ARCA, dando de baja el régimen del monotributo en el que constaba inscripta Hurtado y procedieron a registrarla como trabajadora autónoma, con alta en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a las Ganancias, inscribiéndola en actividades falsas (“venta al por menor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos” y “servicios empresariales n.c.p.”). Posteriormente, el 1 de marzo de 2019, le dieron el alta en la actividad de “servicios de publicidad n.c.p.”.

Mientras tanto, entre el 7 de febrero del 2019 y el 29 de marzo de 2019,

los imputados ingresaron a los registros informáticos de AFIP, con la clave





## *Poder Judicial de la Nación*

fiscal de Sandra Mónica Hurtado y emitieron 39 facturas falsas, por un monto total de \$ 3.288.654,16 pesos que fueron comercializadas a otros clientes de la organización criminal.

La denuncia realizada por Sandra Mónica Hurtado el día 23/05/2019 ante la Fiscalía Federal N° 2 de Córdoba (fs.1), da cuenta que ella había entregado su clave fiscal al Sr. Cupper “para generar una empresa” y que junto a él, concurrió al Banco Santander Río ubicado en Cañada y Santa Rosa de esta ciudad para tener acceso a su CBU. El acuerdo por el intercambio de esos datos, era el pago de \$1.000 semanales.

En aquel momento, la Sra. Hurtado prestaba servicios como cuidadora de ancianos a una empresa de asistencia y su condición tributaria frente a AFIP era de monotributista. Comentó que en febrero comenzó a tener problemas para facturar el pago de sus servicios: “cuando fui a cobrar mi sueldo, la empresa con la que actualmente trabajo (Asistencia Local) no me pudo depositar mi sueldo porque ya no tenía el monotributo”.

Ante esa situación le comunicó a Cupper su inconveniente y “lo solucionó”, sin embargo, en el mes de mayo volvió a tener problemas para facturar y al averiguar en AFIP, se dio con que estaba dada de baja del monotributo, registraba una deuda que no había contraído y en su nombre se habían emitido facturas por \$3.000.000.

En ese acto, la denunciante aportó uno de los correos electrónicos que utilizaba Cupper: [raulhoraciomolina@gmail.com](mailto:raulhoraciomolina@gmail.com).

En la declaración testimonial prestada por la Sra. Hurtado ante la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba el día 13/06/2019; ella ratificó su denuncia y aclaró que después de haberla formulado le avisó al Sr. Cupper sobre la misma.

Al ser preguntada sobre a qué se dedicaba el Sr. Cupper, ella dijo “creo a algo relacionado con un frigorífico que tiene junto con un amigo y a tareas relacionas con la gestión de facturas o algo así como un contador.”

Ella aclaró que cuando fueron a AFIP, ella preguntó al Sr. Cupper si lo que estaban haciendo estaba mal y él dijo que “era un amigo que tenía varios

USO OFICIAL





negocios y no quería pagar impuestos al estado y que prefería ayudar con ese dinero a personas como yo”

Asimismo, la Sra. Hurtado manifestó que cuando le reclamó al Sr. Cupper por el daño que le había hecho, él dijo haber sido también víctima de un engaño por parte de Raúl Horacio Molina.

La Sra. Hurtado explicó cuál era la mecánica por la cual ella cobraba sus servicios como cuidadora de ancianos y dijo que su empleador le enviaba un mail cuando ya estaba disponible el sueldo, entonces ella le avisaba a Ricardo Cupper y él se ocupaba de emitirle y mandarle la factura que ella presentaba en su trabajo para poder cobrar.

Por ese motivo, cuando tuvo problemas para cobrar su sueldo por no tener el monotributo advirtió que las facturas que el Sr. Cupper le enviaba para que ella pueda presentar en su trabajo, eran remitidas desde el correo [raulhoraciomolina@gmail.com](mailto:raulhoraciomolina@gmail.com). En razón de que el Sr. Cupper, a esas alturas ya no le atendía el teléfono y necesitaba cobrar, escribió a la cuenta de mail mencionada, de quien recibió como respuesta del remitente, que el Sr. Cupper, una vez le había pedido a esa persona su dirección de mail para enviar una factura pero que no tenía nada que ver ni podía decirle nada más.

Para finalizar su testimonio, la Sra. Hurtado agregó que el Sr. Cupper le había ofrecido una suma de \$500 por cada persona nueva que reclutara para la organización.

En respaldo de lo manifestado, la testigo Hurtado acompañó fotos y capturas de pantallas que prueban los hechos descriptos e indicó el número de teléfono del Sr. Cupper (fs. 4/17 de autos).

Esta información inicial, que sirvió de mero impulso de la acción penal, fue suficiente para dictar medidas investigativas que derivaron en una compleja operatoria delictiva que involucró a otros casos similares a los de Hurtado.

De manera que, no solo resultó plenamente acreditada en su veracidad sino que los resultados que iban surgiendo en el camino de esa confirmación superó ampliamente los límites del hecho primeramente denunciado, brindando otros detalles de suma relevancia para la causa, con el logro final de desbaratamiento de un grupo dedicado a delinquir contra las arcas del Estado.





## *Poder Judicial de la Nación*

En este sentido, sin ánimo de fragmentar el suceso considerado como una unidad, sino más bien, de reconstruirlo desde sus inicios con la solidez probatoria alcanzada en este proceso, se irán identificando circunstancias de tiempo, modo y lugar fijadas en el hecho atribuido a los imputados, con la evidencia puntual y principal que las respalda.

Así, la denunciante afirmó haber concurrido los primeros días de enero de 2019 a las oficinas de AFIP (hoy ARCA) en compañía del imputado Cupper. Efectivamente, se secuestró del domicilio de Cupper el comprobante original del turno asignado por dicha entidad a Hurtado para asistir con fecha 14 de enero de 2019, a las 11:00 hs., a las oficinas de ARCA ubicadas en Bv. San Juan 373, de esta ciudad de Córdoba. Sin embargo, este documento no sólo acredita su compañía, sino la tenencia y modificación de la clave fiscal por parte de Cupper. Pues se advierte a simple vista en el mismo documento encontrado en poder del acusado, una clave genérica, escrita a puño y letra, de las que inicialmente son asignadas por el empleado de ARCA que atiende el trámite de solicitud de clave fiscal, tachada y luego, debajo de la misma la inscripción: "Ricardo5766".

Al parecer, ese mismo día, comenzaron las operatorias de alteraciones dolosas de registros de la contribuyente.

El informe técnico presentado por el testigo Córscico, incluye en el cuerpo anexo (fs. 118) los datos o padrón de AFIP (ARCA) de la Sra. Sandra Mónica Hurtado Arango que confirman su condición de monotributista hasta el día 14/1/2019, fecha en la que fue dada de alta en IVA, Impuesto a las Ganancias y en el Régimen Nacional de Autónomos, con registro de nuevas actividades de servicios empresariales y venta al por menor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos.

Al día siguiente, nuevamente se ingresó a su base de datos y actualizaron su dirección de e-mail y su teléfono. Claramente, ambos respondían a la organización delictiva, pues se registró que el correo electrónico [hurtadosandra654@gmail.com](mailto:hurtadosandra654@gmail.com) con un teléfono de contacto

USO OFICIAL





perteneciente a Cupper (351 5123798). De hecho, dicha línea fue objeto de intervención telefónica en esta causa (fs. 171).

Los cambios registrados ambos días, fueron efectuados de manera remota, con conexión a internet, identificando una misma dirección de IP. Concretamente, la IP 201.231.65.28, que es una de las que el imputado Sánchez utilizaba para facturar sus honorarios profesionales.

Los aportes coordinados en la ejecución del hecho aquí descripto, aparecen revelados en las pruebas halladas. Para mencionar una, en la vivienda del Sr. Cupper también se secuestró el original del F855 de solicitud de autorización para emitir comprobantes tipo A, correspondiente a Hurtado Arango Sandra Mónica, relativos a operaciones de sujetos inscriptos en IVA con otros inscriptos en IVA, presentado el día 15/1/2019 y una fotocopia del DNI de la Sra. Hurtado.

Con fecha 1/3/2019, según surge de los padrones de ARCA, se añadió electrónicamente una nueva actividad a la Sra. Hurtado, referida a “servicios de publicidad”. La IP que impactó en la realización de este trámite, vía internet, fue la identificada con el número 190.17.36.83

Los días 18/3/2019 y 27/3/2019 se actualizaron nuevamente las actividades declaradas, accediendo al sistema registral de la contribuyente con su clave fiscal y utilizando la conexión de Internet de IP 181.88.188.218 y 190.17.36.83 respectivamente. La primera, otra vez, se encuentra mencionada en el informe de Córscico, como vinculada a la facturación personal de Sanchez.

Durante este tiempo, es decir desde enero a marzo de 2019, los registros de ARCA dan cuenta que fueron emitidas 39 facturas electrónicas “A”, con conceptos variados y disímiles entre sí, a nombre de la Sra. Hurtado por un monto de \$3.341.466, tal como ella misma había denunciado. Resulta que la conexión de Internet desde la cual se emitieron esos comprobantes es la IP 181.88.168.218, antes mencionada.

La tesis acusatoria sobre la coautoría del Sánchez en este hecho reprochado se robustece con el resultado del allanamiento en las oficinas de la Procuración del Tesoro de la Provincia, pues, dentro del escritorio que él ocupaba, en un espacio exclusivo en relación con sus consortes de causa, se





## *Poder Judicial de la Nación*

encontró el ya mencionado listado de contribuyentes apócrifos con el título de “anteriores desafectados” donde figuraban los datos de Sandra Hurtado con la clave anotada “Ricardo766”. La que, a su vez, coincide con la apuntada por Cupper en una conversación por whats app, cuya captura de pantalla fue aportada por la denunciante el 23 de mayo de 2019 (fs. 6).

En la misma línea valorativa, los archivos extraídos de un pendrive secuestrado en el domicilio de calle Roque Suárez, lugar de residencia del imputado Sánchez, en cuyo interior, una carpeta denominada “Raúl y sus chicos” - Subcarpeta “A Activos” - Subcarpeta “NO USAR” - Subcarpeta “Hurtado Arango” y dentro de esa subcarpeta archivos que contienen las constancias de los trámites realizados ante AFIP a nombre de la Sra. Hurtado el 14-1-2019 de baja en el régimen de monotributo, alta en el IVA y en Impuesto a las Ganancias, registración como dedicada a las actividades de venta al por menor de instrumental médico, odontológico y artículos ortopédicos y de servicios empresariales n.c.p.

Vale decir que, el informe elaborado por el Cr. Córscico dejó debida constancia de estos archivos y se han impreso copias a Fs. 121 a 127 LD copias de un muestreo de los mismos.

Por otra parte, la valoración minuciosa de la parte querellante en sus alegatos en relación con los mensajes de whatsapp extraídos de los equipos de telefonía celular secuestrados en autos, debidamente interrelacionados permitieron comprobar de manera directa la intervención del coimputado Molina en la alteración dolosa de los registros fiscales relativos a Hurtado, en el carácter de coautor.

En efecto, los mensajes registrados en el chat de whatsapp de las líneas intervenidas en autos a los Sres. Molina y Cupper respectivamente, arrojaron conversaciones entre ellos, a partir del 1 de abril de 2019, en las que aluden a la Sra. Hurtado y a la utilización de su persona para emitir facturas. Desde el celular de Molina, se emitieron los siguientes mensajes con destino a Cupper: “Ya salió factura B Hurtado a tu correo ok (1/4/2019)”, cuando fue consultado por su dirección contestó “Luis de Azpeitia 2630 altura duarte quiros 2600

USO OFICIAL





(5/4/2019)". A su vez, el 2/5/2019 le preguntó a Cupper "Electrónica?" a lo que Ricardo respondió "Fact electrónica".

Por su parte, Cupper en varias oportunidades le preguntó a Molina si había enviado la factura a Hurtado. Incluso, por demás reveladora resulta la conversación ocurrida entre los mismos interlocutores el día 6/5/2019. Pues, Cupper le dijo a Molina "Hola buen dia le envias a hurtado la factura", que contestó "Acordate que es manual. Tenes que pasar a buscarla. Esta lo de Hurtado kiosco corro"

En los mensajes de whats app almacenados en ese chat también consta que a partir del 7/5/2019 el imputado Cupper transmitió a su consorte de causa, Molina, los problemas que Hurtado le había comunicado, sobre la imposibilidad de emitir la facturación que debía entregar para cobrar los servicios prestados como cuidadora de ancianos, reclamando a él "y el contador" que se ocupen de solucionarlo.

Concretamente los mensajes dicen: "Con hurtado estoy en problemas y no puede cobrar 🙄", Molina respondió: "Vere como hacemos". Ante ello, Cupper arremetió "Y no me digas que sabia x que hablamos de no ser como cesar y llevar mes a mes las presentaciones 🙄👉".

Contestación que, desde ya, no se compadece con la sumisión denunciada por el letrado de Cupper para sustentar un estado de necesidad disculpante. Incluso, intentó aleccionar a Molina en la mejor manera de llevar adelante la maniobra ilícita ante los inconvenientes suscitados con Hurtado. De hecho, Molina se excusó diciendo "Ricardo yo confío en el contador y le pago. No entiendo yo nada. Ni se facturar, Hoy hablo con el, Mañana le damos forma al tema".

Ese mismo día, Cupper reenvió mensajes que recibió de parte de Hurtado respecto a los problemas que tenía para facturar: "Hola buenos dias como estas ? Mira q aun no me depositan ? posee irregularidad con afip y debe solucionarlo para poder aceptar su factura. Y la factura debe ser electrónica no manual como me pasaron" y aclaró "Me envio hurtado". Molina contestó "Ok dejame ver que puedo hacer. Aunque ya se. PONER LA PLATA YO. Antes le pague monotributo. Ahora le tendré que pagar 14.000 Ya veré de donde saco."





## *Poder Judicial de la Nación*

Suerte pronto terminamos” Ante lo cual, Cupper contestó “Raul el conta no puede facturarle elec tronico b” y Molina dijo “Dejame ver amigo. Abril manual o electrónica?” Cupper: “Probo el conta fact b o c” y Molina respondió “No le permite electrónica B tampoco. Por eso imprimí manual”

En otro diálogo, del 30/5/2019, Cupper le comentó a Molina que también estaba teniendo problemas con Corporán, una evidente conocida de Hurtado: “Raul alli me llamo corporan que la llamo hurtado. Preguntando si habia hecho lo mismo que ella 🧐♂️” Molina, lejos de sorprenderse, manifestó “Uhghhh”. Inconvenientes similares tuvieron con otro de los implicados, Ibarra Trucco. El 3/6/2019 Ricardo le comunicó a Molina que “Ok alli trucco tambien quiere hablar comigo x afip estuvo en bs as y no se que quizo hacer y no pudo 🧐♂️.” A lo que Raúl Molina contestó “Tranquilo para mi no hizo nada de lo que te dijo. Te quiere apurar.”

Por lo demás, cabe recordar que Hurtado expresó en su declaración que cuando pidió explicaciones al mail donde le remitían las facturas, Molina dijo que no tenía nada que ver y que alguna vez facilitó su dirección de correo electrónico al Sr. Cupper para que éste le envíe una factura, sin conocer nada de su CUIT ni de su empresa.

Tal como reveló la denunciante, el imputado Molina se desentendió de sus reclamos, intentado sustraerse de eventuales consecuencias que pudieran implicarlo en un delito. Sin embargo, su mala intención quedó registrada en los mensajes resguardados en el teléfono de Cupper, secuestrado en su domicilio.

Véase, el 16/5/2019, Cupper recibió un mensaje del imputado Molina que le escribió “Ricardo Hurtado me mando un mail diciendo que me presto Cuit para generar una empresa. Me reclama la plata de Asistencia local. Me dice que hasta hoy nadie le dio nada. Le respondí que no se nada del tema y que una vez te preste el mail para enviarle una factura. Solo eso. Por favor despegame del tema. Porque me dice eso del cuit si no tiene que saber que existo.” Ante ello, Ricardo respondió: “Uuhhhhhg te dije que estaba loca x lo de la facturación. Dice que si no va a poder seguir facturando no hay plata que le sirva. Yo me estoy borrando no le contesto llamadas ni mensajes”

USO OFICIAL





El 28/5/2019 “Raul que paso con hurtado alli me llama x que le dije que se lo solucionaba.” Molina le comentó que en un rato se juntaba con Sánchez “Ahora en un rato me junto con el contador”.

Con fecha 01/06/2019 Ricardo le envía un mensaje a Molina “Hola raul disculpa aca me pregunta hurtado cuando que dia irian con el abogado afip” Raúl contestó “Lo sabré esta semana Ricardo. Te aviso ok”

Al otro día, quien tomó la iniciativa fue Molina, evidentemente preocupado, y dijo “Ricardo lo primero que yo quisiera ver es una copia de la presentación que está chica hizo en tribunales federales. Pedile eso urgente porfa. Gracias. Mañana a las 9 en la oficina nos vemos. Fijate tener ese papel porfa” Otro dato que aporta luz a las imputaciones, es sobre la convocatoria de Molina a Cupper “en la oficina”, de calle Corro, donde los tres recurrían como centro principal de operaciones del grupo delictivo.

Otro de los signos claros de desapego a la norma que mostraron los imputados en esta causa, tuvo que ver con conversaciones entre Cupper y Molina después de saber la iniciación de la causa penal por denuncia de Hurtado. En ellas, tal como apreció la Dra. Diez, se vislumbra como intentan manipular nuevamente a Hurtado, con dinero y otras promesas para que entregue ilegítimamente su clave fiscal y operar a través de su perfil tributario. Así, el 12/6/2019, Cupper mencionó “Me estoy juntando con hurtado ahora que no tiene un peso que no puede cobrar” a lo que Molina le contestó “Anda a la oficina a las 13.30 y te doy plata.”.

Horas más tarde, le consultó a Cupper: “Tenes la nueva clave de Hurtado?” pero Ricardo le contestó que “No. No me da bola”.

Molina insistente con el tema dijo “Trato de llamar yo. Dame un rato” y Cupper le aconsejó “Comentale lo que te dije de una pyme”.

El 19/6/2019 Molina le escribió a Cupper “Ricardo fijate si tenes el número de requerimiento de Hurtado que me lo pide el contador. Fijate todo lo que puedas tener de Hurtado porfa.”. Ante ese requerimiento, el imputado Cupper le dijo “Donde. No se como entrar”. Entonces, Raúl le aclaró “Que puedas tener vos o ella”. Cupper responde “Alli me fijo en los papeles que





## *Poder Judicial de la Nación*

El 22/06/2019 Molina insistió “Encontraste algún papel de Hurtado???” y cuatro días después “Aprovecha buscame requerimientos de Hurtado”. El 27/06/2019 escribió “Ok mañana te veo por lo de Hurtado ok”. Sin embargo, Ricardo contestó “Ayer la vi espero poder frenarla. Le salta que esta bloqueada x no confiable”. Molina contestó: “Diosssssss!!!!”

Al día siguiente, Molina se comunicó para decirle “Ricardo podes pasar por la oficina a las 13 te doy dinero para Hurtado”.

Concordantemente, con el mensaje de whatsapp mencionado, a fojas 90 de autos obra transcripta una conversación telefónica entre Raúl Molina y Ricardo Cupper realizada desde el celular de éste último (3515123798) el día 28/06/2019 en la que dicen: “Raúl: bueno ahí te dejé tres mil (3000) pesos en un sobre para que le des a HURTADO Ricardo: yo mañana te digo que me dijo esta chica boludo y ahí la bosta esa...la bosta esa de la Corporan ahí me mando mensaje que ya necesita sino el lunes va a ir...te digo ya no se para donde correr, no puedo ser tan mala leche culiau”

Al ejercer su defensa material, el imputado Sánchez dijo no conocer a la Sra. Hurtado y que sólo sabe de ella lo que consta en autos por haber leído el expediente. Sin embargo, la prueba lo contradice. En su pendrive personal se encontró una carpeta titulada “Raúl y sus chicos”, y dentro de ella, una subcarpeta llamada “Hurtado Arango” que contenía los trámites realizados a su nombre (fs. 121 a 127).

En definitiva, como puede apreciarse, se ha acreditado cabalmente los cambios en el registro fiscal de la Sandra Mónica Hurtado Arango a partir del 14/01/2019 en relación con su clave fiscal, condición tributaria, impuestos inscriptos, actividades declaradas, teléfono de contacto, dirección de mail registrada, y facturación emitida.

Para la ejecución material de esas maniobras, Cupper se apropió indebidamente de la clave fiscal original, la cambió junto a Sánchez y Molina, para realizar las modificaciones respectivas en la base de datos de ARCA que resultarían redituables a partir de la utilización de su perfil, de manera dolosa, para la generación de facturación apócrifa que era comercializada ilegalmente.

USO OFICIAL





Cupper era quien en la mayoría de los casos se contactaba con Hurtado, para hacerse de documentación personal necesaria, pagarle lo prometido y entregarle las facturas que le emitían para cobrar su sueldo. Dado que al haber transferido la clave fiscal a la organización, había perdido el dominio de su perfil tributario, y de hecho, desconocía cabalmente, lo que los imputados estaban alterando dolosamente.

Molina, puntualmente, entregaba a Cupper los fondos necesarios para pagar a la denunciante las sumas prometidas a cambio de la entrega de su clave fiscal, confeccionaba y entregaba las facturas manuales, remitía por mail las facturas electrónicas y coordinaba con Sanchez las cuestiones de índole técnicas contables sobre todo ante inconvenientes planteados por Hurtado. Principalmente, aunque no con carácter excluyente, el acusado Sánchez, se ocupaba de ingresar a los sistemas de AFIP, modificar la condición fiscal de la denunciante y emitir comprobantes de ventas y prestaciones de servicios falaces a su nombre.

Para culminar, debo referirme al cuestionamiento introducido por la defensa de Cupper en orden a la ausencia de referencia exacta de la fecha en la que se había iniciado la asociación ilícita fiscal, argumentando que ello, privó a su asistido de una defensa técnica eficaz.

Concretamente, el Dr. Schonfeld se quejó de la descripción efectuada en el hecho primero “desde fecha no determinada con exactitud, pero anterior al 8 de octubre del 2019”, dado que, a su criterio, le impidió verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se habría generado el acuerdo endilgado a su defendido.

En ese sentido mencionó que la nulidad, específicamente por indeterminación ocurrió ante la flagrante violación de la inviolabilidad de la defensa en juicio, de la paridad de armas y de las normas que informan el debido proceso.

Luego, dentro del marco de la indeterminación denunciada, entendía posible que el eventual acuerdo ilícito haya ocurrido con una fecha posterior a la supuesta realización de la alteración dolosa de registros achacada en el

segundo hecho.





## *Poder Judicial de la Nación*

USO OFICIAL

Resumida la posición de la defensa de Cupper en relación con la circunscripción de los hechos motivos de acusación, debo simplemente decir que existió desde la etapa instructoria una descripción suficiente de los sucesos materiales endilgados a los acusados, coherente a su vez, con lo requerido en la configuración fáctica de cada una de las figuras en las que se encuadraron sus conductas ilícitas.

En este sentido, como elemento esencial al derecho de defensa garantizado constitucionalmente se impone al individuo un actuar concreto y delimitado, y los efectos materiales colectados que sustentan la imputación. Ello interesa por cuanto significa poner al imputado en pleno conocimiento del hecho objeto del proceso, para que pueda contestarlo eficazmente y se integra con las pruebas existentes hasta ese momento, en la medida que oficiaba como soporte del escenario fáctico sobre el cual iba a girar el debate.

En función de ello, los alegatos pronunciados por el Fiscal y la Querella, como actos procesales continentes de su potestad acusatoria materializaron una descripción clara, precisa y circunstanciada de los hechos atribuidos, que a su vez se ha mantenido inalterable a lo largo de todo el proceso.

La carencia de una fecha precisa de inicio de la acción de asociarse ilícitamente, en la medida que las probanzas obrantes en la causa demarcan suficientemente ese hecho delictivo y permiten ubicar al segundo suceso consumado, dentro del mismo espacio temporal del primero, como uno de los ilícitos fiscales para los que se reunieron los acusados, me releva de mayores comentarios al respecto.

Lo que aparece trascendental, desde el punto de vista constitucional, es que el imputado y su abogado defensor estuvieron en la posibilidad concreta de conocer los hechos y las pruebas, independientemente del valor que cada una de las partes asigne a esos datos probatorios en particular.

Bajo las premisas enunciadas, encuentro certeza positiva en orden a la confirmación de las circunstancias fácticas, debidamente circunstanciadas en las piezas acusatorias, cuanto de la participación responsable de los imputados en los hechos endilgados.





### **A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA DIGO:**

La valoración del material probatorio ha permitido confirmar, de manera concluyente, la hipótesis de la acusación. En efecto, en un lapso temporal que se remonta a una fecha anterior al 8 de octubre de 2019, los imputados Raúl Horacio Molina, Rubén Daniel Sánchez y Ricardo Esteban Cupper conformaron una asociación ilícita fiscal, con el fin de cometer de manera habitual delitos previstos en el Régimen Penal Tributario ubicado en el Título IX (artículo 279) de la Ley 27.430.

Esta aseveración se sustenta en un caudal probatorio abundante y certero que indica un modus operandi delictivo, consistente en la obtención ilegítima de claves fiscales de terceros, la subsiguiente alteración dolosa de sus registros ante la AFIP-ARCA, para emitir y comercializar facturas apócrifas a su nombre. Dichos comprobantes falsos eran computados como gastos y créditos fiscales de clientes que pretendían aminorar, de manera irregular, su carga tributaria a cambio de dinero que ingresaba a la organización.

Claro que, a fin de eludir los controles fiscales, se simulaban la situación contable de los contribuyentes utilizados como "usinas de comprobantes apócrifos".

En este sentido, la organización ilícita se ocupaba de dar apariencia de realidad a operaciones ficticias para continuar recibiendo el beneficio económico que les dejaba la comercialización de comprobantes falsos.

El accionar delictivo de la organización, integrada por Cupper, Molina y Sánchez, perjudicó a la hacienda pública y afectó a los particulares cuyas claves fiscales fueron obtenidas ilícitamente, quienes perdieron el control sobre sus registros ante la AFIP-ARCA, sufrieron sanciones administrativas y la incorporación a la base de contribuyentes apócrifos del Fisco Nacional.

Todas las consideraciones fácticas precedentes, debidamente sustentadas en las pruebas valoradas en autos, revelan sin mayores complicaciones los presupuestos típicos exigidos por el delito de asociación ilícita fiscal, reprimido por el artículo 15, inciso "c" del Régimen Penal Tributario actual (Ley 27.430).





## *Poder Judicial de la Nación*

Para caracterizar, someramente, la figura bajo análisis retomo algunas referencias generales que entiendo importante destacar en este caso.

Se castiga penalmente la conducta consiente de tomar parte de una asociación, habitualmente destinada a cometer cualquiera de los delitos del régimen especial tributario.

En este aspecto, la doctrina enseña que la acción de “formare parte” precisada en el tipo penal, hace requirente un aporte activo a la vida de la agrupación mediante actos que contribuyan a su funcionamiento, entendiéndose por ello que no está penada la mera pertenencia formal a la asociación. Es decir que, a la congregación de sujetos se adiciona un plus con algún aporte positivo (Riquert Marcelo A., “Régimen Penal Tributario y Previsional”, Ed. Hammurabi”, Buenos Aires 2012, págs.261 y sgtes).

Por lo demás, la asociación, en su componente humano, debe estar constituida por un mínimo de integrantes (“tres o más personas”), con preordenación del concurso de todos para cometerlo. El tipo subjetivo expresado en el término “a sabiendas” resulta indicador de dolo directo, esto es, conocimiento de que se forma parte de una organización delictiva tributaria como así también la voluntad de pertenecer a la misma.

En su redacción, la norma alude a la habitualidad en la comisión de delitos para los que se conformó la asociación delictiva. En este punto, dada la discusión generada en la doctrina y jurisprudencia, en cuanto a su alcance y diferenciación con la “permanencia”, reitero el criterio esbozado en el precedente “Cardoso María Pía y otros s/Asociación ilícita fiscal” (Expte. N° 53010068/2007/TO1), de fecha 8/10/2020.

En aquella oportunidad, este Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, con una integración colegiada, siguiendo a Riquert, determinó que “( ... ) si la asociación tiene como finalidad cometer numerosos delitos y por ello permanece en el tiempo, éste sería el contexto dentro del cual debe comprenderse la expresión “habitualmente”. Es decir, una interpretación operativa de la norma considera que para caracterizar el propósito de la

USO OFICIAL





organización, “habitualmente” implica permanecer en el tiempo y la reiteración o repetición de actos delictivos”.

Pero además, la acreditación de este componente normativo resulta indicador de la presencia de una asociación ilícita típica, que descarta una participación penal múltiple en hechos ilícitos determinados. En este sentido se ha dicho que “(...) La convergencia de voluntades hacia la permanencia de la asociación es lo que distingue a la asociación ilícita de la convergencia transitoria –referida a uno o más hechos específicos- propia de la participación. No se trata de una permanencia absoluta (“sine die” o con plazos determinados) sino relativa, exigida por la pluralidad delictiva que es el objetivo de la asociación...” (Rapisardi, Gustavo, “La figura de Asociación Ilícita y su aplicación en el ámbito de los delitos tributarios” en: Doctrina Penal Tributaria y Económica, Buenos Aires, Errepar, Volumen 4, pag.167).

Por lo demás, este delito no requiere siquiera comienzo de ejecución de otros delitos tributarios (Catania, Alejandro, “Régimen Penal Tributario. Estudio sobre la ley 24.769 ”, Editores del Puerto, Buenos Aires, p. 225). Se trata en consecuencia de un tipo de peligro abstracto que se consuma cuando se materializa un acuerdo delictivo entre sus integrantes. Por ello, puede la figura estar presente aun cuando no haya podido la asociación llegar a consumar la realización de ilícitos fiscales.

En el mismo sentido, Sofía B. Juárez en “Asociación Ilícita fiscal. Una reflexión de aspectos críticos a la luz de la ley 27.430”, en Revista de Derecho Penal Económico y Compliance, Ed. Rubinzal Culzoni) afirma que se trata de una figura penal que reprime en forma autónoma actos preparatorios de los delitos que tiene por objeto la asociación criminal, tales delitos son exclusivamente los del régimen penal tributario. Añade que por ello, resulta indiferente en la configuración del delito de asociación ilícita fiscal que tales delitos hayan sido efectivamente cometidos o hayan tenido comienzo de ejecución.

Esto tiene directa incidencia, como se verá más adelante, en la forma de correlacionar las conductas ilícitas que llevaron a cabo los acusados.





## *Poder Judicial de la Nación*

En definitiva, sobre la base de este marco conceptual, Cupper, Sanchez y Molina consumaron el delito de asociación ilícita fiscal al formar parte de una estructura ilícita cuyo objeto de reunión era cometer, habitualmente y no de manera aislada, delitos indeterminados de naturaleza tributaria.

En este sentido, se verificó que el acuerdo no se limitaba a cometer puntuales alteraciones dolosas de registros o facilitar las evasiones de los concretos clientes a través de facturación apócrifa a nombre de esas usinas. Sino que, se congregaron y coordinaron la asunción individual de funciones en orden a concretar los resultados planificados, con vocación de continuidad temporal. Con ello, los elementos cognitivos y volitivos del dolo se encuentran debidamente resueltos.

En efecto, el contenido de las comunicaciones intervenidas y extraídas dan cuenta que el imputado Ricardo Cupper sabía perfectamente el alcance de sus acciones y las del grupo. Que decidió voluntariamente asumir cada una de ellas. Por lo tanto, no se acreditaron razones valederas que lo justifiquen la conducta y excluyan su culpabilidad.

Dicho de otra manera, Cupper, conocía perfectamente que estaba integrando una asociación ilícita de personas organizadas, con divisiones de roles y asignación de funciones, dirigida a obtener ganancias mediante la comisión habitual de delitos tributarios. Con ello, desacredito la estrategia desencriminante sustentada en que solo tenía vinculación personal con Molina, con el motivo reducido de gestionar préstamos.

Así, el alegado pero en ningún caso comprobado aprovechamiento del coimputado Molina sobre Cupper, por un aparente estado de necesidad que le haya impedido actuar de otra manera, fueron extremos invocados por la defensa técnica que en nada se compadecen con la realidad mostrada en las pruebas obrantes en la causa, y por tanto, resultan absolutamente injustificadas para configurar, razonablemente, una causal disculpante.

En cuanto a los aportes efectivos a la asociación ilícita, que exteriorizaron la voluntad concreta de cada uno de los implicados de pertenecer a aquella, ha quedado certeramente comprobado que Cupper tuvo

USO OFICIAL





una intervención penalmente relevante en el hecho primero. Se encargaba, principalmente, de reclutar a personas para obtener de ellas, fraudulentamente, su clave fiscal, luego cambiarla y ponerla a disposición de la organización, con el objetivo claro que sirva de usina de facturación apócrifa y otros designios delictivos. Atendía los reclamos de los contribuyentes afectados, que en algunos casos redirigía a los otros miembros, y abonaba las comisiones prometidas.

Por su parte, Sánchez se ocupaba de emitir los comprobantes falsos que eran solicitados por los clientes de la organización, de llevar un registro de los mismos, acomodar la contabilidad y advertir inconvenientes en las personas utilizadas como usinas para evitar que fueran detectadas por el organismo recaudatorio, todo en coordinación con el resto de los miembros de la banda.

Tal como ha quedado acreditado, dadas su acreditación profesional, era quien asesoraba y coordinaba la realización de los trámites necesarios para la constitución de sociedades de acciones simplificadas que luego eran usadas por la organización.

Por su parte, el acusado Molina, tenía, mayormente, por función captar y atender a los clientes de la organización a quienes proveía de comprobantes falsos, recibir sus pedidos, entregarles las facturas solicitadas, acordar los precios por los servicios, manejar el circuito del dinero cobrado por la organización, ocupándose de entregar a Cupper las sumas de dinero acordadas a las personas reclutadas en concepto de comisiones, colaborar en la alteración de los registros fiscales de las personas reclutadas y en la emisión de los comprobantes falsos gestionados por la asociación.

Por lo dicho, y del análisis global de los elementos de prueba aportados en este caso, concluyo que las conductas desplegadas por los imputados encuadran jurídicamente en el delito de asociación ilícita fiscal, reprimido en el artículo 15, inciso "c" del régimen penal tributario establecido en la Ley 27.430.

Resuelto lo anterior debo expedirme sobre el encuadre jurídico que corresponde asignar al hecho segundo debidamente identificado en la acusación.





## *Poder Judicial de la Nación*

De acuerdo con lo comprobado en la presente causa, Raúl Horacio Molina, Rubén Daniel Sánchez y Ricardo Esteban Cupper, se valieron de la clave fiscal de la contribuyente Sandra Mónica Hurtado Arango, para modificar sus datos fiscales declarados ante ARCA, con el objeto de disimular ardidosamente su verdadera situación fiscal.

En este marco, tal como lo propuso la parte acusadora, las conductas de los imputados merece reproche penal, y por tanto, encuadran en las previsiones establecidas en la figura del art. 11 inc. "a" del Régimen Penal Tributario ubicado en el Título IX (artículo 279) de la ley 27.430.

A lo largo del proceso, nos hemos visto asistidos por profesionales de Ciencias Económicas, que analizaron información de tipo financiera y tributaria obrante en registros públicos y privados, respaldada, a su vez, en documentos aportados en soportes físicos como informáticos, y sus conclusiones fundadas y concatenadas sobre a las maniobras delictivas de los aquí acusados, fueron muy valiosas para la investigación. En efecto, la necesidad de contar con dicha asistencia técnica, obedece ni más ni menos a las características que suponen los delitos bajo tratamiento.

En el caso de la adulteración dolosa de registros fiscales, esos aportes extrapenales, resultaron imprescindibles para precisar los alcances de los elementos que la componen la norma que reprime penalmente las conductas en cuestión.

Sobre todo, si se tiene en cuenta que se resguarda la autenticidad de información proporcionada por los contribuyentes, no solo en función de la autodeterminación de los impuestos sino esencialmente para preservar el efectivo ejercicio de la gestión tributaria y la fiscalización por parte de las autoridades. Hacerlo posible, requiere de la presunción sobre la identidad, veracidad y real correspondencia de esos datos con la realidad económica de quien los aporta.

Por las razones apuntadas, la norma penal protege la inalterabilidad de los registros del Fisco al mismo tiempo que tutela la hacienda pública, como

USO OFICIAL





actividad financiera dinámica del Estado tendiente a obtener recursos para solventar los gastos públicos que demanda una Nación.

Otro aspecto a considerar es que la informatización de los registros fiscales, modernizó los sistemas de recolección e incorporación de esos datos, reemplazando casi por completo su carga y respaldo físico, por el digital.

En este sentido, los beneficios del avance tecnológico implicado, no resultan aquí discutibles. No obstante, la administración tributaria gestionada on-line, a través del portal oficial de ARCA, sin dudas, plantea un nuevo escenario para actividades delictivas potencialmente lesivas, precisamente, de la veracidad de la información fiscal, que puede generar un compromiso serio en el sistema tributario argentino.

En definitiva, la convergencia entre el derecho penal tributario y las nuevas tecnologías, de cara a la figura aplicable de alteración fraudulenta de registros y soportes informáticos, es un fenómeno que ha adquirido particular relevancia debido a la digitalización de la relación entre contribuyentes y el fisco.

En lo particular, este caso revela aquella nueva dimensión del delito, cuya modalidad de consumación remota ha sido utilizada por los acusados, mayormente, para la manipulación fraudulenta de información fiscal.

Así, el acceso ilegítimo a las bases de datos de Hurtado, obteniendo y luego modificando su clave fiscal, permitió la realizar las conductas previstas en la norma que supusieron alteraciones, supresiones y modificaciones no autorizadas por la contribuyente, de manera remota.

Vale decir que, el art. 11 del Régimen Penal Tributario actual, brinda un elenco taxativo de acciones prohibidas (sustraer, suprimir, ocultar, adulterar, modificar e inutilizar), sin imposiciones precisas sobre las condiciones de ejecución. Lo relevante para su consumación, resulta ser que, la concreción de cualquiera de ellas recaiga sobre registros o soportes, sean documentales o informáticos, vinculados con obligaciones tributarias y/o previsionales de un contribuyente, almacenados en bases del fisco.

En el marco de las discusiones suscitadas en la doctrina referidas a la delimitación precisa del objeto de protección de este delito, que distinguen el





## *Poder Judicial de la Nación*

dato aislado del registro documental o informático cuya alteración penaliza la ley, adscribo a la postura que entiende que los datos ingresados a través de la clave fiscal conforman el registro del Estado empleado para gestionar sus tributos.

En este aspecto, en un interesante trabajo académico, Vanesa Bibiana Bresciani explica que “( ... ) cargar o transferir electrónicamente un dato ilegítimamente equivale a alterar el registro, pues el registro está compuesto por los datos que se procesan y utilizan para determinar la situación fiscal de los contribuyentes ( ... ) Los datos individuales pueden entenderse como unidades de información aportadas por el contribuyente (por ejemplo, el monto de un ingreso o una transacción), mientras que los registros son la estructura organizada donde esos datos se almacenan, procesan y gestionan. Los datos se vuelven significativos cuando se estructuran como registros almacenados en las bases del organismo. Esos datos organizados en los registros es lo que permite que puedan ser procesados, verificados y almacenados. En este sentido, cualquier modificación de los datos afectará al registro en el que están contenidos, alterando la integridad de la información fiscal en su conjunto. La transmisión de datos habilitada a través de la interfaz no se limita a modificar datos individuales aislados. Al transmitirse nuevos datos o modificar los existentes, se altera el registro en su conjunto, porque la información contenida en ese registro (compuesto por los diferentes datos) cambia” (Bresciani, Vanesa Bibiana “Alteración dolosa de registros y soportes del fisco en la era digital: Desafíos interpretativos y posibles soluciones ante el uso ilegítimo de claves fiscales de contribuyentes”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, octubre de 2024, <https://dspaceapi.live.udesa.edu.ar/server/api/core/bitstreams/60ba1903-e0e0-4ecb-9fa5-bee6af506698/content>, última consulta del 24/9/2025 a las 14 hs., p. 21/22).

Visto de ese modo: “La situación fiscal refiere a información clave de los obligados que hace a su caracterización como sujeto tributario en la relación fisco contribuyente: alude a su condición frente a los impuestos o regímenes

USO OFICIAL





impositivos, actividades económicas en las que se halle inscripto, fechas de inicio de actividades, obligaciones fiscales, sus cumplimientos e incumplimientos, domicilio fiscal, su calidad de empleador-empleado, su situación de riesgo, estado de su clave única de identificación tributaria, su facturación, etc.

En ese contexto, no debe reducirse a pensar que la real situación fiscal de un contribuyente se puede disimular sólo exteriorizando falsamente obligaciones impositivas o previsionales en declaraciones juradas, sino que también la ocultación del real estatus del contribuyente puede darse declarando altas o bajas en determinadas actividades económicas, modificándose la condición frente a los impuestos e incluso alterando su domicilio fiscal.”

Bresciani, Vanesa Bibiana , op. cit. p. 42/43.

Bajo las precisiones anteriores, estoy en condiciones de aseverar que los acusados Sánchez, Molina y Cupper manipularon dolosamente los registros fiscales de la Sra. Sandra Mónica Hurtado Arango.

En el marco de la asociación ilícita que conformaron para realizar este tipo de maniobras delictivas, se valieron de la clave fiscal blanqueada por Hurtado en compañía de Cupper, obtenida de manera fraudulenta o por abuso de confianza. Una vez dentro del perfil de Hurtado, en el plataforma web de la AFIP, cambiaron su clave inicial y con dominio absoluto de su portal, utilizaron servicios informáticos habilitados para alterar sus datos, como si hubieran sido efectuadas legítimamente por la propia contribuyente.

Las acciones detectadas a partir del 14 de enero de 2019 en el perfil tributario de Hurtado, refieren a la inutilización y supresión de la clave fiscal, alteración de datos personales y fiscales -se modificaron los registros de contacto telefónico y correo electrónico, sustituyendo los datos de la víctima por el número de celular del Sr. Cupper-, modificación del estado fiscal -se dio de baja a su condición de monotributista y se dio de alta en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el Impuesto a las Ganancias y en el Régimen Nacional de Autónomos-, se habilitaron nuevos puntos de venta a nombre de la Sra. Hurtado y se emitieron facturas electrónicas falsas a nombre de la Sra.





## *Poder Judicial de la Nación*

Hurtado, documentando ventas y prestaciones de servicios que ella nunca realizó.

Con lo cual, las bases de datos fiscales de ARCA, en sus soportes informáticos, resultaron alteradas con supresiones y modificaciones realizadas por los acusados que tuvieron una incidencia directa en la determinación de las obligaciones tributarias y previsionales tanto de la Sra. Hurtado como de los terceros a favor de quienes se emitieron los comprobantes falsos.

Dichas transacciones informáticas, realizadas como si hubiesen sido efectuadas por la propia contribuyente, demuestran el control absoluto que los imputados ejercieron sobre su perfil, utilizando los servicios habilitados para alterar fraudulentamente su situación fiscal.

En este sentido, el tipo subjetivo de la figura analizada exige la concurrencia de dolo directo y de un específico propósito que debe perseguirse con la acción cometida, pues la alteración cometida debe perseguir la finalidad de “disimular la real situación fiscal de un obligado”, ya sea que tal modificación procure una reducción de la carga tributaria o previsional de ese obligado o bien que persiga incrementar o abultar sus obligaciones.

Pues bien, las pruebas a las que se ha hecho referencia anteriormente acreditan que los imputados tenían conocimiento pleno acerca de la significancia de las acciones llevadas a cabo y sus consecuencias, con real intención de cometerlas, fingiendo una situación tributaria de Hurtado evidentemente inexistente solo para beneficiarse económicamente del comercio clandestino de las facturas emitidas en su nombre.

Así es posible extraer el dolo exigido por el tipo subjetivo de la figura en cuestión, sin dificultad alguna de los documentos físicos e informáticos recolectados en la causa, los que relacionados con las conversaciones telefónicas analizadas dan por cierto el estado de conocimiento y designio que motivó las acciones que estaban llevando a cabo coordinadamente.

En el mismo sentido, la prueba reveló la verificación en autos del especial elemento subjetivo que perseguían los imputados, referente a que todas las alteraciones realizadas en las bases de datos informáticas del Fisco

USO OFICIAL





Nacional relativas a la Sandra Mónica Hurtado Arango fueron cumplidas para disimular su real situación fiscal, que no era otra que, la de una prestataria de servicios de acompañamiento a adultos, monotributista, sin capacidad económica ni material para dedicarse a múltiples actividades registradas ante ARCA, con ventas y prestaciones de servicios por montos millonarios en favor de terceros.

Los argumentos precedentes demuestran la concurrencia de todos los elementos del tipo objetivo de la figura de alteración dolosa de registros prevista en el art. 11 inc. "a" del Régimen Penal Tributario, previsto en la ley 27.430.

Las pruebas, suficientemente valoradas en la segunda cuestión, revelaron que los imputados, en consuno, dividieron roles en la ejecución material de este delito en particular y por tanto, coparticiparon responsablemente en este suceso, en condición de coautores (art. 45 del CP).

El segundo hecho consumado fue cometido dentro del marco de la existencia de la asociación ilícita que los mismos imputados habían conformado, precisamente, para la comisión de delitos incluidos en el régimen penal tributario.

Cabe reiterar que, tal como afirma la mayoría de la doctrina, la asociación ilícita es un delito permanente, que se verifica con el mero acuerdo entre sus miembros. En definitiva, lo que integra ese tipo penal, estrictamente, es la mera finalidad de cometer delitos indeterminados. Ahora bien, como ocurrió en este caso, la concreción de uno de esos delitos -alteración dolosa de registros- debe ser considerado, como un hecho independiente y por lo tanto concurre materialmente (art. 55 del Código Penal).

Por último, debo consignar que no se advierte respecto de los acusados la concurrencia de causas de justificación, ni que medie autorización legal proveniente del ordenamiento jurídico. Tampoco se verifica un estado de necesidad justificante, ni causa alguna de inculpabilidad que opere en su beneficio.

En definitiva, y por las razones dadas precedentemente, considero que

las conductas desplegadas por Ricardo Esteban Cupper, Rubén Daniel

Fecha de firma: 20/09/2023

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#39327179#473862580#20250929105128696



## *Poder Judicial de la Nación*

Sánchez y Raúl Horacio Molina se subsumen en los delitos de asociación ilícita fiscal -hecho primero- y alteración dolosa de registros -hecho segundo-, en concurso real, en calidad de coautores (arts. 15 inc. "c" y 11 del régimen penal tributario previsto en la ley 27.430; arts. 45 y 55 del Código Penal).

### **A LA CUARTA CUESTIÓN PLANTEADA, DIGO:**

Corresponde ahora analizar la individualización de la pena aplicable a cada uno de los imputados, conforme a las pautas previstas en los artículos 40 y 41 del Código Penal. Ellas, contienen aspectos objetivos y subjetivos, que contribuyen a agravar o atenuar la graduación de la pena.

En lo que respecta a los parámetros objetivos comunes a todos los imputados, corresponde ponderar como agravantes la naturaleza de los hechos investigados, los bienes jurídicos comprometidos y la magnitud del daño ocasionado. En efecto, se trata de delitos económicos de carácter pluriofensivo, que afectan simultáneamente la tranquilidad pública y la hacienda pública.

En cuanto a la extensión del perjuicio, del análisis efectuado por el Contador Córscico sobre los elementos secuestrados en autos, así como de su declaración testimonial rendida en el debate, se desprende que el detrimento económico ocasionado por la asociación ilícita fiscal investigada ascendió aproximadamente a \$120.000.000 en concepto de IVA y, como mínimo, a \$100.000.000 en concepto de Impuesto a las Ganancias.

Tal conclusión no se desvirtúa por la ausencia de un crecimiento patrimonial ostensiblemente acreditado en los imputados, puesto que, el mayor reproche penal radica en el serio perjuicio ocasionado a las arcas públicas. En otras palabras, dicho perjuicio impidió que el Estado dispusiera de los recursos necesarios para atender los gastos propios de la vida en sociedad. En este sentido, la valoración negativa de los hechos no exige una relación exacta entre el monto defraudado y las ganancias que los acusados efectivamente hubieran obtenido en el marco de los delitos económicos comprobados.

Por su parte, cabe destacar que la organización delictiva implementó diversas modalidades fraudulentas con el objeto de obtener un beneficio

USO OFICIAL





económico ilícito en detrimento del fisco. Entre ellas, se advierte la captación “gente humilde social y culturalmente”, personas con carencias, con escasa formación que, a cambio de falsas promesas o de la entrega de escasas sumas de dinero, accedían a dar sus datos personales y sus claves fiscales y bancarias; a través de los cuales, la organización simulaba operaciones comerciales inexistentes y generaba comprobantes apócrifos, destinados a respaldar transacciones ficticias.

En lo que respecta a los parámetros subjetivos, es decir, aquellos vinculados a la situación personal de cada imputado, corresponde considerar las siguientes circunstancias:

En relación con Ricardo Esteban Cupper, valoro como circunstancias agravantes que, al momento de los hechos, no atravesaba dificultades económicas ni se encontraba en situación de vulnerabilidad, sino que, por el contrario, contaba con suficiente experiencia comercial. Manifestó haber trabajado en diversas empresas desempeñándose en tareas administrativas y de cadetería, además de realizar gestiones independientes para distintos estudios y dedicarse a la venta de pinturas.

Todo ello permite concluir que la motivación que lo llevó a delinquir y a integrar una asociación ilícita obedeció a un desmedido afán de lucro.

Asimismo, pondero negativamente la actitud asumida frente a las personas captadas, ya que cuando éstas efectuaban reclamos de diversa índole -ya sea por incumplimiento en los pagos acordados o por dificultades tributarias, como la pérdida de la Asignación Universal por Hijo- y dejaban de resultarle funcionales a la organización, Cupper optaba por evitarlas y no responder sus llamados telefónicos. Es que, ese menosprecio puesto en evidencia hacia la situación de las personas reclutadas y las consecuencias negativas que éstas sufrirían a raíz de su accionar delictivo, son factores que no pueden ser dejados de lado al momento de mensurar la pena.

Por otro lado, en cuanto a las circunstancias atenuantes, considero la carencia de antecedentes penales registrables, que es jubilado y los problemas de salud que manifestó padecer, los cuales requieren un tratamiento médico

**específico que incluye medicación, rehabilitación y controles periódicos.**





## *Poder Judicial de la Nación*

En consecuencia, estimo justo y adecuado imponer a Ricardo Esteban Cupper, la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas (arts. 12, 29 inc. 3º, 40 y 41 del Código Penal, 403, 431 bis y 530 del CPPN.).

Con respecto a Raúl Horacio Molina, los parámetros considerados a los fines de la mensuración de la pena contemplan, como atenuantes, su carencia de antecedentes penales registrables, su condición de jubilado con ingresos mínimos y los problemas de salud referidos, tales como enfisema pulmonar, amnesia severa del sueño y litiasis renal, lo cual requeriría de intervención quirúrgica.

En cuanto a las circunstancias agravantes, adiciono su condición de profesional -licenciado en Ciencias Políticas y docente secundario-, lo cual le confería una especial formación académica que le permitía comprender con mayor claridad los alcances de su actuación, colocándolo además en una posición social de respeto.

A ello se suma el modo en que el imputado ejecutó los hechos que se le atribuyen, procurando borrar huellas y eludir todo rastro de su accionar ilícito, incluso requiriendo a Cupper que lo “despegara” del reclamo formulado por la Sra. Hurtado, con la finalidad de que no se conociera su intervención. Dichas circunstancias revelan que Molina actuó con fría premeditación para dificultar la comprobación de los delitos cometidos y resguardar su imagen social.

En consecuencia, considero justo imponerle la pena de cuatro (4) años de prisión, accesorias legales y costas (arts. 12, 29 inc. 3º, 40 y 41 del Código Penal; arts. 403, 431 bis y 530 del CPPN.).

Por su parte, en relación con Rubén Daniel Sánchez, corresponde valorar como atenuantes la ausencia de antecedentes penales y sus problemas de salud que refirió, entre ellos hipertensión, diabetes y afecciones cardíacas que derivaron en un infarto, la colocación de un stent y la necesidad de tratamientos y controles médicos permanentes.

Ahora bien, en lo que respecta a las circunstancias agravantes, destaco que el imputado, si bien de sus manifestaciones surge que en el año 1995 atravesó una situación difícil, tanto económica como familiar, a raíz del

USO OFICIAL





fallecimiento de su hija mayor y de las deudas contraídas con motivo de ello, lo cierto es que al momento de los hechos -más de veinte años- no se encontraba sumido en la miseria ni afrontaba serias dificultades económicas. En consecuencia, corresponde concluir válidamente que los motivos que lo impulsaron a delinquir estuvieron guiados primordialmente por un claro ánimo de lucro.

Asimismo, resulta especialmente gravosa su condición de contador público, esto es, un profesional con formación técnica específica en ciencias económicas y tributarias, que abusó de su conocimiento especializado para llevar a cabo las maniobras ilícitas que se le atribuyen. Este aspecto, analizado a la luz de lo previsto por el art. 15 inc. a) del Régimen Penal Tributario actual y el art. 20 bis inc. 3 del Código Penal, habilita la aplicación de la inhabilitación especial para ejercer la profesión de contador público, tal como lo reclamó el Fiscal General.

Tal sanción accesoria encuentra justificación en la necesidad de preservar el interés público y la confianza social en el correcto ejercicio de las profesiones, evitando que quien abusó de sus conocimientos técnicos con fines ilícitos pueda reincidir en un ámbito en el que ostenta ventajas indebidas frente a terceros.

En virtud de lo expuesto, corresponde imponer a Rubén Daniel Sánchez la pena de cuatro (4) años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de contador público por igual plazo, más las accesorias legales y costas (arts. 20 bis inc. 3, 29, 45 y 55 del Código Penal; y arts. 403 y 531 del CPPN).

Ahora bien, la defensa técnica del imputado Cupper solicitó, en forma subsidiaria, que, en caso de serle aplicada pena de prisión a su asistido, se declare la inconstitucional del mínimo de la escala penal prevista por el art. 15 inc. c) del régimen penal tributario actual, en sustancia, por resultar violatorio del principio de proporcionalidad.

En relación a esto, tras ponderar las circunstancias atenuantes y agravantes, calibré la medida del reproche de dichos imputados por encima del





## *Poder Judicial de la Nación*

mínimo legal establecido en la ley, por lo tanto, la pretensión de inconstitucionalidad devino abstracta, lo que así se habrá de declarar.

Por último, corresponde referirme a la reparación del daño solicitada por el Ministerio Público Fiscal en sus alegatos finales.

En este sentido, más allá de no compartir los argumentos expuestos por el Dr. Schonfeld en orden a sostener la inadmisibilidad o ineficacia procesal de dicha pretensión, pues el art. 29 del Código Penal habilita la reparación autónoma del daño y su prudente o discrecional fijación por parte del juez, considero necesario señalar que, en el caso en particular, los contribuyentes afectados entregaron voluntariamente sus claves fiscales a los imputados. Dichas claves, de naturaleza confidencial e intransferible, requieren un trámite personal y presencial para su blanqueamiento y fueron cedidas en algunos casos a cambio de falsas promesas o de la entrega de sumas de dinero.

Por lo tanto, la afectación que sufrieron, ya sea por verse impedidos de percibir beneficios económicos estatales o planes sociales o por la generación de deudas tributarias, entre otros efectos posibles, puede válidamente considerarse en este caso el resultado de acciones -brindar sus datos fiscales y personales- que podían advertirse irregulares desde el punto de vista administrativo, y por tanto, sus consecuencias, pasibles de prever por parte de los contribuyentes involucrados.

En el caso puntual de Argento y Grenethier, al igual que lo analizado por el fiscal en relación con Ibarra Truco, se trataron de víctimas indirectas de un delito de asociación ilícita fiscal, cuyo bien jurídico protegido es la hacienda pública.

Dicho esto, no comparto la posición adoptada por el Ministerio Público Fiscal en cuanto sostiene que estos contribuyentes, en razón de su extranjería y estado de vulnerabilidad, no podían comprender que entregar sus claves fiscales, como dato personal confidencial, a cambio de dinero o de un trabajo, suponía un acto irregular para el organismo tributario estatal.

Dejo aclarado que las personas reclutadas por la organización presentaban en común un bajo nivel socioeconómico y cultural, con escasa

USO OFICIAL





formación académica, lo cual, quizás dificultó su conocimiento en orden a cuál era el verdadero destino -ilícito- en el empleo de sus claves fiscales. Tal circunstancia, si bien las sustrae de una participación criminal en los hechos, no obstante, las excluye en mi parecer de la posibilidad de ser indemnizadas al menos en el marco de este proceso.

Para culminar y como derivación de lo anterior, no corresponde hacer lugar a la ampliación de medidas cautelares solicitadas para garantizar la pretensión resarcitoria que no tuvo acogida.

En virtud de ello, **RESUELVO:**

**1-** No hacer lugar al planteo de nulidad de la declaración testimonial de Sandra Mónica Hurtado, obrante a fs. 4, solicitada por los abogados defensores.

**2-** No hacer lugar a la nulidad de la declaración testimonial de Maximilano Juvenal Ibarra Trucco, brindada en la audiencia de debate, que fuera articulada por el abogado defensor de Cupper.

**3-** Condenar a **RICARDO ESTEBAN CUPPER**, ya filiado, como coautor del delito de asociación ilícita fiscal -hecho primero- y del delito de alteración dolosa de registros -hecho segundo-, en concurso real, a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, rechazando el planteo de inconstitucionalidad del mínimo de la pena solicitado por la defensa (arts. 15 inc. "c" y 11 del Régimen Penal Tributario previsto en la ley 27.430; arts. 12, 29 inc. c, 45 y 55 del Código Penal y arts. 403 y 531 del CPPN 11).

**4-** Condenar a **RUBÉN DANIEL SANCHEZ**, ya filiado, como coautor del delito de asociación ilícita fiscal -hecho primero- y del delito de alteración dolosa de registros -hecho segundo-, en concurso real, a la pena de cuatro años de prisión, cuatro años de inhabilitación especial para ejercer la profesión de contador público, accesorias legales y costas (arts. 15 inc. "c" y 11 del Régimen Penal Tributario previsto en la ley 27.430, arts. 12, 20 bis inc. 3, 29, 45 y 55 del Código Penal y arts. 403 y 531 del CPPN).





## *Poder Judicial de la Nación*

**5-** Condenar a **RAUL HORACIO MOLINA**, ya filiado, como coautor del delito de asociación ilícita fiscal -hecho primero- y del delito de alteración dolosa de registros -hecho segundo-, en concurso real, a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas (arts. 15 inc. "c" y 11 del régimen penal tributario previsto en la ley 27.430, arts. 12, 29, 45 y 55 del Código Penal y arts. 403 y 531 del CPPN).

**6-** No hacer lugar al pedido de indemnización, en los términos del art. 29, inc. 2° del Código Penal, en favor de Adriana Norma Argento y Nelsa Elizabeth Grenethier, que fuera solicitado por el Ministerio Público Fiscal y en consecuencia, rechazar la ampliación de medidas cautelares para garantizar dicho rubro.

**7-** Intimar a los condenados a que, dentro de los cinco días de que quede firme el presente, acrediten el pago de las costas impuestas, cuyo monto asciende a la suma de CUATRO MIL SETESCIENTOS PESOS (\$ 4.700) conf. Acordada N°15/22 de la C.S.J.N.; a través de un depósito o transferencia al Banco de la Nación Argentina, número de cuenta 0000191897, Sucursal Plaza de Mayo, CBU N° 0110599520000001918971, cuyo comprobante deberá remitir a este Tribunal, ello bajo apercibimiento de aplicar al caso una multa del 50% de la suma omitida (arts. 6, 10, 11 y 13 inc. "d" de la ley 23.898, y 501, 516 y conchs. del C.P.P.N.).

Protocolícese y hágase saber.

JULIAN FALCUCCI  
JUEZ DE CÁMARA

HERNAN MOYANO CENTENO  
SECRETARIO DE CÁMARA

USO OFICIAL

